

Colección Facultad de Ciencias Jurídicas  
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA  
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



Julio Ramón García Vilchez

## **COLECCIÓN A CARGO DE**

*Manuel Aráuz Ulloa*  
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas

*Ma. Asunción Moreno Castillo*  
Coordinadora General de Postgrados

*Jairo José Guzmán García*  
Profesor Adjunto de Derecho Civil

*Jessenia Bonilla Olivares*  
Investigadora - Facultad de Ciencias Jurídicas

**Diagramación:** Matilde Bustos López

Impreso por Impresiones Helios, S.A.  
Managua, Nicaragua, Abril 2006

Primer Edición

© Julio Ramón García Vilchez

© Universidad Centroamericana para la presente edición, 2006.

### **Derechos Reservados**

Todos los derechos reservados de conformidad con la legislación nacional e internacional de la materia. Se prohíbe la reproducción total o parcial de la presente obra.

## **Presentación**

Este texto tiene como origen una cordial invitación que me hiciera el Bufete Jurídico de la Universidad Centroamericana (UCA), de la cual soy egresado y alumno fundador, para dictar una charla sobre mecanismos constitucionales para la defensa de los derechos humanos.

Tuve el honor de exponer el tema y dialogar con un abundante y distinguido auditorio de estudiantes, profesionales del derecho y de otros sectores de nuestra población, y quedó en mí no sólo la satisfacción de haber llenado las expectativas de aquel momento, sino también la necesidad de publicar un texto ampliado a otros temas de la misma naturaleza, cosa que hoy cumplimos con esta publicación que pretende ser un aporte académico, que esperamos sea de utilidad para quienes me honren con su lectura.



## **Dedicatoria**

- A quienes fueron mis maestros en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA).
- A las autoridades universitarias de la Universidad Centroamericana (UCA).

## **Agradecimiento especial**

- Al Doctor Manuel Aráuz Ulloa, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, por su decidido apoyo a esta publicación.
- A la Doctora María Asunción Moreno, Coordinadora de Post Grados y Maestrías de la UCA por sus gestiones para la publicación del texto.
- Agradezco a la Licenciada Lissette Flores Flores su importantísimo apoyo logístico en el levantado de textos y correcciones.
- Agradezco a la Doctora Flor Elena Ruiz, funcionaria de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien nos suministró la resolución que se publica en esta obra, cuyo texto fue transcrito fielmente.



## **Datos del Autor**

El Doctor Julio Ramón García Vilchez, es hijo de José Gregorio García Soza y Dolores Vilchez Méndez, ambos ya fallecidos. Se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Pedagógico de Managua, hoy Colegio La Salle y de Doctor en Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA).

Es autor de las siguientes publicaciones: La Crisis Institucional del 92; El Parlamento Centroamericano (PARLACEN); Divulgaciones Constitucionales; Sobre la Interpretación Auténtica de la Ley; El Parlamento en la Coyuntura Actual; Del Informe por Escrito, La Comparecencia y La Interpelación de Ministros, Viceministros de Estado, Presidentes o Directores de Entes Autónomos y Gubernamentales; La Formación de la Ley en Nicaragua (Primera Edición); El Nuevo Rol de las Fuerzas Armadas en Nicaragua; La Independencia del Poder Judicial y su Importancia en la Consolidación del Estado de Derecho; La Jurisdicción Contencioso Administrativa; Reforma Constitucional y Poder Judicial; La Sala de lo Constitucional; Control Constitucional y Seguridad Jurídica; El Control Constitucional en Nicaragua (Dos Ediciones); Estado de Derecho y Buen Gobierno; Soberanía, Supranacionalidad y Derecho Constitucional; Corrupción, Estado de Derecho y Gobernabilidad; El Control de la Administración Pública en Nicaragua; La Justicia Contencioso Administrativa; La Abogacía: Vocación Profesional, Requisitos y Liderazgo; Democracia Participativa: Sistema de Gobierno para el Nuevo Milenio; Ley Anual del Presupuesto y Veto Presidencial; Acceso a la Justicia; Reformas Procesales Penales en América Latina; Constitucionalismo y Globalización; Presidencialismo y Parlamentarismo; La Cuenta del Reto del Milenio; La Independencia del Poder Judicial; Acceso a la Justicia, Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Gobernabilidad; Manual de Amparo; y La Formación de la Ley en Nicaragua (Edición actualizada, corregida y aumentada), entre otros.

Ha desempeñado los siguientes cargos: Representante ante el Consejo de Estado de la República de Nicaragua por el Partido Social Cristiano, Presidente de la Asociación de Técnicos Legislativos de Nicaragua (ATELNIC), Miembro de la Asociación de



Técnicos Legislativos Centroamericanos (ATELCA), Asesor Jurídico Parlamentario, Sub Director General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, Director General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua (julio 1995 – julio 2002), Presidente de la Sala de lo Constitucional (1996-1999), Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo (1999-2001), Director de la Revista Justicia, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de UCEM, Secretario de la Sección en Nicaragua del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Presidente del Club Rotario Managua, entre otros.

Ha sido catedrático de Teoría General del Estado y de la Constitución en la UNICA, de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo en la UAM. Catedrático del área de Post Grados en Derecho en la UCA y Director Académico del área de Maestrías y Post Grados en Derecho de la UCEM. Catedrático Honorario de UCYT, Catedrático de Derecho Constitucional en la UNICIT, galardonado con el grado de HONORIS MAGISTER por UCEM y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de dicha Universidad.

Recientemente, el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa le otorgó el título de HONORABLE EDUCADOR IBEROAMERICANO, por su importante contribución al desarrollo de la Educación y la filosofía pedagógica en Nicaragua y por su constante búsqueda de la excelencia educativa en Iberoamérica.

## INDICE

<b>I. Introducción .....</b>	<b>11</b>
<b>II. El Estado, los Derechos Humanos y modelos de análisis del concepto .....</b>	<b>15</b>
<b>III. Definiciones de Derechos Humanos .....</b>	<b>18</b>
<b>IV. Derechos Civiles, Políticos y Sociales .....</b>	<b>20</b>
<b>V. Las Generaciones de los Derechos Humanos .....</b>	<b>23</b>
<b>VI. Derechos Humanos y Globalización .....</b>	<b>24</b>
1. Historicidad de los Derechos Humanos .....	25
2. Universalidad de los Derechos Humanos .....	31
<b>VII. La protección de los Derechos Humanos .....</b>	<b>35</b>
<b>VIII. La Ley de Amparo vigente .....</b>	<b>38</b>
1. Recurso por Inconstitucionalidad .....	38
2. Recurso de Amparo .....	39
2.1. Antecedentes .....	39
2.2. Concepto de Amparo .....	40
2.3. Derechos y Garantías .....	42
3. Recurso de Exhibición Personal .....	45
3.1. Antecedentes Históricos .....	45
3.2. El Derecho Nicaragüense .....	47
<b>IX. El Defensor de los Derechos Humanos .....</b>	<b>48</b>
1. Antecedentes históricos. El Ombudsman .....	48
2. El Ombudsman en el derecho comparado .....	49
3. El Ombudsman en los Países Escandinavos .....	51
4. El Ombudsman militar en la República Federal de Alemania .....	53
5. Gran Bretaña. The Parliamentary Commissioner for Administration .....	55
6. Otros .....	56



6.1. El Defensor del Pueblo Argentino .....	56
6.2. El Defensor del Pueblo Español .....	57
6.3. El Médiateur Français .....	59

## **X. El caso de Nicaragua. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos .....**

1. Creación de la institución, nombramientos, calidades, suspensión, cesación y destitución, prerrogativas, incompatibilidades e inhibiciones .....	60
2. Objeto de la Ley No. 212, naturaleza y carácter del Procurador, objetivos fundamentales, ámbitos territoriales de competencia, sede, atribuciones del Procurador para la defensa de los derechos humanos. ....	63
3. Procedimiento para la investigación. Iniciación y contenido de la investigación. Tramitación de denuncia, inspección y acceso a documentación, ámbito de competencia, resoluciones y su contenido. Notificación, comunicación e informe a la Asamblea Nacional. Régimen financiero. ....	74

## **XI. Conclusiones Generales .....**

## **XII. Bibliografía .....**

## **XIII. Anexos .....**

1. Ley de Amparo. Ley No. 49, La Gaceta, Diario oficial número 241 del 20 de Dic. de 1988.....	89
2. Ley de Reforma a los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo. Ley número 205 .....	111
3. Sentencia Nº 98. Corte Suprema de Justicia .....	115
4. Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos .....	119
5. Ley de Reforma a la Ley Nº 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ley número 471, La Gaceta, Diario Oficial No. 191 del 09 de Octubre de 2003.....	139
6. Sentencia Nº 9. Corte Suprema de Justicia .....	141
7. Resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Expediente Nº 199-2002 .....	141



## I. Introducción

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preámbulo.  
*"... Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad..."*

*"Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".*

La Asamblea General:

### PROCLAMA

*"La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción."*

#### **Artículo 8. Declaración Universal de Derechos Humanos**

*"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley."*

#### **Artículo 25. Pacto de San José. Protección Judicial**

*"Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales."* (Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Bastarían los párrafos transcritos anteriormente para dejar claramente establecido que las declaraciones y convenciones sobre derechos humanos no se limitan a declaraciones de reconocimiento de los mismos como elementos fundamentales e inseparables de la persona humana, también imponen a los Estados la obligación de su protección, a lo interno y en el campo internacional, mediante los mecanismos o instrumentos constitucionales y legales adecuados y eficaces.

En esta obra presentamos una panorámica general de los mecanismos institucionales internos a los cuales puede recurrir el ciudadano para lograr del órgano jurisdiccional una resolución que lo proteja de los actos de poder que lesionan sus derechos y garantías constitucionales. En este orden de ideas, hacemos referencia a los Recursos por Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal, contenidos en los artículos 187, 188 y 189 Cn. y cuyos procedimientos se encuentran señalados en la Ley de Amparo vigente (Ley N° 49) y sus reformas contenidas en la Ley N° 205, advirtiendo que los procedimientos que se encuentran en la Ley de Amparo han sido presentados en otros textos de nuestra autoría, los cuales pueden consultar.

También nos referiremos a la PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, órgano cuyos titulares son electos por la Asamblea Nacional con una mayoría calificada. Abordamos también el tema del Ombudsman, en sus diferentes manifestaciones y como antecedente de nuestra "Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos".

Es decir, no pretendemos agotar el alcance de esta obra con el análisis de los mecanismos procesales internos contenidos en la Ley de Amparo, sino que lo hacemos extensivo a otros aspectos enfocados desde la perspectiva del Derecho Constitucional.

La temática de los derechos humanos es muy compleja, ya nadie pone en tela de duda su existencia como cualidades inherentes a la persona humana considerada individualmente o en comunidad; las convenciones, pactos o declaraciones sobre derechos humanos imponen a los Estados partes el compromiso de respetar los derechos

y libertades reconocidos en ellos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna y en caso que el ejercicio de esos derechos no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, dictar las normas, de conformidad con sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (Artículos 1 y 2 del Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos).

*Adicionalmente, de la lectura del artículo 25 inciso 1 del Pacto de San José que a la letra dice: 1. "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, AÚN CUANDO TAL VIOLACIÓN SEA COMETIDA POR PERSONAS QUE ACTÚAN EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES OFICIALES;" se confirma la necesidad de mecanismos procesales constitucionales para la defensa de los derechos humanos. Siendo éstos los recursos procesales que cada legislación ha instituido.*

Aquí se nos presenta una interesantísima cuestión en el sentido que el control sobre el acto violatorio de los derechos humanos no sólo se ejerce contra los actos de particulares, mediante y ante los tribunales competentes, sino que también se da contra el acto violatorio de la autoridad, o sea de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones oficiales y es entonces que el control se ejerce contra el poder mismo o contra los actos del poder.

Sobre el control del poder se ha escrito bastante, pero no suficiente; en su magnífico texto titulado: *"El Control del Poder"*, el maestro Diego Valadés se pregunta: ¿Es posible el control del poder?

Y se responde así el Doctor Valadés: *"La expresión 'controlar el poder' contiene un enunciado en apariencia paradójico. La idea misma del poder pareciera no dejar mayores espacios, sino mediante una utilización convencional del término, para pensar en su control. Merced a un gran esfuerzo asociativo se plantea la 'división' del poder, para lo cual se tiene que pluralizar lo que en esencia es unitario. La tesis de que existen varios "poderes" ha permitido*

*jugar muy creativamente con una serie de acomodados y arreglos institucionales que ofrecen un cierto margen de tranquilidad a la sociedad."*

*"Contra lo que se piensa, continúa expresando Diego Valadés, los procesos institucionales que se conocen como 'separación de poderes' no se basan en la disminución de los efectos del poder, sino en su potenciación. La teoría newtoniana de los equilibrios inspiró el inteligente esquema de la separación de poderes. Uno de los efectos de esa relación es que los balances y contrapesos operan como fuerzas crecientes, no menguantes."*

Es decir, y ésta es conclusión nuestra, en la medida que se den más atribuciones a un órgano que ejerce funciones de poder, tantos más se irán incorporando, de manera agregada y progresivamente a otros órganos a fin de mantener el equilibrio en el funcionamiento de los poderes.

Sin embargo, y como lo admite el Doctor Valadés, lo que Peter Evans denomina como eclipse del Estado también influye en la pérdida de control del Estado sobre los procesos que se dan al margen de su control como es la globalización a escala mundial.

No es el objeto de esta obra el profundizar sobre el control político, pero a decir de Carlos Huerta Ochoa, en su obra denominada: *"Mecanismos constitucionales para el control del poder político, éste significa poder exigir responsabilidad política, y existe cuando la Constitución atribuye funciones a distintos órganos y permite dar cuenta a otro del cumplimiento de la función que le han asignado. El control político es control del gobierno y demás órganos constituidos. El mecanismo más eficaz es atribución de funciones estatales a diferentes órganos. Es control político aquél cuyo parámetro de actuación lo constituye un ordenamiento jurídico, y su resultado siempre se basará en razones jurídicas."*

La pregunta de cierre es: ¿Son los mecanismos institucionales para la defensa y protección de los derechos humanos manifestaciones de control político? Se diría que sí, cuando se dirigen a controlar o anular los actos de autoridad.

## **II. El Estado, los Derechos Humanos y modelos de análisis del concepto**

Dentro de la abundante literatura existente sobre derechos humanos se encuentra una obra del notable tratadista Harold J. Laski, titulada: "Los Derechos Humanos", la cual, a decir del Profesor Fernando Volio Jiménez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica, junto con el "Ensayo sobre las Libertades", de Raymond Aron, constituye *"el estudio más serio y profundo acerca de los derechos humanos."*

En esta obra se alude al Capítulo III, de la obra de Lasky, referente al "Estado Moderno", titulado por Laski: "Los Derechos" y en él se plantea la discusión acerca de la existencia del Estado y los derechos humanos en términos de quién existió primero, el Estado o el derecho, y en función de eso, qué institución debe prevalecer.

En derecho político, que en algunas instituciones de educación superior se estudia insuficientemente bajo el nombre de Teoría General de Estado, esta polémica ha generado acaloradas discusiones, aunque en la actualidad ya no cabe duda que el derecho es anterior al Estado y mas aún, que el Estado no crea derechos, sino que los reconoce y la solvencia democrática de ese Estado está determinada por el grado de protección efectiva que en esa sociedad política llamada Estado, se dé a los derechos humanos.

*"El Estado, según Laski, en una palabra, no crea derechos, sino que los reconoce; su carácter se deriva de los derechos que, en un período determinado, son objeto de su reconocimiento."*

*"Por derechos, según Laski, no entendemos la concesión de algunas condiciones históricas poseídas en los albores de la humanidad, y perdidas en el transcurso de los años. Pocas han perjudicado tanto a la filosofía o causado más distorsión, en el terreno de los hechos, como la idea que los derechos representan la recuperación de la herencia perdida. No existe una edad de oro a la que algún día se pudiera volver. La protección que dispensa el Estado Moderno, por lo menos en la civilización occidental, es, en cualquier sentido, más amplia y adecuada que lo fuera en tiempos anteriores."*

**Para Laski:** *"Los derechos, son en realidad, las condiciones de la vida social, sin las cuales no puede ningún hombre perfeccionar y afirmar su propia personalidad."* En relación con la existencia de los derechos, Laski señala que, *"son anteriores a la existencia del Estado, en el sentido que, reconocidos o no, son la fuente de donde se deriva su validez legal."*

*"Los derechos no son categorías históricas, en el sentido que durante algún tiempo hayan obtenido su reconocimiento. No son naturales, según el autor que venimos citando, en el sentido que puedan compilarse en un catálogo permanente e inmutable. Son históricos en el sentido que constituyen una exigencia de la civilización en un tiempo y lugar determinados; y son naturales en el sentido que, bajo esas mismas limitaciones, los hechos demandan su reconocimiento."* (Harold J. Laski. Los Derechos Humanos. EUED 1981).

Sin embargo, aunque los hechos demandan su reconocimiento, las luchas que ha protagonizado la humanidad para lograrlo han sido cruentas.

La Revolución Francesa del siglo XVIII, que propició la aprobación de la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano", de 1789 y la "Declaración de Derechos de Virginia", de 1776, son obras monumentales sobre derechos humanos y fuentes inagotables para el estudio sobre la materia.

A manera de ilustración apuntamos que, la "Declaración de Derechos de Virginia" fue aprobada en la ciudad de Williamsburg, Estado de Virginia, Estados Unidos de América, en los meses de mayo y junio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada por la Convención Francesa en sesión del 2 de octubre de 1789.

Hay diferentes modelos de análisis del concepto de derechos humanos o fundamentales. A criterio de PECES BARBA, citado en el Diccionario Espasa Calve, son los siguientes:

- 1.El modelo iusnaturalista, que afirma que los derechos fundamentales son ostentados por el hombre por su propia condición de tal, o

sea que son propios y derivados de su propia naturaleza, y por consiguiente anteriores al Estado. La propia característica de ser derechos naturales basta para asegurar su efectividad jurídica.

- 2.El modelo escéptico, que rechaza la noción de derechos naturales o fundamentales, y desde la óptica marxista ortodoxa llega a la conclusión que son meros productos de la ideología liberal burguesa que se deben superar. Se parte de la idea de "la negación de que el hombre pueda ser perspectiva válida para las ciencias sociales, lo que supone la negación del fundamento último de los derechos fundamentales que es la conciencia de la dignidad del hombre y de la necesidad de condiciones sociales que hagan posible su libertad." Al mismo rechazo se llega desde posiciones conservadoras obsoletas y antimodernas.
- 3.El modelo positivista voluntarista, según el cual todo derecho, y por consiguiente el derecho de los derechos fundamentales, se crea por voluntad del gobernante, con independencia de su contenido; su origen se encontraría en el poder que respalda el sistema jurídico.
- 4.El modelo pragmático, que tiene su fundamento exclusivamente en la preocupación por las técnicas positivas, en especial procesales, por el estudio en el campo del derecho internacional de los procedimientos dirigidos a su tutela, sin interesarse por la fundamentación y concepto de los derechos humanos.
- 5.El modelo dualista, que trata de superar las versiones iusnaturalistas y positivistas. Su punto de partida es la autonomía de la realidad de los derechos fundamentales, que deben ser estudiados, en primer lugar, como filosofía de los derechos fundamentales, analizando los factores sociales que han influido en su génesis y las corrientes de pensamiento que han contribuido a cimentar su actual sentido.

Un segundo nivel se concretiza por el tránsito de la filosofía de los derechos humanos al derecho de los derechos fundamentales, es decir, la inserción de esos valores en normas jurídicas, o sea, en el derecho positivo, conocida como la positivización de los derechos humanos, y su configuración como derechos públicos subjetivos, lo que al final, configura también la teoría jurídica de los derechos humanos, de su ejercicio, de sus fuentes y de sus garantías, que caracterizan, en gran parte la situación actual de los derechos humanos.

### III. Definiciones de Derechos Humanos

Escudriñando en algunos diccionarios jurídicos sobre el significado de la expresión "derechos humanos", nos encontramos en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Don Manuel Ossorio y Florit, publicado por la Editorial Heliasta de Argentina, la siguiente referencia: *"Hacia 1970 empezó a circular en el lenguaje internacional esta expresión, (se refiere a la expresión "derechos humanos"), que en un principio pareciera superflua, por cuanto su contenido no difiere del tradicionalmente designado como derecho de la personalidad o derechos individuales. Tal vez, aunque con escasa conciencia, en lo más, se quiera aludir al espíritu y a la letra de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. En todo caso, cuando de derechos humanos se habla por diplomáticos, políticos y periodistas se hace referencia, casi siempre a una transgresión, supuesta o real, del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal. De manera más singular aún, tales violaciones se denuncian en algunas repúblicas iberoamericanas que han padecido procesos demagógicos o soportan el flagelo de la subversión social con reacciones vehementes, de las que no pueden estar ajenos ni el error frecuente, ni siquiera el exceso cuando los represores no sólo sirven a la vindicta pública, sino que también encuentran satisfacción corporativa de una venganza específica."*

*"Lo notable es que los que más recuerdan los derechos humanos en países ajenos son los que sistemáticamente, y desde su institución, los han atropellado, de fronteras para adentro, para con sus súbditos, y, más allá de sus límites fronterizos, en invasiones ocasionales o en las enquistadas en sus zonas de influencia, precisamente en los sistemas colectivistas, que se prevalecen de su poderío bélico potencial para impedir toda investigación acerca de la materia."*

La cita, un tanto extensa, tal vez no sea una definición académica de la expresión "derechos humanos", pero a nuestro modo de ver encierra verdades históricas innegables.



El Diccionario Jurídico ESPASA, publicado por la Fundación Tomás Moro, de acuerdo con la Editorial Espasa Calve, define derechos humanos así: *"Derechos y libertades que se incardinan en el más alto escalafón de la jerarquía normativa. Observa TRUYOL que decir que hay "derechos humanos" o "derechos del hombre" en el contexto histórico - espiritual que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee, por el hecho de ser hombre, por su propia dignidad y naturaleza; derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta sagrados."*

- La revista gráfica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) correspondiente al Año 2 – N° 3, titulada *"Derechos Humanos – Una lucha permanente"*, contiene una definición de derechos humanos que textualmente dice: *"Los derechos humanos son: Todas las condiciones imprescindibles que necesita la persona humana para poder utilizar plenamente todas sus facultades y capacidades intelectuales y físicas y satisfacer todas sus necesidades espirituales y materiales. Son tan importantes, tan esenciales y tan fundamentales que sin ellos no podemos vivir como seres humanos. No respetar estos derechos, negarlos o violarlos es crear una situación de conflictos y muchas veces exigir su respeto, es crear tensiones, disturbios y hasta guerras."*

Históricamente, las primeras declaraciones de derechos, con verdadero sentido democrático, que estuvieron dirigidas a la generalidad de la población y no a determinados estamentos privilegiados, fueron: el BILL OF RIGHT inglés del 13 de febrero de 1689, la Declaración de Independencia de las trece colonias norteamericanas, del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en Francia, el 26 de agosto de 1789.

Según Rodrigo Borja, especialista de las relaciones entre sociedad y Estado, del constitucionalismo social y del Estado de Derecho y Ex - Presidente del Ecuador, *"estas tres tablas de derechos constituyen el antecedente histórico de las modernas declaraciones de los derechos de la persona humana."*

*"En efecto, expresa Rodrigo Borja, desde el momento en que en la Declaración Francesa fue incorporada a la primera Constitución revolucionaria de 1791, nació la nueva estructura constitucional formada por una parte orgánica y una parte dogmática. Y desde ese instante los derechos personales pasaron a ser una porción sustancial del Derecho Constitucional moderno."* (Rodrigo Borja. Derecho Político y Constitucional. Fondo de Cultura Económica. México).

#### **IV. Derechos Civiles, Políticos y Sociales**

En el ámbito de protección de derechos individuales existen dos clases de derechos que se relacionan con la persona en sí misma y como miembro de la comunidad política, ellos son: los civiles y los políticos. Los primeros pertenecen a la persona humana considerada en sí misma y se extienden a todos los individuos, nacionales o extranjeros, que habitan en el territorio del Estado. Los segundos pertenecen exclusivamente a la persona en cuanto que es miembro activo del Estado, es decir, en cuanto a su calidad de ciudadano.

En la medida que el individuo realiza manifestaciones propias de la vida privada, goza de derechos civiles, y en la medida que participa en las actividades del Estado, tiene derechos políticos.

Los derechos civiles se conceden generalmente a todas las personas sin distinción de raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, posición económica o cualquier otra condición.

Los derechos políticos, en cambio, se conceden sólo a los nacionales, y entre éstos, sólo a los que tienen la calidad de ciudadanos. No todos los habitantes de un Estado son ciudadanos, lo son sólo los que han cumplido los requisitos especiales que la ley exige para obtener la ciudadanía, que es una calidad jurídica política que acredita a la persona como sujeto activo del Estado y que la acredita para ejercer derechos políticos, o sea para participar en la toma de decisiones que afectan a la colectividad.

Nuestra Constitución Política en su artículo 20 señala que ningún nacional puede ser privado de su ciudadanía, con lo cual se está

reconociendo el derecho a la nacionalidad, y en el artículo 16 Cn. se señala quiénes son nacionales.

Esta doble consideración del individuo como persona humana y como miembro activo del Estado nos lleva a la consideración de que el individuo tiene una doble personalidad, una de carácter privado y otra de carácter público, a la primera corresponden los derechos civiles, a la segunda le corresponde los derechos políticos.

Las nuevas corrientes de pensamiento jurídico que se manifestaron durante el siglo XIX y el XX, como consecuencia del enorme desarrollo industrial y capitalista de Europa y los Estados Unidos de América, pusieron de manifiesto que a la par de los derechos civiles y políticos de la persona, existen también los derechos sociales. Especialmente *"durante el siglo XIX, con la aparición del maquinismo, planteose crudamente la cuestión social, expresa Linares Quintana citado por Rodrigo Borja, cuya eclosión había amagado un tiempo atrás al surgir la gran industria. La máquina, que como simple instrumento hubiera podido quizás liberar al hombre, erigida en un verdadero fin lo esclaviza más, agudizando la explotación del hombre por el hombre, cuyo origen quizás debe buscarse en los comienzos de la historia."*

La máquina sustituyó al hombre y el maquinismo modificó sustancialmente la estructura de la sociedad, la producción industrial sustituyó a la agraria y la tierra cedió su lugar a la máquina, la civilización aldeocampesina devino gradualmente en civilización urbana, la división técnica del trabajo y la producción en serie crearon ilimitadamente riqueza, pero los defectuosos sistemas de distribución de la riqueza creada generaron un estado de injusticia social y de opresión económica y política.

*"Fueron las escuelas socialistas, desde el socialismo utópico hasta el socialismo democrático, pasando por el socialismo marxista, las primeras en proclamar los derechos sociales a favor de los sectores más débiles de la población."* (Rodrigo Borja, Ob. Cit.)

Borja expresa que: *"El derecho constitucional de este siglo (se refiere al siglo XX) a partir de la primera y segunda guerra mundiales,*

*reconoció formalmente la existencia de los derechos sociales y los consagró junto a los demás derechos de la personalidad humana.”*

Las constituciones de esta época, dice Linares Quintana, marcan el comienzo de un vasto constitucionalismo social, que, al lado y frente a los derechos individuales, declara y jerarquiza los derechos sociales, normativizando la idea de que aquéllos deben ser limitados en función del interés de la colectividad. La cual no significa que con anterioridad no existieran los derechos sociales, sino que las constituciones encaraban más bien al individuo en abstracto que al individuo como parte integrante de la sociedad.

Comúnmente se considera a la Constitución mexicana de 1917 y a la Constitución alemana de 1919 como las precursoras del constitucionalismo social.

En nuestro medio, la reforma constitucional de 1995 introdujo en la Constitución de 1987 la novedad de que “la nación nicaragüense se constituye en un Estado Social de Derecho”, lo cual representó un paso cualitativo en el constitucionalismo nicaragüense.

El 6 de Enero de 1918, después de la revolución bolchevique, apunta Rodrigo Borja, el tercer congreso PANRUSO de los soviets expidió la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, redactada por Lenin, que formó parte de la Constitución rusa de ese año. Este es uno de los documentos constitucionales más importantes del primer período de la revolución bolchevique y fue el equivalente de las declaraciones de derechos occidentales.

Los derechos sociales consisten básicamente en prestaciones y servicios a cargo del Estado, en provecho de determinados sectores de la población y tienen como fin dotar al individuo de un mínimo de seguridad económica, preservándole de una eventual privación material grave que puede poner en peligro, si no su vida, por lo menos su dignidad y su libertad tomando en cuenta que la seguridad económica es condición indispensable de la libertad efectiva.

Se ha definido a los derechos sociales como las prestaciones jurídicamente exigibles del Estado a favor de los sectores

económicamente más débiles de la sociedad, otorgados con la finalidad de restablecer la igualdad real entre las personas. Aunque formalmente los derechos sociales están atribuidos a todos los individuos, sociológicamente considerados, son derechos de los sectores de trabajadores y están contenidos en las leyes laborales, agrarias, de seguridad social, de Inquilinato, de defensa del consumidor, etcétera.

## **V. Las “Generaciones” de los Derechos Humanos**

Modernamente se alude a las “generaciones” de los derechos humanos para resaltar o precisar el momento histórico en que han surgido o en que han sido normados. Se habla de tres “generaciones”; la primera generación se identifica con los derechos civiles y políticos. Son derechos individuales que además de implicar una conducta de abstención por parte del Estado son exigibles en todo momento y lugar, excepto algunos cuyo ejercicio se puede restringir en momentos excepcionales.

Los derechos de primera generación son, entre otros:

- El derecho a la vida, la libertad y la seguridad jurídica.
- La eliminación de cualquier forma de esclavitud.
- Prohibición de cualquier forma de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos, infamantes o degradantes.
- Derecho a la libertad y seguridad personal.
- Derecho a una nacionalidad y prohibición de su privación.
- Derecho de asilo.
- Libertad de reunión y asociación.
- Igualdad ante la ley.
- Derecho a participar en las tareas del gobierno.
- Derecho a elegir y a ser electos y optar a cargos públicos.

*Ver: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)*

Los derechos de segunda generación son, entre otros:

- Derecho a la libre determinación.
- Derecho al trabajo en condiciones satisfactorias y de acuerdo con su naturaleza humana.
- Derecho a la seguridad social.
- Derecho a libre sindicalización.

- Derecho de protección a la familia.
- Derecho a un nivel de vida digno.
- Derecho a la educación, el deporte, la recreación y el esparcimiento.
- Derecho a la educación primaria gratuita.
- Derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos.
- Derecho a la información veraz.
- Derecho de acceso a los medios de comunicación social y de réplica cuando sean afectados los derechos y garantías.

*Ver: Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (1966)*

Estos derechos imponen al Estado un deber de hacer.

Los derechos de la "tercera generación" son los derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Ellos son, entre otros:

- Derecho al desarrollo.
- Derecho a la paz.
- Derecho a la asistencia humanitaria.
- Derecho a un medio ambiente sano.
- Derecho a una calidad de vida compatible con la dignidad de la persona humana.
- Derecho a un nuevo orden internacional justo y solidario.
- Derecho a la identidad nacional y cultural.
- Derecho a la propia identidad.

Se dice que existe un anteproyecto de Pacto Internacional de los Derechos de Solidaridad.

*Fuente: Revista Derechos Humanos de la CPDH.*

## **VI. Derechos Humanos y Globalización**

A decir del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (México), Miguel Carbonell, *"los derechos humanos se han convertido en un referente inexcusable de la modernidad; quizá son su signo distintivo, aquello que da cuenta de la evolución del género humano hacia un estado de mayor desarrollo y bienestar, que por el momento, pese a los avances innegables que han sucedido,*

*todavía permanece inalcanzado. Son un "signo de los tiempos", como diría Norberto Bobbio, de los tiempos actuales, pese a que junto con el aumento de las preocupaciones y de las ocupaciones en torno a los derechos, se han producido en los años recientes y se siguen produciendo en la actualidad las más horribles e impensables violaciones de los mismos.*"<sup>1</sup>

Actualmente, y en los Estados democráticos sobre todo, el respeto, ejercicio y promoción de los derechos humanos se han convertido en parámetros o "escalas de evolución" de la legitimidad de los poderes públicos. Los gobiernos que no adoptan políticas de compromiso con los derechos humanos forzosamente presentan fisuras deficitarias en su *"legitimidad de ejercicio"*.

Es imprescindible y además ineludible tratar de comprender los retos, o al menos algunos de ellos, de los derechos humanos en un contexto de globalización (era de la globalización), y por ello es conveniente comenzar analizando dos importantes características de ellos, como son: *su historicidad y su universalidad*.

## 1. Historicidad de los Derechos Humanos

En lo referente a la historia, o historicidad, de los derechos humanos, el tema es atractivo y extenso, y por ello la tentación por abordarlo en toda su amplitud es también atrayente, aunque es mejor evitarla porque correríamos el riesgo de desviarnos del fin de este trabajo. Sin embargo, no podemos dejar de referir algunas ideas relacionadas con la historia, regulación e investigación de los derechos humanos.

El autor Francisco Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, España, nos señala que: "la evolución de los derechos humanos, su carácter esencialmente dinámico, en definitiva, su historicidad, es uno de los puntos de apoyo de la diversidad de técnicas de protección de los mismos con que nos encontramos en el decurso del tiempo, y de modo muy acentuado, en los últimos lustros."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Miguel Carbonell. Los derechos en la era de la globalización. Estado Constitucional y Globalización (compilación).

<sup>2</sup> Francisco Fernández Segado. Los nuevos retos de la protección de los derechos humanos.

La historicidad de los derechos humanos, según el profesor Miguel Carbonell, significa, como ya se dijo antes, que éstos tienen una edad, como lo expresa Bobbio, o sea que van surgiendo en el tiempo en la medida que lo van urgiendo las necesidades sociales e ideológicas y como consecuencia de este peculiar surgimiento “las reivindicaciones” que dan sustento a los derechos no han existido siempre ni se hubieran podido plantear en otros tiempos.

Carbonell pone como ejemplo la esclavitud, “práctica aceptada hasta hace poco menos de 150 años en un país como Estados Unidos, que hoy en día se autoconsidera un verdadero campeón de la democracia; o el de la negación del voto de las mujeres (que no fue reconocido sino hasta 1971 en un país de clara ascendencia democrática como Suiza)”.<sup>3</sup>

Bobbio, según Carbonell, pone como ejemplo el caso de los derechos de los ancianos, que no se hubieran planteado “si no hubiera aumentado la longevidad de la vida humana y, en consecuencia, el número de ancianos que hay en el mundo entero, debido, sobre todo, a los enormes avances que ha tenido en los últimos siglos la investigación biomédica”.

Es bueno recordar, como lo expresa Harold J. Laski, cuyo libro *“El Estado Moderno”*, es considerado, junto con el *“Ensayo sobre las Libertades”*, de Raymond Aron, el estudio más serio y profundo acerca de los derechos humanos, “que el Estado no crea derechos, sino que los reconoce; su carácter se deriva de los derechos que, en un período determinado, son objeto de su reconocimiento.”<sup>4</sup>

A manera de reseña histórica en torno a los derechos humanos, transcribimos, con fines ilustrativos solamente las partes conducentes que sobre el tema contiene el Diccionario Jurídico, publicado por la Editorial Espasa, Calpe S.A. de Madrid, España (1998) y la fundación Tomas Moro, Madrid (1991), que textualmente dicen:

---

Revista Contribuciones 4/1988.

<sup>3</sup> Miguel Carbonell. Ob. Cit

<sup>4</sup> Harold J. Laski. Los derechos Humanos. Editorial Universidad Estatal a Distancia (E.U.E.D.). San José, Costa Rica. 1981



*"La idea de que existen derechos del hombre anteriores al Estado tiene sus raíces en la filosofía helénica de los estoicos (PANECIO y CICERÓN) y primeros cristianos. En la edad media, los primeros textos de reconocimiento se desarrollan en el marco de la organización feudal. Bajo la forma de la defensa de la autodeterminación religiosa resurge la teoría de la rebelión protestante (doctrina de los husitas, derecho de resistencia). La revolución puritana contra los Estuardos llevaría a la formulación legal de las libertades individuales: HABEAS CORPUS ACT (1679), BILL OF RIGHTS (1688), ACT OF SETTLEMENT. La teoría política de la ilustración sentó los fundamentos doctrinales de los derechos individuales, con la racionalización de las ideas de derecho natural y contrato social. Locke defendió la propiedad como derecho fundamental, Rousseau, la libertad y Montesquieu integró la libertad en el proceso del poder político como objetivo a preservarse mediante la separación de poderes. El reconocimiento positivo se produce con los documentos de la revolución americana (Declaración de Independencia de 1776 y Bill of Rights) y en la Declaración Francesa de los derechos de hombre y el ciudadano (1789)."*<sup>5</sup>

Resumiendo, la defensa de los derechos individuales se inicia con la reivindicación de la libertad religiosa, la defensa del derecho a la propiedad y de la libertad política, más adelante se incorpora a ese catálogo los llamados derechos económicos y sociales, que no están destinados a garantizar la libertad frente al Estado, sino a exigir prestaciones del mismo que hagan realidad aquéllos.

Estos derechos se incorporan a las constituciones a partir de 1945 (antes de encontraban en la mexicana de 1917 y la de Weimar de 1919) y sobre todo en las constituciones de corte socialista. Esta es la etapa de la constitucionalización.

Una etapa posterior a la constitucionalización de los derechos del hombre es la internacionalización de los derechos y de los textos que los reconocen, cuyo exponente máximo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948.

---

<sup>5</sup> Diccionario Jurídico Espasa. Págs. 333/334.

Hay que advertir que, la proclamación y defensa de los derechos humanos en declaraciones, tratados, convenciones y normas constitucionales, requieren para su vigencia y eficacia de instrumentos judiciales, o sea, tribunales judiciales o instituciones especiales como el Ombudsman, a los cuales nos referiremos más adelante.

En el sentido de la regulación, investigación y exposición de los derechos humanos, el Doctor Iván Escobar Fornos, académico nicaragüense, autor de meritorias obras sobre derecho constitucional y otras ramas del derecho, Ex - Presidente de la Asamblea Nacional y Ex - Presidente del Poder Judicial, nos señala que los derechos humanos son regulados, investigados y expuestos desde tres dimensiones y califica como excelente ruta metodológica para comprenderlos y conocer su efectividad y naturaleza, esa ruta tridimensional.

Al efecto el Doctor Escobar Fornos expresa: *"En su primera dimensión los derechos humanos aparecen como potestades que poseen los particulares para defenderse y enfrentarse al Estado violador. En la segunda dimensión, los derechos humanos se contemplan actuando en las relaciones entre los particulares."*<sup>6</sup>

*"La interrelación entre los derechos humanos, según el Doctor Escobar Fornos, puede ser complementación o delimitación. En las relaciones de complementación se estudian los límites o fronteras establecidas entre los derechos humanos a fin de evitar que un derecho invada o anule a otro. El segundo tipo de relación se refiere a la forma de hacer efectivo un derecho mediante la consagración o vigencia de otro. Por ejemplo, la libertad de prensa se hace efectiva mediante la libertad de pensamiento y de expresión. En su tercera dimensión los derechos humanos se universalizan mediante declaraciones, convenciones y tribunales internacionales que juzgan a los Estados ante los reclamos de los particulares."*<sup>7</sup>

Como producto del desarrollo dinámico de los derechos humanos hoy podemos señalar, como lo hace el profesor Francisco Fernández

<sup>6</sup> Iván Escobar Fornos. Los derechos humanos y el control del poder privado. Temas de derecho público. Instituto de Estudios Constitucionales, Carlos Restrepo Piedrahita. Universidad Externado de Colombia.

<sup>7</sup> Iván Escobar Fornos. Ob. Cit

Segado, Catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, España, la existencia de al menos tres generaciones de derechos: "1) Los derechos individuales que surgen con el constitucionalismo liberal clásico de fines del siglo XVIII y principios del XIX; 2) Los derechos sociales y económicos, que afloran en el constitucionalismo de entreguerras entrelazados, como advierte Mirkine - Guetzévitch, con la tendencia general del constitucionalismo de esa época a la racionalización del poder, o lo que es igual, a la penetración del derecho en todas las manifestaciones de la vida social, línea tendencial que encuentra en las constituciones de México de 1917 y de Weimar de 1919 su manifestación culminante, y 3) Los derechos de la tercera generación, de reciente aparición, y que constituyen un ciclo aún no cerrado, dentro del cual encontramos un conjunto de derechos que se asientan, como bien significara Vasak, en la solidaridad."<sup>8</sup>

Un tema que presenta sus propios perfiles, pero que, a nuestro juicio tiene relación con las mutaciones históricas de los derechos humanos es el control del "poder privado", que en forma bastante enunciativa se encuentra en la obra del Doctor Iván Escobar Fornos, titulada: "Los derechos humanos y el control de poder privado" y desarrollado con más amplitud por el profesor Francisco Fernández Segado en su ponencia: "Los nuevos retos de la protección de los derechos", en la revista de CIEDLA, "Contribuciones" N° 4/1998, dedicada al tema Derechos Humanos: Actualidad y Perspectivas.

Al respecto el Doctor Escobar Fornos expresa que. "En la sociedad moderna existe gran cantidad de grupos de interés que defienden con mayor fuerza sus propios fines y objetivos. Grupos que pueden ser grandes o pequeños, pero todos manejan iguales dimensiones, algunos tienen gran poder político, cultural, económico o social. Su poder penetra en la opinión pública, en la política y en la cultura. Poseen el poder-saber y, como consecuencia, tienen la capacidad de conducir y orientar a la sociedad y al Estado. Entre estos grupos de interés, poder y saber, se encuentran: empresas, universidades, iglesias, sindicatos, gremios profesionales, partidos políticos, etc. Aislado, con poco poder, encontramos al individuo que lucha con poca efectividad para imponer sus planteamientos y reclamos.

---

<sup>8</sup> Francisco Fernández Segado. Ob. Cit.

La violación de los derechos humanos al individuo aislado y aún a los pequeños grupos de los poderes privados por parte de los grandes grupos de poder o personas individualmente poderosas ya es frecuente en la sociedad moderna.”

Por ello, continúa exponiendo el Doctor Escobar Fornos, “...se conceden recursos para su defensa (se refiere a la defensa de los derechos humanos), no sólo en contra de la autoridad, sino también en contra de aquellas personas privadas que gozan, quizá en igual o mayor nivel que el del mismo Estado.”

Por su parte el profesor Fernández Segado se refiere al tema en los siguientes términos: “Hoy buen número de derechos encuentran su satisfacción en el seno de complejas relaciones sociales y económicas que enfrentan al individuo con los grandes grupos de poder (social o económico), de forma tal que, como bien advierte Barbera, los condicionamientos que esos “poderes privados”, o simplemente ciudadanos particulares situados en una posición predominante, pueden llegar a ejercer sobre la efectiva vigencia de ciertos derechos es de tal naturaleza que la tutela de los derechos se convertiría en meramente nominal si esas relaciones inter privados quedaran al margen de los mecanismos constitucionales de garantía de los derechos.”

A continuación y para reforzar el anterior argumento, el profesor Fernández Segado transcribe partes de la célebre sentencia de 5 de septiembre de 1958, dictada por la Corte Suprema de Argentina, que en sus partes conducentes dice: “Además de los individuos humanos y del Estado, hay ahora una tercera categoría de sujetos, con o sin personalidad jurídica, que sólo raramente conocieron los siglos anteriores: los consorcios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las grandes empresas que acumulan casi siempre un enorme poderío material y económico. A menudo sus fuerzas se oponen a las del Estado y no es discutible que estos entes colectivos representan, junto con el progreso material de la sociedad, una nueva fuente de amenazas para el individuo y sus derechos esenciales.

Si, en presencia de estas condiciones de la sociedad contemporánea, los jueces tuvieran que declarar que no hay protección constitucional

de los derechos humanos frente a tales organizaciones colectivas, nadie puede engañarse de que tal declaración comportaría la de la quiebra de los grandes objetivos de la Constitución y, con ella, la del orden jurídico fundamental del país.” (Sentencia, Corte Suprema de Argentina, 5 de septiembre de 1958, caso Samuel Kot).

*“En consecuencia, dice el profesor Fernández Segado, con la problemática expuesta, nos parece inequívoco que debiera admitirse de modo generalizado el amparo frente a particulares, y ello no acontece así en muchos ordenamientos, por lo menos de modo directo, lo que no hace sino revelarnos una más de las muchas contradicciones o incongruencias del Estado constitucional de nuestro tiempo, que pese a tener que afrontar y dar adecuada respuesta a las demandas que plantean situaciones, económicas y culturales (al margen ya de las políticas), radicalmente diferentes a las del siglo pasado, sigue, sin embargo, operando con los viejos esquemas jurídicos del Estado liberal.”*<sup>9</sup>

Nicaragua no escapa a esas contradicciones, que produce la convivencia entre el viejo Estado Constitucional de Derecho y el nuevo Estado Social que reconoce nuestra Constitución.

## 2. Universalidad de los Derechos Humanos

Hemos señalado anteriormente que los derechos no siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, los derechos, y sobre todo los derechos humanos, son producto de su tiempo y de las necesidades concretas de las sociedades y de los individuos.

Al final de la Segunda Guerra Mundial se dio el inicio de la internacionalización de los derechos humanos, o sea el proceso mediante el cual éstos, pasan del ámbito nacional a que estaban circunscritos al plano global, al inicio mediante declaraciones, y posteriormente mediante tratados y convenciones internacionales.

Esta internacionalización trae como consecuencia dos fenómenos interrelacionados, el primero es la conformación de un “derecho transnacional” en el cual se identifican cuatro sistemas supranacionales

---

<sup>9</sup> Nota: Se refiere al siglo XIX.

diferenciados de protección de derechos humanos; el global, o sea el sistema de Naciones Unidas y los tres sistemas regionales, el europeo, el americano y el africano, y el segundo consecuencia del primero, que la legitimidad de un estado se mide o se fundamenta por el grado de respeto a los derechos humanos.

Los derechos humanos se han convertido *"en un elemento legitimador de las relaciones políticas y sociales, tanto desde el punto de vista interno como del externo y ha sido inevitable su transformación en un elemento de política internacional en el que intervienen no sólo dos Estados, sino una gran variedad de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, constituidas frecuentemente en redes que desafían cualquier intento de control."*<sup>20</sup>

Ahora bien, el hecho que el desarrollo de los derechos humanos se haya producido a través de una evolución histórica paralela al desarrollo de la civilización no significa que en determinado momento no se les pueda calificar de universales, tanto por lo que respecta a sus contenidos y sujetos, como por lo que hace a los obligados a su respeto.

Norberto Bobbio sostenía que los derechos humanos *"tienen una edad, son producto de su tiempo y de las necesidades concretas que desarrollan las sociedades y los individuos dentro de unas coordenadas espaciales y temporales determinadas"*, lo cual nos induce a concluir que la universalidad de los derechos humanos es eminentemente progresiva y de acuerdo al desarrollo y necesidades de las sociedades y los individuos.

La universalidad de los derechos humanos está respaldada por razones teóricas y normativas, las primeras tienen su razón de ser precisamente en la común asignación que de ellos hacen los textos constitucionales *"a todos lo seres humanos"*, sin mediar restricciones y discriminaciones que los conviertan en status de privilegios más que en instrumentos de protección de igual dignidad para todos.

Actualmente, la doctrina define a los derechos humanos como *"todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a*

---

<sup>20</sup> Sergio López Ayllón. Globalización y Transición del Estado Nacional.

*todos los seres humanos en cuanto dotados de status de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar*" (Ferrajoli, citado por Miguel Carbonell).

Adicionalmente, hay que distinguir entre universalidad con respecto a los titulares y universalidad con respecto a los destinatarios. La primera explica que los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos con independencia de cualquier título o tipo de adquisición, la segunda explica que los obligados son no solamente los seres humanos como individuos, sino también los grupos y Estados.

La caracterización de los derechos humanos o derechos fundamentales no solamente sirve para justificar su cobertura, sin distinción a todos los seres humanos y a todas las naciones del mundo, sino también es importante para justificar su INALIENABILIDAD y su NO NEGOCIABILIDAD.

Normativamente los derechos humanos son patrimonio de todos, de la humanidad entera. La Declaración Universal de Derechos Humanos, monumental declaración sobre el tema, hace alusión a la universalidad de los derechos humanos en los siguientes términos: *"La Asamblea General: Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y APLICACIÓN UNIVERSALES y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción."* (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948).

Ahora bien, si los derechos humanos son inalienables y no negociables por ser "de todos", esto quiere decir que están fuera de la lógica neoabsolutista del mercado que todo lo traduce a términos de inversión, productividad o rentabilidad y ganancias sin límites. Al no ser alienables ni disponibles, los derechos se convierten, como lo expresa Ernesto Garzón Valdés, citado por Carbonell, en un verdadero "coto vedado."

La base normativa que sustenta la universalidad de los derechos humanos se encuentra en los diferentes pactos, tratados y convenciones internacionales sobre el tema. El punto de partida, conceptual, no temporal, se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de diciembre de 1948, la cual junto con la Carta de la ONU, es el embrión del verdadero “constitucionalismo global.”

Norberto Bobbio, citado por Carbonell, expresa al respecto: “con la Declaración de 1948 se inicia una fase importante en la evolución de los derechos: la universalidad y la positivación, haciéndolos pasar de “derechos de los ciudadanos” a verdaderos derechos de (todos) “los hombres”, o al menos, “derechos de ciudadanos de esa ciudad que no conoce fronteras, porque comprende toda la humanidad.”

Un detalle que hay que señalar es que caracterizar los derechos humanos como universales no significa ignorar que éstos son producto de una visión occidentalista o eurocéntrica de la vida, aferrarse a tal criterio sería negar la universalidad de los derechos, que a estas alturas de la civilización son patrimonio de la humanidad.

Existen autores que critican la universalidad de los derechos humanos a partir de la proclamación de la declaración de 1948.

Boenaventura de Sousa critica la declaración de 1948 diciendo que *“fue redactada sin la participación de la mayoría de los pueblos del mundo.”*

Posiciones como la de Boenaventura de Sousa han generado gran polémica que requiere entablar un diálogo intercultural para enriquecer posiciones. Javier de Lucas expresa que: *“...se trata de evitar los extremos. De un lado, el modelo pretendidamente universalista, pero que en realidad responde al imperialismo de una cultura dominante, proyectada e impuesta como universal, aunque sea bajo la apariencia de una concepción abstracta ‘y por encima’ de circunstancias de tiempo y lugar.”*

De Sousa es partidario de superar contradicciones y de la necesidad de “trascender el debate sobre el universalismo y el relativismo



cultural” sobre la base de amplios diálogos y no “defender ni el universalismo ni el relativismo, sino más bien el cosmopolitismo, es decir, la globalización de las preocupaciones morales y políticas y las luchas contra la opresión y el sufrimiento.”

Concluyendo diríamos, siguiendo a Miguel Carbonell, que la concepción y tradición occidental de los derechos humanos debe mantener una posición abierta a nuevas posturas o posiciones que provengan de diferentes coordenadas ideológicas, religiosas o políticas. Esto es razonable y factible, por ejemplo, en el caso de los derechos de los pueblos indígenas, que han inspirado y nutrido el constitucionalismo latinoamericano, que poco a poco ha ido adquiriendo sus propios perfiles independientemente de las tradiciones constitucionales europeas.

## **VII. La protección de los Derechos Humanos**

*“Como expresa Bobbio, el auténtico problema de nuestro tiempo respecto a los derechos humanos no es ya fundamental, sino el de protegerlos. Pues bien, con ALCALA ZAMORA CASTILLO, los modos de protección pueden buscarse por dos derroteros: a) En el cuadro de las instituciones nacionales protectores de los derechos humanos, y, b) Como jurisdicción internacional a la que puedan acudir individuos.”* (Diccionario Jurídico ESPASA).

En esta obra abordaremos el tema “Mecanismos Institucionales para la defensa de los Derechos Humanos” y nos referiremos a los recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Habeas Corpus, y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o sea que el título de este libro ya limitó los alcances de lo que podemos exponer en lo referente a la protección de los derechos humanos.

En primer lugar, y después del introito que hemos presentado en páginas anteriores, y que esperamos pueda ser útil, consideramos adecuado precisar el significado del término “mecanismo”. Hablamos de mecanismos de control de la constitucionalidad de la ley, de mecanismos de control de la administración pública, de mecanismos de control de los bienes y recursos del Estado, de mecanismos de control político, de mecanismos de control social, etcétera, pero qué significa MECANISMO?

El Diccionario ilustrado Océano de la Lengua Española define el término mecanismo como: Estructura de un cuerpo y combinación de sus partes constitutivas. Medios prácticos que se emplean en las artes. Esta definición no tiene contenido jurídico. El Diccionario Océano de Sinónimos y Antónimos nos señala que el término MECANISMO es sinónimo, entre otros de: instrumento,

El mismo diccionario señala la palabra MEDIO como sinónimo de: *"Procedimiento, proceso, vía, técnica, MECANISMO, INSTRUMENTO... etcétera."*

Para los efectos de esta obra preferimos usar los términos de procedimientos o medio, para referirnos a la defensa jurídica de los derechos humanos, aunque el término mecanismo de defensa ya se arraigó en la jerga jurídica y por tanto ya es de uso común en el lenguaje constitucional.

Procedimientos de defensa, medios de defensa, instrumentos de defensa ya son de uso común para referirse a la defensa jurídica de los derechos humanos.

Al igual, el término control, también es de uso jurídico arraigado en el derecho constitucional y la misma Constitución Política de Nicaragua se refiere al Control Constitucional (artículo 187 y siguientes) que se ejerce por los procedimientos contenidos en la Ley de Amparo para la tramitación de los recursos por medio de los cuales se administra la justicia constitucional.

En el Título X de nuestra Carta Magna se encuentran las disposiciones referentes a la Supremacía de la Constitución, su reforma y de las leyes constitucionales.

En el Capítulo II del Título X se encuentran las disposiciones referentes al Control Constitucional que se ejerce por medio de los tres recursos que a continuación nos referiremos y cuyos procedimientos están contenidos en la Ley de Amparo y sus reformas (Ley N° 49 y Ley N° 205).

El artículo 187 Cn. establece el Recurso por Inconstitucionalidad *"en contra de toda ley, decreto o reglamento, que se oponga a lo*

*prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser Interpuesto por cualquier ciudadano."*

La Ley de Amparo, ley de rango constitucional, que regula este recurso, el de Amparo y el de Habeas Corpus, establece que: *"El Recurso por Inconstitucionalidad procede contra toda ley, decreto ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política."*

Esta disposición de la Ley de Amparo agrega el DECRETO LEY, que no está contemplado en la Constitución Política y la Ley N° 205, denominada "Ley de Reforma a los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo", prescribe que: *"El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano, cuando una ley, decreto o reglamento, y en general cualquier acto normativo de rango inferior a la Constitución Política, se oponga a lo prescrito por ella, en consecuencia, no procede el Recurso por Inconstitucionalidad contra la Constitución y sus Reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación."*

Como puede verse, la Ley N° 205 elimina al decreto – ley como objeto del Recurso por Inconstitucionalidad, pero incluye como sujeto a *"cualquier acto normativo de rango inferior a la Constitución Política que se oponga a lo prescrito en ella"*, lo cual quiere decir que cualquier norma jurídica, que no tenga rango de norma constitucional (leyes constitucionales) puede ser atacada por medio del Recurso por Inconstitucionalidad, exceptuándose de esa situación la misma Constitución y sus reformas excepto que, una vez entradas en vigencia se alegue la existencia de vicios de procedimiento.

Esta última excepción pareciera tener razón en el sentido que la Constitución es aprobada por el poder constituyente primigenio u originario y sólo él puede cambiarla, y, en el caso de la reforma parcial, si no puede ser vetada por el Presidente de la República una vez aprobada sólo puede ser atacada mediante el Recurso por Inconstitucionalidad, en casos de vicios de procedimiento.

La Ley N° 205, a que nos hemos referido, fue declarada parcialmente inconstitucional mediante sentencia N° 98 de las nueve de la mañana

del día diecisiete de agosto del año dos mil uno, en la parte que dice: *"y en general cualquier otro acto normativo de rango inferior."*

En lo que se refiere al Recurso de Amparo, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia N° 98, atrás relacionada, declaró también Inconstitucional la reforma al artículo 51 L.A. en la parte que dice: *"o cualquier otro acto o resolución legislativa."* Ver Anexos.

La Ley N° 212 crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo análisis abordaremos en el Capítulo X de esta obra.

## **VIII. La Ley de Amparo vigente**

La Constitución Política en el Capítulo II del Título X (artículos 187 a 190) denominado CONTROL CONSTITUCIONAL establece los tres recursos por medio de los cuales se ejerce ese control y señala contra qué normas, actos u omisiones y actos restrictivos de la libertad personal caben. La Ley de Amparo regula los procedimientos para hacer efectivos esos recursos. El artículo 1 de la Ley de Amparo, ley de rango constitucional señala que su objeto es regular los recursos por Inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal referidos en los artículos 187, 188, 189 y 190 de la Constitución Política, cabe señalar que el artículo 190 Cn. no se refiere a ningún recurso, solamente dice que la Ley de Amparo regula los recursos.

### **1. Recurso por Inconstitucionalidad**

El artículo 187 Cn. señala que: *"Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución Política, el cual podrá ser interpuesto por cualquier ciudadano"*. El artículo 2 de la Ley de Amparo vigente establece que *"El Recurso por Inconstitucionalidad procede contra toda ley, decreto ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política"*. Ver en Anexos parte resolutive de la Sentencia N° 98. Corte Suprema de Justicia.

El artículo 5 de la Ley de Amparo vigente establece que los Tribunales de Justicia observarán siempre el principio de que la Constitución

Política prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional y deben dirigir todos los trámites del recurso, impedir su paralización y obligar que se cumpla el principio de economía procesal, prevenir y sancionar los actos contrarios a la lealtad y buena fe que deben observarse en el recurso, hacer efectivos los principios de igualdad, publicidad y celeridad del recurso y tomar todas las providencias necesarias para el cumplimiento de las resoluciones que se dicten. No hay caducidad en estos recursos.

## **2. Recurso de Amparo**

### **2.1. Antecedentes**

De conformidad con el artículo 188 Cn. se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

A decir de Ignacio Burgoa en su clásica obra denominada *El Juicio de Amparo* y refiriéndose a Nicaragua, *"Es en este país centroamericano donde nuestro juicio de amparo ha tenido una determinante influencia en la estructuración del sistema jurídico de protección a los derechos del gobernado y de control constitucional. Nicaragua, en efecto adoptó nuestra institución en sus principios y lineamientos generales, sin haber suprimido, empero el habeas corpus, no obstante que dentro de la teleología del amparo este recurso pudiese haber quedado subsumido. Tan es así, que la Ley de Amparo nicaragüense regula a ambos medios de preservación"*.

El maestro Ignacio Burgoa, continúa expresando que *"el amparo en Nicaragua es un verdadero medio de control constitucional"*, y cita para ello lo expresado por el jurista nicaragüense Arístides Somarriba, en el Seminario sobre Amparo, Habeas Corpus y otros Recursos Similares, efectuado en la ciudad de México en Agosto de 1961, puesto que a través de él, *"El Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema de Justicia, no sólo protegen los derechos constitucionales del hombre frente a los abusos del poder, sino que tutelan el régimen constitucional íntegro manteniendo a los tres poderes dentro del*

*ámbito de sus funciones, impidiendo que se extralimiten y de esta manera invadan la esfera de los derechos individuales". Funciona, además, conforme a los principios que caracterizan al amparo mexicano... contándose entre ellos los de Iniciativa a instancia de la parte agraviada, de la existencia del agravio personal y directo, de definitividad, etc., y en cuanto a la suspensión del acto reclamado hay puntuales semejanzas con nuestra institución".*

Finalmente, el maestro Burgoa expresa: *"Es altamente satisfactorio y nos colma de legítimo orgullo constatar que en un país, como Nicaragua, se haya adoptado nuestro juicio de amparo que se proyecta ya internacionalmente".*

Ignacio Burgoa finaliza su referencia a Nicaragua citando las palabras del notable jurista nicaragüense Aristides Somarriba que refiriéndose al aporte mexicano en materia de amparo expresa: *"Insisto y repito que México ilumina al mundo en la búsqueda de los medios más rápidos y eficaces para la protección de los derechos del hombre y para el mantenimiento de la constitucionalidad".*

## 2.2. Concepto de Amparo

Como dijimos al principio es tarea compleja elaborar definiciones, pero por razones didácticas se impone la necesidad de hacerlo.

Diríamos que cómo recurso, el amparo es un instrumento procesal del cual se puede valer una persona agraviada por cualquier acto de autoridad en sentido lato para obtener la protección, o restitución en su caso, del goce de los derechos y garantías consignadas en la Constitución Política a su favor.

Usando los términos de nuestra Constitución Política y la Ley de Amparo vigente diríamos que el amparo es un recurso procesal establecido por la ley a favor de parte agraviada contra toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

Se puede decir que en nuestra legislación el amparo es:

- a) Un procedimiento, entendiendo el término procedimiento como una serie de trámites que se tienen que llenar para llegar a una resolución;
- b) Que se inicia a instancia de parte agraviada;
- c) Ante los órganos jurisdiccionales que aplican la justicia constitucional;
- d) Contra un acto de la autoridad o de sus agentes que se considera lesivo;
- e) Con el objeto de invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad.

A continuación y a manera de ilustración, presentamos algunas definiciones de amparo tomadas del *Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo* de Ignacio Burgoa O. Editorial Porrúa:

Héctor Fix Zamudio: El amparo es *"un procedimiento armónico, ordenado a la composición de los conflictos suscitados entre las autoridades y las personas individuales y colectivas por violación, desconocimiento e incertidumbre de las normas fundamentales"*.

Octavio A. Hernández: *"El amparo es una de las garantías componentes del contenido de la jurisdicción constitucional mexicana, que se manifiesta y realiza en un proceso judicial extraordinario, constitucional y legalmente reglamentado, que se sigue por vía de acción, y cuyo objeto es que el Poder Judicial de la Federación o los órganos auxiliares de éste, vigilen imperativamente las actividades de las autoridades, a fin de asegurar por parte de éstas, y en beneficio de quien pida el Amparo, directamente el respeto a la Constitución e indirectamente a las leyes ordinarias en los casos que la propia Constitución y su Ley Reglamentaria prevean"*.

Humberto Briseño Sierra señala que: *"A priori, el amparo es un control constitucionalmente establecido, para que, a instancia de parte agraviada, los tribunales federales apliquen, desapliquen o inapliquen la ley o el acto reclamado"*.

Juventino V. Castro sostiene que: *"El amparo es un proceso concentrado de anulación —de naturaleza constitucional— promovido por vía de acción, reclamándose actos de autoridad y que tiene como finalidad el proteger exclusivamente a los quejosos contra garantías expresamente reconocidas en la Constitución; contra los actos conculcatorios de dichas garantías; contra la inexacta y definitiva atribución de la ley al caso concreto; o contra las invasiones recíprocas de las soberanías, ya federal, ya estatales, que agraven directamente a los quejosos, produciendo la sentencia que concede la protección el efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la violación reclamada —si el acto es de carácter positivo—, o el de obligar a la autoridad a que se respete la garantía violada, cumpliendo con lo que ella exige, si es de carácter negativo"*.

Alfonso Noriega: *"El amparo es un sistema de defensa de la Constitución y de las garantías individuales, de tipo jurisdiccional, por vía de acción, que se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal y que tiene como materia leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, o impliquen una invasión de la soberanía de la Federación en la de los Estados o viceversa y que tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la reposición del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos retroactivos al momento de la violación"*.

Las definiciones transcritas se refieren al amparo en la legislación mexicana, pero como puede fácilmente observarse, contienen elementos comunes al nuestro, siendo esto lógico ya que como lo señala Ignacio Burgoa en su obra *El Juicio de Amparo*, Nicaragua adoptó de la institución mexicana "sus principios y lineamientos generales".

### 2.3. Derechos y Garantías

La Constitución Política y la Ley de Amparo vigente en sus artículos 188 y 3 respectivamente señalan que el recurso de amparo cabe contra violaciones o intento de ella de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.



La Constitución Política vigente en su Título IV contiene los "Derechos, Deberes y Garantías del pueblo nicaragüense" distribuido así:

Capítulo I	Derechos Individuales
Capítulo II	Derechos Políticos
Capítulo III	Derechos Sociales
Capítulo IV	Derechos de la Familia
Capítulo V	Derechos Laborales
Capítulo VI	Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica.

Para efectos del estudio del Recurso de Amparo estimamos conveniente presentar algunas ideas, un tanto generales sobre derechos y garantías.

Etimológicamente la palabra derecho deriva de la voz latina "*directus*" que significa lo derecho, lo recto, lo rígido. Sin embargo, los romanos para referirse a lo que conocemos como derecho utilizaron la voz "*ius*".

La palabra derecho puede entenderse bajo tres acepciones:

- 1) Como un conjunto de normas que rigen la actividad humana en la sociedad cuya inobservancia amerita una sanción, éste es el derecho objetivo.
- 2) Como las facultades pertenecientes a cada individuo, éste es el derecho subjetivo.
- 3) Como equivalente de justicia, como portador del valor justicia.

Como hemos dicho el derecho subjetivo se ha considerado como una facultad que la norma jurídica objetiva concede a cualquier sujeto. Esa facultad conlleva no sólo un poder de actuar, sino también una potestad de exigir.

Todo derecho subjetivo implica necesariamente una obligación correlativa, la cual está a cargo de un sujeto distinto.

Para efectos del amparo el agraviado reclama por la violación de su derecho subjetivo a un órgano estatal que está facultado para restablecerlo, obligación que corre a cargo del funcionario representante del Estado.

La palabra garantía proviene del término anglosajón *warranty* que significa asegurar, proteger, salvaguardar y tiene su uso en el derecho privado. En el derecho público la noción nos llega de los textos revolucionarios franceses, especialmente del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que sostenía que *"toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ... no tiene Constitución"*.

Kelsen identificaba las *"garantías con los procedimientos o medios frente a normas jurídicas secundarias"*, o sea los medios para garantizar el que una norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creación y contenido. (Hans Kelsen. *Teoría General del Estado*).

Carl Schmitt utilizó la denominación de *"garantías institucionales"* para referirse a cierto sector de normas fundamentales que, sin vincularse directamente a derechos individuales, merecen una estima superior por sus finalidades políticas o sociales, elevándolas a la categoría de preceptos de esencia (supremos), sustrayéndolas de la posible interpretación cambiante del legislador ordinario. (Carl Schmitt. *Teoría de la Constitución*. Fix Zamudio. *La defensa de la Constitución*).

George Jellinek prefiere dar una visión distinta a los autores referidos y expresa que significan garantías constitucionales tanto los mecanismos internos de defensa como los mismos derechos tutelados, es decir iguala genéricamente *"la defensa de la Constitución con las garantías stricto sensu"*.

Independientemente de las autorizadas opiniones de los tratadistas citados y otros que han abordado el tema desde distintas ópticas, las nociones de garantías y derechos constitucionales, apuntan a destacar la importancia que tiene asegurar los derechos proporcionándoles las garantías para su efectividad, ello es el objeto de la Justicia Constitucional o sea mantener la supremacía constitucional garantizando al ciudadano el acceso a la misma y la protección y efectividad del ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales.

### 3. Recurso de Exhibición Personal

El Recurso de Habeas Corpus del derecho anglosajón “tiene por objeto proteger la libertad personal contra toda detención y prisión arbitraria, independiente de la categoría de la autoridad que las hubiere ordenado, teniendo sin embargo, su ejercicio las siguientes limitaciones: no es procedente en los casos de felonía y traición, cuando estos delitos se expresan en la orden de prisión” (Ignacio Burgoa, *Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo*)

Según el Diccionario Jurídico (Espasa) el Habeas Corpus es un *“procedimiento de origen inglés, destinado a proteger al individuo de las detenciones arbitrarias. Mediante la expedición del “writ (escrito) of habeas corpus ad subjiciendum” el juez ordena al carcelero la presentación ante él del encarcelado y que exponga las razones de su detención, para decretar a continuación su rápido enjuiciamiento o su libertad”*.

En términos generales el Habeas Corpus es un procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición del judicial de toda persona detenida ilegalmente.

#### 3.1. Antecedentes Históricos

Según el Magistrado Dr. Reinaldo Chalbaud Zerpa, en su ponencia presentada en el V Encuentro de Presidentes de Salas y Tribunales Constitucionales de América Latina, realizado en Managua del 8 al 11 de septiembre de 1997, *“la aspiración del ser humano en orden a obtener en forma eficiente la protección de las facultades de que está investido y que son inherentes a su condición de persona natural, ha sido un ideal que parte de admitir la igualdad entre los hombres”*.

En Roma, nos dice el mismo expositor, Ulplano admitió, que según el derecho natural, todos los hombres son iguales y esta igualdad, ampliamente proclamada por el cristianismo, fue también aceptada y defendida.

Con el correr del tiempo y los avances de la civilización y las transformaciones del derecho, se ha conformado toda una doctrina

sobre los Derechos Humanos, entendiéndose, en forma genérica como facultades y prerrogativas inseparables de la condición de persona humana.

Esa doctrina y la protección de los "Derechos Humanos" fue esbozada de manera más o menos precisa en los grandes textos de las revoluciones del siglo XVIII en Norteamérica (1776) y Francia (1789).

El 12 de junio de 1776, fue aprobada por el pueblo de Virginia, reunidos en asamblea plenaria y libre una Declaración de Derechos, elaborada por George Madison, compuesta por quince postulados de trascendencia histórica jurídica y político social, que al parecer no era la primera en su género que se aprobaba en Norteamérica.

En 1641 la Colonia de Massachusetts había adoptado un "Cuerpo de Libertades" y otras colonias norteamericanas incluían declaraciones de derechos en sus "Cartas", no tan famosas como la de Virginia.

Posteriormente, una vez sancionada la Constitución Federal el 4 de marzo de 1789, y ya funcionando el primer Congreso de la Unión, James Madison presentó una adición al texto fundamental conteniendo toda una Declaración de Derechos, de la cual el Congreso aprobó diez enmiendas, el 3 de junio de 1791, que se incorporaron a la Constitución.

La Asamblea Nacional de Francia, en sus sesiones de los días 20, 21, 23, 24 y 26 de agosto de 1789, reunida en París aprueba la "Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano" uno de los documentos monumentales de la historia de la humanidad, al igual que la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, compuesta de diecisiete (17) cláusulas que en mucho coinciden con la Declaración de Virginia de 1776.

En el siglo XIX los constituyentistas de muchos países incorporan en los textos constitucionales (Constituciones) declaraciones de derechos y libertades individuales para dotar al ciudadano de una serie de facultades que no podían ser violentados por el Estado,

pero el constitucionalismo del siglo XX hizo hincapié en las garantías para dar eficacia a esos derechos en los casos de que sus titulares se vean amenazados o desconocidos.

Así nace, por ejemplo, la institución del amparo como un instrumento jurídico procesal para hacer válidos y eficaces los derechos y libertades consagrados en la Constitución. Sin embargo, no hay que confundir amparo y Habeas Corpus.

De acuerdo con el constitucionalista argentino German J. Bidart Campos *"el amparo suele considerarse como una proyección del Habeas Corpus, extendido a la totalidad de los derechos y libertades individuales... el Habeas corpus se circunscribe... a tutelar la libertad física o corporal. Se usa pues, como garantía destinada a remover la privación ilegítima de esa libertad por detención, arresto, etc. Y el amparo, como categoría amplia, alcanza a todos los demás derechos distintos de la libertad corporal..."*

En su origen el Habeas Corpus era una garantía concedida a un sector de la sociedad y en ese sentido no se le puede comparar con el amparo, pero en la actualidad la acción se extiende a cualquier individuo privado ilegalmente de libertad, este es el Habeas Corpus que regula el constitucionalismo moderno.

### **3.2. El Derecho Nicaragüense**

Según nuestros constitucionalistas e historiadores, no es sino hasta en la Constitución de 1893 que se reconoce el Habeas Corpus, el Amparo y el Recurso por Inconstitucionalidad. En el artículo 28 de La Libérrima se establece que: *"La Constitución reconoce la garantía del Habeas Corpus."* En las reformas a La Libérrima, efectuadas en 1896, se reforma el artículo 28 y dice que: *"La Constitución reconoce la garantía del Habeas Corpus. En consecuencia todo habitante tiene derecho al recurso de exhibición de la persona."* La Libérrima incorporó la Ley de Amparo como ley constitucional.

El artículo 45 de la Constitución Política vigente claramente preceptúa que: *"Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el Recurso*

de Exhibición Personal o de Amparo, según el caso y de acuerdo con la Ley de Amparo”.

## **IX. El Defensor de los Derechos Humanos**

### **1. Antecedentes históricos. El Ombudsman**

La figura del defensor de los derechos humanos es de antigua data y a través del tiempo se le ha conocido con diferentes nombres, pero su misión principal ha sido históricamente defender al ciudadano y sus derechos fundamentales contra los abusos del poder.

En los últimos años del imperio romano existía la figura del “DEFENSOR CIVITATIS”, cuya misión consistía en “defender los intereses del pueblo, frente a los abusos de funcionarios y aristócratas.” (M. Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina).

Por su parte, en el Diccionario Jurídico Espasa, cuya publicación fue promovida por la Fundación Tomás Moro, en su página 285 se refiere al DEFENSOR DEL PUEBLO expresando que es un *“Alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos fundamentales del individuo, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la administración dando cuenta a las Cortes Generales.”* En esta relación, el Diccionario Espasa se refiere al defensor del pueblo español, cuya creación fue inspirada en la figura del Ombudsman sueco, el cual se ha caracterizado por ser un *“órgano normalmente unipersonal, designado por el Parlamento para ejercer un control sobre la administración o en alguna de sus ramas, que aporta una garantía adicional de los derechos de los particulares, al margen de los procedimientos judiciales, más lentos y estrictos. De origen sueco, ha sido imitado en diversos países con otras denominaciones: procurador, comisario, mediateur, proveedor de justicia. En España su equivalente es el defensor del pueblo”,* y en Nicaragua, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a que se refiere la Ley Nº 212, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 7 del día 10 de enero de 1996.

El Diccionario Espasa Calve nos advierte una característica del “procurador” importantísima, como es que actúa al margen de

procedimientos judiciales, lo cual le permite vigilar y controlar la actividad o inactividad del órgano judicial en relación con su actuar en lo que respecta al respeto de los derechos y garantías del ciudadano.

No hay que confundir la defensa judicial por pobreza y la de los ausentes con la misión del procurador para la defensa de los derechos humanos. La defensa de los que gozan del beneficio de pobreza y de los ausentes la ejercen funcionarios especiales que actúan ante los tribunales de justicia y son designados por la autoridad judicial o son, como en el caso de Nicaragua, defensores públicos pagados por el mismo Estado a través del órgano judicial.

En nuestro medio existe la defensoría pública como un organismo del Poder Judicial, pero subsiste el defensor de oficio por razones de limitaciones financieras.

## **2. El Ombudsman en el Derecho Comparado**

**Suecia.** La institucionalización del Ombudsman se concreta en Suecia en 1809, pero para algunos autores el antecedente del Ombudsman sueco es el Preboste de la Corona, quien era el encargado de vigilar la acción de la justicia o sea la acción de los tribunales de justicia, su existencia se conoce ya a finales del siglo XVI.

Asimismo, se conoce que el Rey Carlos II, en el año 1715 nombraba a un funcionario con el nombre de Procurador Supremo para supervisar las leyes existentes y vigilar la actuación de los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, más tarde se le conoció como Canciller de Justicia.

En 1776, el Parlamento sueco creó la figura del Canciller de Justicia, aunque el Rey conservó la facultad de nombrar a los funcionarios, debilitándose así las facultades del Parlamento.

En 1915 se crea la figura del Ombudsman militar (MILITICOMBUDSMAN) y el 29 de diciembre de 1967 se produce la fusión de ambas figuras.

Como producto de las reformas normativas de 1976 y 1981 se crean los cuatro Ombudsman que hoy se conocen.

El Ombudsman principal es el responsable de toda la institución y de él emanan las directrices y es el encargado de vigilar la administración local, pero en la práctica se ocupa de la publicidad de los asuntos y quejas en relación íntima con los medios de comunicación.

Otro Ombudsman se ocupa de los temas relacionados con la administración de justicia, con la policía y las cárceles, y el tercero y cuarto, del ejército y la seguridad social.

Existen en Suecia otros funcionarios que por la naturaleza del trabajo que desempeñan parecieran ser una extensión de la institución primaria. En 1950 aparece el Ombudsman encargado de la legislación; en 1969 aparece el encargado de la prensa, y en 1971, comienza a operar el encargado de la protección a los consumidores.

El Ombudsman sueco debe ser un jurista de experiencia y reconocido prestigio. Su designación corresponde al Parlamento (RIKSDAG), el cual lo hace por medio de una comisión de 48 miembros integrada por representantes de los diferentes grupos políticos que conforman el Parlamento. El mandato del Ombudsman es de cuatro años y puede ser cesado en el cargo a propuesta de la misma comisión que lo eligió.

Su actividad de control se extiende a cualquier ámbito de la actividad administrativa. Controla la actividad administrativa, pero no los actos de dirección política. Controla asimismo la administración de justicia a diferencia de otros sistemas judiciales.

El Ombudsman realiza el control de los actos de la administración, especialmente de los que se relacionan con los derechos fundamentales y el mérito en oportunidad de los actos administrativos.

El Ombudsman sueco goza de autonomía funcional e independencia en los casos que conoce, sus poderes son amplios y puede hasta acusar judicialmente a los funcionarios responsables.



El Ombudsman sueco puede actuar de oficio o a petición de parte. La actuación de oficio es la característica más notoria de su independencia, la cual ejerce con formalidades mínimas.

El Ombudsman tiene obligación de presentar al Parlamento un informe anual de actividades para su aprobación o rechazo y tiene facultad para sugerir reformas a la legislación y participar en las sesiones del Parlamento.

### **3. El Ombudsman en los Países Escandinavos**

Algunos tratadistas coinciden en que el Ombudsman apareció originalmente y se empezó a organizar en los países escandinavos, su generalización en esos países refuerza la idea de que esa figura es "típica y general de los sistemas escandinavos". Otros opinan que es de origen sueco y que aparece en otros países escandinavos mucho más tarde y en "condiciones jurídicas e institucionales profundamente transformadas." Aparece en Finlandia en 1919, en Noruega en 1952 (Ombudsman para asuntos militares) y en 1962 (el Ombudsman civil) y en Dinamarca en 1954.

Según Luis Velásquez Alvaray, autor de la ponencia "Historia y Análisis del Ombudsman en el Derecho Comparado," publicada en el volumen II de la recopilación coordinada por don Eduardo Combella del IV Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, que produjo la excelente publicación titulada "El Nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano," la incorporación del Ombudsman al ordenamiento jurídico finlandés data de más de un siglo después de su definitiva consolidación en Suecia, por motivos históricos particulares relacionados con su proceso de independencia, que se da en 1917, y la vinculación con la Corona sueca hasta su incorporación al imperio ruso. En el período de pertenencia a la Corona rusa, la figura del prokurator fue predecesora del Ombudsman en Finlandia."

El surgimiento del Ombudsman en Finlandia, según el autor citado, produce un fuerte debate centrado en la conveniencia de la implantación de esa figura en una realidad jurídico política diferente a la sueca, caracterizada esa coyuntura por un parlamentarismo "normalizado" en el cual no se juzgaban necesarios instrumentos de control como lo eran necesarios en la realidad institucional sueca.

El surgimiento de la figura del Ombudsman en otros países escandinavos se presenta en coyunturas sustancialmente diferentes.

Tanto en Noruega como en Dinamarca la base del debate en lo referente a la necesidad del Ombudsman giró en torno a la conveniencia de introducir "mecanismos de control a la actividad administrativa, complementarios de los tradicionales del modelo del Estado de Derecho."

En Dinamarca, la incorporación y fortalecimiento del Ombudsman representa el ejemplo más significativo del surgimiento de esta institución en el contexto del Estado Social y en particular, la generalización de la figura en los países escandinavos, prueba de ello es que el Ombudsman noruego se realiza con las mismas características del danés. El Ombudsman danés aparece en la Constitución danesa de 1953, y es desarrollado, posteriormente, por la Ley del Ombudsman de 1954. En esta ley de 1954 se adopta la configuración del Ombudsman como un órgano unipersonal y siguiendo el modelo sueco se deja su nombramiento al Parlamento (FOLKETING).

El nombramiento se realiza cada cuatro años, con posibilidad de reelección y de revocación del nombramiento antes del cumplimiento del mandato. El nombramiento debe recaer en una persona que no pertenezca a la Cámara y de sólida formación jurídica.

La función del Ombudsman danés es controlar la administración civil y militar del Estado. Al contrario de lo que se presenta en Suecia, en Dinamarca no se presenta una distinción tan radical entre dirección política y administración, característica del sistema sueco, al igual que en los países europeos, donde los ministros, además de ser ministros, y además de su carácter político, pertenecen a un órgano cúspide de la administración, por lo que esa dimensión de la actividad ministerial si está sometida al control del Ombudsman.

En cuanto a los poderes del Ombudsman danés, éstos están más reducidos que los del Ombudsman sueco, no tiene facultad para acusar ante los tribunales de justicia y sólo puede hacer recomendaciones a la autoridad administrativa para que mejore su actuar.

El Ombudsman danés, al igual que el sueco, puede actuar de oficio o a petición de parte, siendo la segunda forma más generalizada para que se inicie su acción de control. La petición debe realizarse por escrito dentro de un año contado desde la fecha de emisión del acto de la administración.

Dentro del Parlamento existe una comisión que examina los informes del Ombudsman y los casos en trámites. El Ombudsman danés goza de autonomía, aunque el Parlamento puede darle orientaciones generales sobre el desarrollo de su actividad.

#### **4. El Ombudsman Militar en la República Federal de Alemania**

En la medida que hemos venido adentrándonos en el surgimiento histórico notamos que la competencia principal del Ombudsman es la supervisión de la actividad administrativa de carácter general y la sectorial, que es aquella que ejerce sobre un sector específico de la administración.

También ha existido el Ombudsman con facultad de vigilancia y control de la administración militar, siendo éste el más tradicional y habitual. En Suecia esta manifestación plural de la figura del Ombudsman surge como consecuencia de la creación del Ombudsman militar en 1915 y tiene como misión controlar la administración militar en defensa de los derechos de los ciudadanos durante su permanencia en el servicio militar.

La figura del militar Ombudsman desaparece en 1917, con la configuración plural del Ombudsman y uno de ellos asume las funciones del Ombudsman militar.

En Noruega el nacimiento del Ombudsman se da en 1952, y le corresponde la supervisión de la actividad de la administración militar. En Alemania la figura del Ombudsman aparece en la figura de un Ombudsman militar, el Wehrbeauftragte des Bundestages. Es característico del sistema alemán que junto a este Ombudsman militar no existe alguno de carácter general.

A través de la reforma constitucional, en 1957 se incorpora al articulado de la Ley Fundamental de Bonn la disposición de crear un Comisionado del Parlamento Federal para Asuntos de la Defensa que tuviera el control de la administración militar en defensa de los derechos fundamentales del personal militar, establecidos en la Constitución.

El Wehrbeauftragte es un comisionado parlamentario designado, entre personas que reunieron condiciones para ser elegidos miembros del BUNDESTAG, han cumplido 35 años de edad y al menos un año de servicio militar. Su período es de cinco años, con posibilidades de elección y cese de cargo a petición de la Comisión de Defensa con el voto de la mayoría del BUNDESTAG.

El Ombudsman en Alemania tiene facultades de inspección, puede ejercer la iniciativa de oficio, para que se inicie un procedimiento penal o disciplinario y puede asistir a los procedimientos, pudiendo además guardar secreto sobre sus investigaciones.

El interesado puede acudir personalmente ante el Ombudsman, no se aceptan quejas anónimas y como Comisario Parlamentario puede actuar sin control de las autoridades militares. Hay, pues, un doble carácter en esta figura: una, como garante de los derechos fundamentales, y, dos, como "órgano auxiliar del Parlamento federal en el ejercicio del control parlamentario." Cuando actúa como órgano auxiliar del Parlamento tiene una dependencia muy grande del Parlamento. Adicionalmente, cuando se trata de una investigación motivada por una violación de derechos fundamentales, la posición de este Ombudsman militar (Wehrbeauftragte), se parece más bien a la de un Ombudsman de competencia general. En estos casos el Ombudsman goza de autonomía y orienta las investigaciones según su propio criterio y el Parlamento y la Comisión de Defensa no puede intervenir, más que para darle instrucciones. El Ombudsman informa al Parlamento de manera concreta en un caso o en el informe anual que está obligado a rendirle.

## **5. Gran Bretaña. The Parliamentary Commissioner for Administration**

En la Gran Bretaña, el Ombudsman se crea por Ley del 22 de mayo de 1967 (Act. 1967). Desde esa fecha la institución ha evolucionado notablemente, y de ser un órgano asesor, pasó a tener un rango de magistratura con facultades de investigación y persuasión.

Como antecedente de la institución se suele considerar a la COMISION DONARGLMORE, de 1929, cuya conclusión acerca de la indefensión del ciudadano en contrapartida a los poderes que había concentrado el gobierno tuvo gran repercusión. Posteriormente, otra comisión, la de Encuestas y Tribunales Administrativos, llegó a conclusiones similares.

En el año 1959, la Comisión Internacional de Juristas de Gran Bretaña decidió nombrar tres juristas y un economista con el propósito de: "Examinar la eficacia de los medios existentes para investigar las quejas contra decisiones o actos administrativos de los departamentos ministeriales y de otros organismos públicos, en caso que no haya un tribunal administrativo en otro procedimiento legal para atender a las quejas y estudiar la posibilidad de introducir mejoras en tales medios teniendo particularmente en cuenta la institución escandinava del Ombudsman."

En 1961 se publicó el informe WHYATT que recomendaba el nombramiento de un Comisionado Parlamentario, en 1967, como se dijo atrás, se nombra el primer Ombudsman con la denominación de Parliamentary Commissioner for Administration y posteriormente son nombrados comisionados parlamentarios para la administración local en Inglaterra, Escocia y País de Gales.

El nombramiento del Comisionado Parlamentario británico no le corresponde al Parlamento, sino a la Corona (Rey o Reina), a propuesta del gobierno. He aquí una muestra de cómo funciona la monarquía parlamentaria inglesa. El nombramiento no tiene período determinado en la ley y puede serlo hasta su jubilación. No es preciso ser jurista y el nombramiento puede recaer en funcionarios del orden administrativo, lo cual es en parte una ventaja por conocer

los engranajes de la administración pública, aunque no todas las actividades están sujetas a su control, sino solamente aquellas que constituyen supuestos de "mala administración."

El Ombudsman británico es una institución de carácter unipersonal y aunque no es nombrado por el Parlamento responde ante él y debe rendir un informe anual completo de sus actividades así como informes especiales en casos de interés especial en los que amerite tomar medidas urgentes.

Hasta aquí hemos presentado una reseña, un tanto comprimida, acerca de los Ombudsman que se han tenido como modelos universales. En adelante, nos referiremos a otros Ombudsman que poseen características especiales, pero en su configuración como tales, son de fechas posteriores, aunque esto no significa que sean menos importantes o menos capaces, sino que han adoptado esta figura "como una forma de ayuda al hombre que necesita que sus acciones sean respetadas."

## **6. Otros**

Por razones de espacio nos referiremos a los Ombudsman argentino, el español y el francés, abordando en capítulo especial la figura del Procurador para la defensa de los derechos humanos nicaragüense, creado mediante Ley Nº 212, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 7 del día 10 de enero de 1996 y reformada mediante Ley Nº 471, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 191 del día 9 de octubre del 2003.

### *6.1 El Defensor del Pueblo Argentino*

El defensor del pueblo argentino tiene sus antecedentes en figuras de origen hispano. Entre esas figuras algunos autores citan al Procurador General, de gran prestigio en el derecho indiano, cuya misión principal fue ser mediador entre la comunidad y las autoridades municipales, al Personero Común y el Síndico Procurador del Común, institucionalizados en 1813.

En Argentina, a diferencia de lo acontecido en España, primero se crearon los defensores locales y más tarde el defensor a nivel

nacional. Es oportuno señalar que el sistema argentino adopta la figura del Ombudsman parlamentario con independencia funcional y presupuestaria, debe ser electo por ambas cámaras legislativas (senadores y diputados) con el voto favorable de los dos tercios (2/3) de los miembros de ellas por un período de cinco años y puede ser reelegido por una comisión de siete senadores y siete diputados. Hay defensores adjuntos, de carácter técnico.

Del control del defensor del pueblo argentino se excluyen las actividades del Poder Judicial, el Poder Legislativo, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y los órganos de defensa y seguridad.

El procedimiento carece de formalismos, no se requiere auxilio de abogado o letrado, las actuaciones son gratuitas y sólo se requiere, por parte del ciudadano, sus nombres, apellidos y domicilio, la investigación puede iniciarse de oficio o a instancia de "quien invoque haber sido afectado por comportamientos ilegítimos, defectuosos, irregulares, abusivos, arbitrarios, discriminatorios, se incluye la tutela de los intereses difusos o colectivos."

Todos los organismos públicos están obligados a prestar colaboración al Defensor del Pueblo, pero éste no tiene competencia para investigar los comportamientos del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas.

Como mandatario del Congreso, el Defensor del Pueblo argentino debe rendirle un informe anual de actividades, pudiendo hacer en él advertencias, recomendaciones y recordatorios de los deberes legales que se deben cumplir.

## *6.2 El Defensor del Pueblo Español*

Esta figura en el sistema jurídico español tiene, a decir de algunos autores, poca vinculación con instituciones de épocas pasadas. Se ha querido, sin embargo, señalar como antecedentes las figuras del SAHIB-AL-MAZALIN y el Justicia Mayor de Aragón, especialmente. Luis Velásquez Alvaray en su ponencia titulada: "Historia y Análisis del Ombudsman en el Derecho Comparado" nos señala que, en realidad "el modelo del Defensor del Pueblo es la figura del Ombudsman de origen nórdico," aunque el crítico Víctor Farain opina en forma

concluyente que, “los Ombudsman no son vinculantes para la autoridad a quien se dirigen.”

El Defensor del Pueblo español se crea por disposición constitucional con competencias de supervisión, pero no se considera en ese entonces la posibilidad de creación de los comisionados autonómicos. La Ley Orgánica 3/81 del 6 de abril, regularía su creación, funcionamiento y competencias.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/81 del 6 de abril, el Defensor del Pueblo es el alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución, para lo cual puede supervisar la actividad de la administración general, la administración de las comunidades autónomas, la administración local y las empresas u organismos dependientes de los anteriores.

El Defensor del Pueblo es electo por cinco años y únicamente requiere ser español, mayor de edad y encontrarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. El Defensor del Pueblo propone a los ADJUNTOS que lo sustituirían eventualmente, en casos de muerte, incapacidad temporal o definitiva y hasta el nombramiento de un nuevo defensor.

Cuando el Defensor del Pueblo recibe quejas referidas al funcionamiento de la administración de justicia debe trasladarlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, dependiendo de la naturaleza de la queja y puede interponer los recursos de amparo y de inconstitucionalidad. Puede proceder de oficio o a instancia de parte. Los particulares pueden dirigirle sus quejas invocando interés legítimo.

Al igual que el modelo sueco, se ha prescindido de formalismos retardatorios en el procedimiento de presentación e investigación de las quejas, constituyendo la informalidad y la sumariedad uno de sus caracteres más sobresalientes.

El Defensor del Pueblo debe presentar un informe anual ordinario a las Cortes Generales y los informes extraordinarios necesarios cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo requieran.



### 6.3 El *Médiateur* Francés. Ombudsman como Órgano Administrativo

Mediante Ley de 3 de enero de 1973 se crea en Francia la figura del *Médiateur*, con una configuración y naturaleza distinta a los Ombudsman concebidos dentro del modelo del Comisionado Parlamentario. El *Médiateur* francés es más un órgano administrativo que un Comisionado Parlamentario.

Esta concepción responde a la tradición francesa del control jurisdiccional de la actividad de la administración por el Consejo de Estado (*Conseil d'Etat*).

Según Velásquez Alvaray, *"El Médiateur se configura más como una institución con vocación conciliadora en las relaciones Administración - Administrados, con escasos poderes de intervención, que como órgano de control de la actividad administrativa."*

Así las cosas, el estudio del *Médiateur* francés es válido por su singularidad y especialidad y "por extremar algunos planteamientos presentes en otros casos, que por responder verdaderamente a la lógica de esta institución."

La designación del *Médiateur* corresponde al Ejecutivo, su periodo es de seis años, el Parlamento no tiene intervención en su nombramiento, y la revocación de su elección sólo puede darse por decisión del Consejo de Estado y no tiene opción de reelección.

El informe anual que el *Médiateur* debe rendir lo presenta al Presidente de la República, lo cual confirma la inexistencia de relaciones con el Parlamento.

El *Médiateur* no puede actuar de oficio, el acceso de los ciudadanos al *Médiateur* es indirecto en el sentido que las quejas deben dirigirse a un diputado o senador quien se las traslada si estima que hay mérito para ello. Es requisito que el quejoso haya agotado las gestiones necesarias ante la administración correspondiente, para que su reclamo sea tomado en cuenta.

Prácticamente, las facultades del *Médiateur* francés se reducen a investigar la actividad de la administración, a solicitud de parte, y hacer propuestas y recomendaciones a los órganos administrativos, pudiendo hacer públicas las negativas a cumplir de las mismas en un informe dirigido al Presidente de la República y al Parlamento, es según Velásquez Alvaray, *"una magistratura de opinión debilitada, por el solo hecho de ser nombrado por el gobierno y, además, sus poderes son muy limitados: no puede recibir quejas directamente de los ciudadanos, sino tan solo de los parlamentos, lo cual, se parece al "Parliamentary Commissioner."*

Terminamos este capítulo diciendo que los países cuyos sistemas se han estudiado, y otros que por razones de espacio no se mencionan, han adoptado el modelo del Ombudsman original, aunque con las variantes particulares para cada país; cada día más países aceptan la figura del Ombudsman, con la denominación que particularmente les convenga, porque ha demostrado su necesidad y eficacia. La existencia de un Ombudsman o defensor de los derechos humanos de sólida trayectoria es garantía del ejercicio democrático y protección de los derechos fundamentales y las garantías ciudadanas.

## **X. El caso de Nicaragua. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos**

### **1. Creación de la Institución, nombramientos, calidades, suspensión, cesación y destitución, prerrogativas, incompatibilidades e inhibiciones**

En Nicaragua, mediante Ley N° 218 del 8 de enero de 1996, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 7 del 10 de enero de 1996, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos *"como organismo independiente, con personería jurídica propia y autonomía funcional."* La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está a cargo de un Procurador y un Subprocurador electos por la Asamblea Nacional de listas propuestas por los Diputados, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes; debiendo alcanzar en su elección al menos el voto favorable del sesenta por ciento de los Diputados.

El Procurador y el Subprocurador son electos por la Asamblea Nacional por un período de cinco años durante el cual gozan de inmunidad, toman posesión de su cargo el día de su elección, previa promesa de ley.

El Procurador y el Subprocurador deben tener las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua y no haber renunciado a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la hubieran recuperado cinco años antes de la respectiva elección.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser de reconocida solvencia moral y profesional, no tener antecedentes penales, ni haber estado involucrado en actividades violatorias de los derechos humanos.
- 3) Ser mayor de veinticinco años y menor de setenta y cinco, al momento de la elección.
- 4) Tener reconocida trayectoria y vocación por la defensa de los derechos humanos y amplios conocimientos en la materia.

El Procurador y el Subprocurador cesan en sus cargos por las siguientes causales:

- 1) Por renuncia.
- 2) Por expiración del período para que fueron electos.
- 3) Por muerte o por incapacidad sobreviniente.
- 4) Por negligencia notoria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
- 5) Por haber sido condenado por sentencia firme.<sup>11</sup>

La vacante del cargo se declarará por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en los casos de renuncia, expiración del período y muerte. En los demás casos el Plenario de la Asamblea Nacional, mediante debate y con audiencia previa del Procurador o el Subprocurador declara la vacancia del cargo con el voto del sesenta por ciento de los diputados. Declarada la vacante en el cargo, ya sea por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional o por el Plenario de la misma se inicia el procedimiento para el nombramiento del nuevo Procurador o Subprocurador en un plazo no mayor de sesenta días.

<sup>11</sup> La Ley N° 212 no dice por qué delitos o faltas ni qué pena.

En los casos de muerte, cese o incapacidad definitiva del Procurador desempeñará el cargo en forma provisional el Subprocurador hasta tanto la Asamblea Nacional elija al nuevo Procurador.

En el caso de que el Procurador o el Subprocurador sean sometidos a proceso penal, la Asamblea Nacional declarará su suspensión en el cargo hasta tanto no se dicte sentencia firme. Si la sentencia es absolutoria se les habilita para continuar ejerciendo el cargo y si la sentencia es condenatoria la Asamblea Nacional tendría que declarar la vacante en el cargo y proceder a nueva elección.

El artículo 13 de la Ley Nº 212 señala que el Procurador y el Subprocurador cesarán en sus cargos cuando la Asamblea Nacional los declare incurso en algunas de las causales establecidas en la Ley Nº 190 denominada "Ley sobre la destitución del Contralor General de la República y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral" con arreglo al procedimiento establecido en dicha ley.

Cabe recordar que esta ley fue declarada inconstitucional, y por lo tanto inaplicable, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Nº 9 de las nueve de la mañana del día 6 de marzo de 1997.

El Subprocurador sustituye al Procurador en casos de ausencia temporal de éste.

El Procurador y el Subprocurador, según la Ley Nº 212, son inamovibles durante su período para que fueron electos, lo cual no es cierto, ya que la misma ley establece causales de suspensión, cese y destitución en el ejercicio del cargo.

Los cargos de Procurador, Subprocurador y Procuradores Especiales son incompatibles:

- 1) Con el ejercicio de cualquier cargo público de elección directa e indirecta, excepto el ejercicio de la medicina y la "enseñanza," debería decir "docencia."
- 2) Con el desempeño de funciones políticas partidarias y el ejercicio de actividades de propaganda política. La participación en partidos políticos debe cesar al ser electos.

- 3) Con la condición de militar o policía en servicio activo y si lo fueren deben renunciar a ser electos.
- 4) Con la calidad de ministros de cualquier culto religioso, y si lo son deben cesar en sus funciones al ser electos.

No pueden ser electos Procurador y Subprocurador para la defensa de los derechos humanos los que tengan vínculos de parentesco entre sí, con el Presidente de la República y con los Diputados que los propongan, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Existen Procuradores Especiales nombrados por el Procurador para la defensa de los derechos humanos que cesan en el cargo cuando cesa el Procurador que los nombró.

Estos Procuradores Especiales son:

- El Procurador especial de la mujer.
- El Procurador especial para la niñez y la adolescencia.
- El Procurador de cárceles, y,
- Los Procuradores especiales que el Procurador estime necesarios.

## **2. Objeto de la Ley N° 212, naturaleza y carácter del Procurador, objetivos fundamentales, ámbitos territoriales de competencia, sede, atribuciones del Procurador para la defensa de los derechos humanos**

La Ley N° 212, según su propio texto, tiene por objeto regular las funciones, el carácter, los objetivos, el ámbito de competencia (territorial y por la naturaleza de las instituciones objeto de su control) las competencias y atribuciones del Procurador y el Subprocurador para la defensa de los Derechos Humanos, llamados en la ley el Procurador y el Subprocurador.

Según la Ley N° 212, el Procurador y el Subprocurador en su actividad son independientes, no estarán supeditados a ninguna autoridad y deben actuar sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes.

El artículo 2 de la ley nos habla que los dos funcionarios, el Procurador y el Subprocurador, en el ejercicio de su cargo son independientes y no están supeditados a ninguna autoridad. Aquí se plantea la independencia personal de los dos funcionarios y en el artículo 1, en el que se crea la Institución, se lo considera como un organismo independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y administrativa, lo cual nos remite al análisis de la naturaleza de la institución, en el sentido de que se le tiene como organismo independiente funcional y administrativamente, pero de seguido, en el artículo 3 de la misma ley, se define al Procurador como un Comisionado de la Asamblea Nacional, lo cual quiere decir que el Procurador, como funcionario está sujeto a la autoridad de la Asamblea Nacional, aunque la institución que preside y administra sea un organismo autónomo en su funcionamiento y administración de sus recursos económicos, los cuales provienen del Presupuesto General de Estado y de cuyo uso e Inversión debe rendir cuentas al ente contralor correspondiente como es la Contraloría General de la República.

Según el artículo 3 de la Ley N° 212, el Procurador para la defensa de los derechos humanos es un COMISIONADO de la Asamblea Nacional, electo por ésta para promoción, defensa y tutela de las garantías de los ciudadanos y sus derechos humanos. Para cumplir su misión puede VIGILAR y CONTROLAR la actividad de la administración pública, dando cuenta a la Asamblea Nacional.

En este artículo están expuestos, el carácter o naturaleza, misión, objetivos, los sujetos de su vigilancia y control y la obligación de rendir cuentas al órgano que lo eligió.

Es importante aclarar el significado de Comisionado de la Asamblea Nacional o Comisionado Parlamentario y las consecuencias que se derivan. Cuando la Ley N° 212 caracteriza al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos como un Comisionado de la Asamblea Nacional electo por ésta, sigue el modelo clásico escandinavo que han seguido otras legislaciones. El Ombudsman escandinavo, como apuntamos antes, es el modelo del comisionado parlamentario, electo por el Parlamento aunque en los procedimientos hayan algunas variantes.

Adicionalmente, la Ley Nº 212, y la mayoría de las legislaciones que regulan la figura del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, insisten en señalar que, aunque es un comisionado parlamentario, es independiente en su actuación y no está supeditado a ninguna autoridad, lo cual no es totalmente cierto porque, primero, la incidencia del Parlamento en su nombramiento genera algún tipo de dependencia, y, segundo, el Procurador tiene que rendir cuentas de su actuación anualmente ante el órgano legislativo que lo eligió, lo cual también es una limitación a la independencia en el sentido de que está sujeto a la autoridad del órgano legislativo que puede hasta destituirlo si hay causa que lo amerite.

En el caso de Nicaragua, podríamos decir que el Procurador juega un doble rol, ejerce vigilancia y control sobre la actividad del Estado (Considerando III. Ley Nº 212) y es comisionado parlamentario.

En la primera actividad tiene autonomía absoluta del Parlamento y de cualquier autoridad, pero como comisionado parlamentario está sujeto a la influencia de dicho órgano. (Asamblea Nacional).

El ámbito territorial en el que el Procurador ejerce sus funciones es el territorio del Estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política.

Nos parece que hay que estar claros en cuanto al alcance del artículo 7 de la Ley Nº 212 y el artículo 28 Cn. Está claro que el ámbito territorial de competencia para el ejercicio de vigilancia y control por parte del Procurador es el territorio del Estado, pudiendo incluso tener, además de su SEDE CENTRAL en la ciudad de Managua, sedes permanentes o provisionales en cualquier parte de la República, pero cuando el artículo 7 en referencia remite al artículo 28 Cn., que textualmente dice que: *"Los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado, los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas consulares."* la cosa amerita mayor análisis.

Se debe entender que el Procurador tiene en el ejercicio de sus actividades de vigilancia y control facultades extraterritoriales por encima de la embajadores y cónsules?

O se debe entender que el Procurador puede ejercer vigilancia y control sobre las actividades de los embajadores y cónsules como funcionarios de la administración, nombrados y dependientes del Poder Ejecutivo, en lo que respecta a sus relaciones y actividades con los nicaragüenses residentes en el extranjero?

Nos parece que estas dos situaciones ameritan un análisis especial ya que parece haber una contradicción entre el artículo 7 de la Ley Nº 212 y el artículo 28 Cn., ya que el Procurador General de la República representa al Estado Nicaragüense y no el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que el artículo 7 de la Ley Nº 212 dice que el *"Procurador para el ejercicio de sus funciones y atribuciones tendrá competencia en todo el territorio nacional."*

Las embajadas y consulados, en virtud del principio de extraterritorialidad se consideran parte del territorio del Estado nicaragüense, sujetos a las leyes nicaragüenses y tratados y convenios de reciprocidad, pero de ahí, hasta que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos pueda sustituir la autoridad de embajadores y cónsules, o que el Procurador esté sujeto a la autoridad de esos funcionarios hay bastante que aclarar.

Según el artículo 3 de la Ley Nº 212, el Procurador es electo por la Asamblea Nacional *"para la promoción, defensa y tutela de las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus derechos humanos."*

Para cumplir con estos objetivos, fundamentales en razón de que los derechos son fundamentales de la persona humana y de que esa es la función fundamental de la institución, el Procurador puede, y debe, como comisionado parlamentario, VIGILAR y CONTROLAR la actividad de la administración pública, dando cuenta a la Asamblea Nacional.

Como se ha señalado antes, el Procurador tiene que "dar cuenta a la Asamblea Nacional" del resultado de sus investigaciones para que ésta tome las decisiones correspondientes.



Adicionalmente, es también conveniente quedar claros qué es la administración pública, para ello nos remitimos a la "Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, N° 140 de 25 y 26 de julio del 2000, declarada parcialmente Inconstitucional, y al artículo 2, que contiene las Definiciones Básicas. "Art. 2 – *Definiciones Básicas – Administración Pública: Es la que ejerce el Estado por medio de los órganos de la administración del Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus propias normativas; la Administración de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de las municipalidades; las instituciones gubernamentales autónomas o descentralizadas y las desconcentradas; las instituciones de creación constitucional y, en general, todas aquéllas que de acuerdo con sus normas reguladoras realizaren actividades regidas por el ordenamiento jurídico administrativo y la doctrina jurídica, y en todo caso, cuando ejercieren potestades administrativas. También incluye las actividades de los poderes legislativos, judicial y electoral en cuanto realizaren funciones administrativas en materia de personal, contratación administrativa y gestión patrimonial*".

Este artículo 2 acápite 2, de la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, nos define qué es la Administración Pública y cuáles son los órganos e instituciones que la conforman. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vigila y controla sus actividades, en tanto y cuanto, los funcionarios cometan, en el ejercicio de sus funciones, actos y omisiones violatorias de los derechos humanos, pudiendo incluso interponer, los recursos de inconstitucionalidad, de amparo y de exhibición personal en los casos que considere necesario e imperativo.

Precisamente en esta obra se presentan estos tres recursos, como mecanismos constitucionales para la defensa de los derechos humanos.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos?.

Ellos son:

- 1) Contribuir con las instituciones y la sociedad civil a garantizar, en el marco de un Estado de Derecho, la seguridad de las personas y los derechos humanos incorporados en el artículo 46 de la Constitución Política, y,
- 2) Como fin fundamental "coadyuvar para lograr una sociedad más libre y justa que posibilite la educación, la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos en su sentido más amplio, con participación de todos los sectores sociales".

Según el párrafo uno del artículo 4 de la Ley N° 212, la Procuraduría debe garantizar la "seguridad de las personas," lo cual de conformidad con el artículo 97 de la Constitución Política corresponde a la Policía Nacional, la que *"tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos..."* Tal vez sea más adecuado, en una futura reforma a la Ley N° 212, decir: *"la seguridad jurídica de los nicaragüenses y sus derechos humanos."*

Adicionalmente, en el artículo 46 Cn., no se incorporan derechos humanos, es en las declaraciones, convenciones y pactos sobre derechos humanos donde se han incorporado esos derechos inherentes a la persona humana para su reconocimiento, respeto, promoción y protección.

Cabe aquí recordar que las convenciones, declaraciones o pactos sobre derechos humanos a que se refiere el artículo 46 Cn., no están incorporados a nuestra Constitución Política y por lo tanto no son leyes constitucionales. Ya la Corte Suprema de Justicia, en sentencia N° 125, de las once de la mañana del día 20 de diciembre de 1993, se pronunció sobre este tema en los siguientes términos:

*"Otras de las afirmaciones es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, es ley constitucional, lo cual también es inexacto, pues en ninguna parte de nuestra Constitución se le da carácter de norma constitucional a los tratados o convenciones internacionales. Lo que establece el artículo 46 Cn., es que en el territorio nacional toda persona goza de plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos*

*que se mencionan en dicho artículo y entre los cuales se encuentra el pacto de San José, pero no se establece que dichas declaraciones, pactos o convenciones sean leyes constitucionales, las cuales están plenamente instituidas en el artículo 184 Cn. y son: La Ley electoral, la Ley de Emergencia y la Ley de Amparo. Esta última ley en su artículo cinco, parte inicial, expresamente señala: Los Tribunales de Justicia observarán siempre el principio de que la Constitución Política prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional.”*

Los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 212 se refieren a los derechos que el Procurador debe promover, defender y tutelar, velando por que sean cumplidos por los órganos de la administración pública, ellos son:

- a) Los derechos comprendidos en el TITULO IV de la Constitución Política, y
- b) Los consignados en los artículos 46 y 71 Cn. y en otros Instrumentos internacionales de derechos humanos que sean ratificados por el Estado de Nicaragua.

El Título IV de la Constitución Política contiene los Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense, distribuidos así:

- Capítulo I: Derechos Individuales
- Capítulo II: Derechos Políticos
- Capítulo III: Derechos Sociales
- Capítulo IV: Derechos de la Familia
- Capítulo V: Derechos Laborales
- Capítulo VI: Derechos de las Comunidades de la Costa Atlántica

Los derechos humanos consignados en el artículo 46 son los contenidos en las declaraciones, pactos y convención sobre derechos humanos citados en el texto del artículo 46 Cn. a los cuales nos hemos referido con anterioridad y los consignados en el artículo 71 Cn. ya están contenidos en el Capítulo IV del Título IV Cn., que se refiere a los Derechos de la Familia. Este artículo 71 Cn. fue adicionado con el último párrafo que se refiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, la cual tiene plena vigencia en Nicaragua.

Las atribuciones del Procurador para la defensa de los derechos humanos están consignadas en el Capítulo V de la Ley Nº 212 y sus reformas contenidas en la Ley Nº 471, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, del 09 de octubre del 2003.

En síntesis, ellas son, entre otras:

- 1) Promover en la ciudadanía el estudio y la educación de la Constitución Política y los Derechos Humanos.
- 2) Orientar e instruir a las personas, en el territorio nacional sobre el ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, libertades y garantías ante los órganos de la administración pública.
- 3) Promover el respeto a los derechos humanos y desarrollar programas participativos de promoción y educación para toda la sociedad.
- 4) Fiscalizar el apego de la administración pública y sus funcionarios en el respeto de los derechos humanos.
- 5) Investigar actuaciones de la administración pública de oficio o por denuncia, para esclarecer sus actos u omisiones que vulneren los derechos humanos y remitir a los que resultaren presuntamente culpables al organismo correspondiente para su sanción.

Es importante destacar la atribución contenida en este inciso del artículo 18 de la Ley Nº 212, porque le da al Procurador un amplio margen de discrecionalidad para iniciar o no, por su propia iniciativa o a petición de parte interesada, una investigación sobre actos u omisiones de los funcionarios de la administración que vulneren los derechos humanos.

También llama la atención la redacción de esta norma cuando expresa que el Procurador debe *"remitir a los que resultaren presuntamente culpables al organismo correspondiente para su debida sanción."* Implica esto que el Procurador tiene facultad de detener a una persona o solicitar su detención para "remitirlo" al organismo correspondiente para su debida sanción?

El artículo 33 Cn. inciso 1 claramente señala que: *"La detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito del juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito."*

Por la forma de redacción del artículo 19 de la Ley Nº 212, que textualmente dice: *"El Procurador está facultado para promover que los miembros del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional coadyuven al respeto de los derechos humanos,"* cabe la interpretación de que el Procurador puede solicitar a la Policía Nacional la detención de funcionarios que, según su investigación, se consideran responsables de violación de derechos humanos y remitirlos a las autoridades competentes, junto con las diligencias que haya instruido y darlo a conocer a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía. El artículo 20 de la Ley Nº 212 parece corroborar esta argumentación.

6) Solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo o la destitución de las autoridades, funcionarios y empleados públicos que con su actuación lesionan o pongan en peligro los derechos humanos, sin perjuicio de iniciar las acciones de responsabilidad civil o penal.

Aquí habría que aclarar que la suspensión o destitución sería como producto de una investigación en la que se establezcan las responsabilidades respectivas, respetando las reglas del debido proceso, y si hay responsabilidades civiles o penales que demandar, quién lo hará es el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos o el Procurador General de Justicia, en representación del Estado, siguiendo los trámites establecidos en la legislación procesal penal.

Tal como está redactado el inciso 6 del artículo 18 de la Ley Nº 212, pareciera que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos puede, al menos denunciar los hechos ante la autoridad judicial.

7) Establecer conclusiones de sus investigaciones, y hacer recomendaciones como producto de sus investigaciones "emitiendo censura pública ante los responsables de actos contrarios a los derechos humanos." El párrafo entrecomillado no es lo suficientemente claro, se entiende que el Procurador debe emitir una declaración pública de censura contra el funcionario, lo cual es muy serio, ya que el censurado puede hacer uso de los recursos penales para rebatir la censura del Procurador.

8) Practicar inspecciones en los locales de la administración pública que sean de su interés y requerir de los funcionarios la información

que considere oportuna, sin que se le pueda negar, ni la oportunidad de inspeccionar ni la información que solicita.

La pregunta sería, puede el Procurador inspeccionar cualquier local y recabar cualquier tipo de información sin tomar en cuenta las cuestiones de defensa y seguridad del Estado Nicaragüense?

9) Conocer los informes que el Estado envía el Comité de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA.

10) Procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido violados o puestos en peligro, con los presuntos responsables de la administración pública.

Nos parece de dudosa efectividad esta disposición y hay que tener mucho cuidado en promover una conciliación en casos de violación de derechos humanos fundamentales que se ha consumado y es de difícil o imposible reparación.

11) Reformado. Vigilar a través del Procurador Especial de Cárceles la situación de las personas privadas de libertad en la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario.

12) Proponer reformas ante los órganos administrativos, tendientes a promover la tutela de los derechos humanos y recomendar la rectificación de acciones ilegales o arbitrarias.

13) Rendir informe anual a la Asamblea Nacional e informe especial cuando lo crea necesario el Procurador o lo solicite la Asamblea Nacional.

Aquí se refleja el carácter de comisionado parlamentario que tiene el Procurador y la ingerencia del órgano legislativo en su actividad.

14) Proponer, se supone que al Poder Ejecutivo, la suscripción y la ratificación, a la Asamblea Nacional, de tratados y convenciones sobre derechos humanos.

15) Organizar sus dependencias y dictar su reglamento interno que regule el funcionamiento de su actividad administrativa.

16) Estimular la labor que en pro de los derechos humanos efectúan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como los medios de comunicación social.

- 17)Reformado. Nombrar al Procurador de la Niñez y la Adolescencia, a la Procuraduría de la Mujer, Procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnica, Procurador de Cárceles en Nicaragua y otros procuradores especiales que estime pertinente, implementando métodos de participación para la postulación de candidatos.
- 18)Proponer y tramitar denuncias de parte de la población, de violaciones a los derechos humanos.

Pareciera que el verbo “proponer” sale sobrando en la redacción de este inciso y basta decir “tramitar... etc...”

- 19)Los demás que le confiere la ley.

Muy importante es la facultad concedida al Procurador para interponer recursos por inconstitucionalidad, de amparo y de exhibición personal y de conservar sus atribuciones de vigilancia y control aún en los estados de excepción y sobre los derechos y garantías cuya vigencia no haya sido expresamente restringida.

El artículo 23 de la Ley Nº 212, reformado por la Ley Nº 471, publicada en la Gaceta, Diario Oficial, Nº 191 del 09 de octubre de 2003, señala que el Subprocurador cumplirá las funciones que le indique el Procurador para la defensa de los derechos humanos y las que se determinan en las normativas internas de las instituciones.

Es muy sui generis la redacción de este párrafo, nos indica que el Subprocurador “cumplirá las funciones que le indique el Procurador”, no dice que le delegue el Procurador, y adicionalmente señala que el Subprocurador cumplirá las funciones que “se determinen en las normativas Internas de las instituciones.” Hay que recordar que la Constitución Política en su artículo 130 prescribe que, “ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y la ley.”

En el caso de la Ley Nº 212 sólo se establecen las atribuciones del Procurador, pero no las del Subprocurador, aunque el artículo 14 de la misma ley señala que “El Subprocurador SUSTITUIRÁ al Procurador en caso de ausencia temporal.”

Podría pensarse que sólo en casos de ausencia temporal en los que el Subprocurador asume el cargo, asume también las funciones, mientras tanto no ejerce ninguna contemplada o concedida por la ley, sólo las que el Procurador le “INDIQUE”.

### **3. Procedimiento para la investigación. Iniciación y Contenido de la Investigación. Tramitación de la denuncia, inspección y acceso a documentación, ámbito de competencia, resoluciones y su contenido. Notificación, comunicación e informe a la Asamblea Nacional. Régimen financiero**

Según la Ley Nº 212, los principios que rigen el ejercicio de las funciones del Procurador para la defensa de los derechos humanos y sus delegados son: la oralidad, la gratuidad, la celeridad, la inmediación, la sencillez, la brevedad y la discrecionalidad.

Este último principio, la discrecionalidad, posibilita al Procurador un amplio margen para decidir la oportunidad de su actuar y la materia o actividad de la administración que desea investigar. Adicionalmente, y al igual que para los procedimientos penales, todos los días y horas son hábiles para el desempeño de sus funciones.

Toda persona puede interponer ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, sin exclusiones de ninguna naturaleza, incluyendo el internamiento en régimen penitenciario o policial y cualquier otra sujeción o dependencia de una administración o poder público. Si el Procurador lo estima conveniente puede mantenerse en secreto la fuente de donde recibe su información. Si la denuncia se relaciona con hechos que son conocidos por los tribunales de justicia y se hayan pendientes de resolución judicial puede ser no atendible, a menos que se fundamenten en retardación de justicia.

Si la Procuraduría decide no dar trámites a una denuncia por falta de mérito, tiene que disponerlo mediante resolución fundada, la cual debe ser informada al interesado explicándole las razones e indicándole las vías a tomar, sin perjuicio que él tome las decisiones que estime conveniente.



Recibida una denuncia y resuelto investigarla se debe disponer la investigación inmediatamente de los ocho días posteriores a la presentación de la misma, vencidos los cuales, y dependiendo de las características del caso, el Procurador debe dictar una resolución inicial que puede ser en los sentidos siguientes:

- a) Mandando a archivar lo que resulte sin fundamento o insuficiente para presumir la violación a los derechos humanos.
- b) Indicar que se presume la violación a los derechos humanos, profundizándose en las investigaciones.
- c) Declarando que se comprobó la violación de los derechos humanos.

Adicionalmente, el Procurador puede disponer la ampliación del término de la investigación durante un plazo fatal de treinta días.

El funcionario o autoridad requerida debe presentar su informe en un plazo de setenta y dos horas.

Toda denuncia debe contener las calidades o generales de ley del denunciante y una explicación de los hechos denunciados. La denuncia puede presentarse en papel común, por telegrama, por fax, por carta y aún verbalmente, levantándose en este caso el acta correspondiente. La actuación de la Procuraduría es gratuita para el interesado y no es necesaria la intervención o asesoría de abogado a menos que el interesado decida ser asistido por abogado. De toda denuncia la Procuraduría debe acusar recibo. Se prohíbe la censura de correspondencia dirigida al Procurador desde cualquier centro de detención policial, de trabajo, de estudio, de penitenciaría o de una unidad militar.

También es prohibida la interceptación de las conversaciones que se produzcan entre el Procurador o sus delegados y los centros relacionados en el párrafo anterior. La violación a esta disposición constituye responsabilidad penal o administrativa, según el caso. Los funcionarios y empleados públicos y las personas en general, deben acudir ante el Procurador cuando sean citados por él y en el caso de policías y militares, las citaciones se hacen a través de sus superiores jerárquicos correspondientes.

**Inspección y Acceso a documentación.** El Procurador está facultado para inspeccionar cualquier instalación o dependencia de la administración pública y para tener acceso a cualquier documentación, expediente o información de la misma, pudiendo solicitar a los poderes públicos (órganos de gobierno) todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos "teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 538 y siguientes del Código Penal." El artículo 538 Pn. tipifica el delito de revelación de secretos y sin entrar a su análisis particular es lógico que para los efectos de las investigaciones del Procurador debe haber limitaciones, cuando se trate de la información relacionada con la defensa y la seguridad del Estado, pero la Ley Nº 212 pareciera no hacer ninguna excepción o limitación.

Ahora bien, qué sucede si el Procurador recibe información clasificada como secreta y la divulga en perjuicio del Estado? La lógica indica que habría que abrirse una investigación por la autoridad competente para determinar el grado de responsabilidad y el perjuicio causado al Estado.

La Ley Nº 212 determina que las investigaciones seguidas por el Procurador, así como los trámites procedimentales se deben realizar bajo estricta reserva y cuando estime que un documento clasificado como secreto no le fuera remitido y esto afectare en forma decisiva la buena marcha de su investigación, debe informarlo a la Comisión de Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional.

Según el artículo 34 de la Ley Nº 212, todos los órganos, sus titulares y funcionarios públicos están en la obligación de prestar, en forma preferente y urgente, la debida colaboración al Procurador para la defensa de los derechos humanos, o al funcionario que él delegue para tal fin y si no lo hacen cometen desacato y son sujetos de responsabilidad administrativa. El Procurador debe incluir en su informe anual estos hechos e informar al Procurador General de Justicia para que en nombre del Estado ejerceite las acciones legales correspondientes (artículo 35, Ley Nº 212).

Los órganos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional están obligados a colaborar de manera preferente con el Procurador en sus investigaciones y brindarle todas las facilidades para el desempeño de sus funciones.

La competencia del Procurador se extiende a la actividad de la administración pública del Estado, la administración municipal, de las regiones autónomas y de las universidades, las cuales coordinarán sus funciones con las del Procurador y éste podrá solicitarles su colaboración (artículo 37, Ley N° 212). Hay que recordar que la actividad de Procurador se limita a la vigilancia y control de la actividad de la administración pública en lo concerniente a violaciones o amenazas de violación de los derechos humanos.

En lo referente a las Universidades, hay que tener muy claro el ámbito de la vigilancia y control del Procurador para que no se lesione la autonomía universitaria consignada en el artículo 125 Cn.

Anteriormente nos hemos referido al contenido de las resoluciones del Procurador, que están señaladas en el artículo 30 de la Ley N° 212 y que se dan una vez que el Procurador ha realizado la investigación inicial.

En los casos en que se archive un expediente, éste puede ser reabierto cuando haya nuevos elementos que permitan presumir la violación de derechos humanos.

En los casos que se presume la violación de derechos humanos se continúan las investigaciones por un plazo fatal de treinta días para cumplirlas.

En una reforma a la Ley N° 212 se puede cambiar la redacción usando los términos presunción de violación y decir: *"Cuando haya indicios racionales de violación de derechos humanos."*

En los casos de violación comprobada de derechos humanos, el Procurador puede:

- 1) Iniciar o promover las acciones de responsabilidad e interponer los recursos correspondientes para defender y establecer a favor del quejoso sus derechos violados o amenazados de ser violados.
- 2) Si la violación no es de orden penal y se trata de una primera vez, el Procurador puede hacer una advertencia al funcionario para que evite violaciones de derechos humanos y en lo sucesivo puede hacerle un recordatorio de sus deberes, enviando copia

del recordatorio a su superior jerárquico. Si el caso lo amerita debe iniciar los procedimientos administrativos y disciplinarios correspondientes siguiendo el siguiente procedimiento:

- a) Envió el informe al funcionario responsable y a su superior jerárquico, citándoles para que comparezca ante él en la fecha y hora señalada.
- b) En la audiencia o comparecencia les presentará los elementos probatorios en que funda su conclusión.
- c) Posteriormente emitirá una resolución que se referirá exclusivamente a la actuación del funcionario cuya responsabilidad de la violación ha sido comprobada recomendando, ya sea una llamada de atención privada o pública, remoción en el cargo o su destitución.

Nos parece que "remoción en el cargo" es lo mismo que "destitución," la norma debería decir, suspensión en el ejercicio del cargo o destitución.

- 3) Si se trata de la comisión de un delito, trasladará el caso a la Procuraduría General de Justicia para que ésta ejerza la acción legal correspondiente.

Cuando el funcionario público se negare por dos veces consecutivos a darle cumplimiento a las recomendaciones del Procurador, para la restitución del goce o ejercicio de los derechos violados, será objeto de sanciones por desacato o responsabilidad administrativa, según el caso, sin perjuicio de su interpelación por la Asamblea Nacional, y "si como consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de sus miembros, considera que ha lugar a la formación de causa, el funcionario interpelado perderá desde ese momento su inmunidad" y puede ser procesado ante los tribunales comunes.

Las resoluciones del Procurador deben ser notificadas a las partes interesadas. El Procurador informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestiones, así como de la respuesta que haya dado la administración o los funcionarios implicados, salvo el caso de que las investigaciones o gestiones fuesen, por su naturaleza, consideradas de carácter reservado o declaraciones secretas.

El Procurador no puede en sus resoluciones anular los actos o resoluciones de la administración pública, pero puede sugerir la modificación de los criterios para “remediar” los efectos inmediatos y futuros.

Asimismo, si el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjuicios para la administración, puede sugerir a la Asamblea Nacional o la administración pública sus modificaciones.

El Procurador debe presentar a la Asamblea Nacional, el diez de diciembre de cada año un informe ordinario anual, el cual deberá presentarse en forma circunstanciada, acorde con los fines y objetivos de la institución, y con base a sus atribuciones y a los resultados de sus investigaciones.

También debe presentar al órgano legislativo informes especiales cuando el caso lo amerite o por solicitud de la propia Asamblea Nacional.

Asimismo, deberá informar a la Asamblea Nacional de la ejecución anual del presupuesto que se le asignó a la institución. Los informes especiales se referirán solamente a los puntos de interés, según el criterio del Procurador o de la Asamblea Nacional, si ella los ha solicitado.

Los recursos financieros para el funcionamiento y actividades de la Procuraduría y del Procurador provienen del Presupuesto General de la República y debe rendirse cuenta de su manejo e inversión, de conformidad con la Ley de Régimen Presupuestario, y están sujetos a la vigilancia y control de la Contraloría General de la República.

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la Procuraduría son administrados por el Procurador y pueden ser adquiridos libres de impuestos y contribuciones fiscales, departamentales y municipales.

La Procuraduría también puede adquirir los bienes necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, por medio de herencias, donaciones y cualquier contribución de personas naturales y jurídicas.

Adicionalmente, la Procuraduría está exenta del pago de los servicios públicos de agua, energía eléctrica, teléfonos y correos, según el artículo 50 de Ley N° 212. Habría que referirse a las leyes especiales para confirmar estas exenciones, lo cual no es materia de este estudio.

## **XI. Conclusiones Generales**

La finalidad de esta obra, y como su nombre lo indica, es presentar al lector un análisis de los mecanismos institucionales para defensa de los derechos humanos, comprendiendo en ella no sólo los mecanismos constitucionales contenidos en la Ley de Amparo vigente y sus reformas, como son el recurso de inconstitucionalidad, el de amparo y el de habeas corpus, los cuales se hacen efectivos por los procedimientos propios de la justicia constitucional, sino también analizar otra institución, como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución creada mediante la Ley N° 212 y cuya existencia pasa un tanto desapercibida para el ciudadano común y corriente a pesar de su importancia y los esfuerzos de quienes la dirigen.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos es el Ombudsman nicaragüense y la Procuraduría es la institución que debe velar por la protección de los derechos del ciudadano frente a la actuación de los funcionarios de la administración que con su actuar violentan los derechos humanos de los gobernados.

A estas alturas de la civilización, la vieja y apasionante discusión sobre los orígenes de los derechos y el Estado ya no tiene razón de ser, los derechos humanos son una realidad, al igual que el Estado, producto de la mentalidad organizativa del hombre es también una realidad. Sin embargo, mientras el Estado Nación tiende a eclipsarse y perder poder como consecuencia de la globalización de las economías y la existencia de procesos y circunstancias de dimensión supranacional que escapan a su control, los derechos humanos y su constitucionalización, no sólo existen, y seguirán existiendo, sino que son condición sine qua non para la existencia de una globalización real e integral.

En la aldea global, y aún con la existencia de un nuevo orden económico mundial, el hombre, como ser humano creado por Dios a su imagen y semejanza, sigue siendo el epicentro de la historia y de la civilización y de sus asombrosos adelantos tecnológicos.

Siendo esto así, y como ya es sin dudas reconocido que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, donde el

hombre esté, estarán vigentes esos derechos humanos, y el Estado, independientemente que continúe existiendo como Estado Nación o como parte de la aldea global, está obligado a reconocer y proteger esos derechos humanos fundamentales. Como explica Harold Laski, los derechos *"son anteriores a la existencia del Estado, en el sentido que, reconocidos o no, son la fuente de donde deriva su validez legal."*

Dicho en otras palabras, el grado de reconocimiento y respeto de los derechos humanos es un parámetro para medir el nivel de democracia que se practique y se disfrute en determinada sociedad.

Hoy la lucha no es por el reconocimiento de los derechos humanos, hoy la lucha es por su defensa, por ello es de suma importancia la existencia de mecanismos institucionales que tengan la suficiente fortaleza y eficacia para abordar exitosamente esa tarea.

Los mecanismos de defensa de los derechos humanos a través del control jurisdiccional parecieran agotarse o resultar insuficientes frente a los nuevos retos de la globalización, por ello la existencia de figuras como el Ombudsman, independientemente de su denominación particular en cada sistema, es inevitablemente necesaria.

Sin embargo, como lo afirma Jorge Mario García Laguardia, además de ser *"una institución complementaria de los sistemas y procedimientos de control jurídico del poder público, y en especial de la administración..."* debe quedar claro que *"el papel del Ombudsman es de crítico y fiscal constructivo de la actividad constructiva del Estado, y que su papel no es el de 'contradictor efectista' del gobierno, lo que corresponde a la oposición política representada por los partidos políticos, dentro y fuera del Parlamento. Más bien su papel es el de realizar un control no jurisdiccional, una crítica constructiva para mejorar el funcionamiento de la administración, no para debilitarla y menos para destruirla."* (Jorge Mario García Laguardia, Los defensores del pueblo y los problemas de los Derechos Humanos en América Latina. Revista Contribuciones 4/1998. CIEDLA).



El Defensor de los Derechos Humanos *"no debe ser una figura cosmética o estética, sino por el contrario, una figura seria y objetiva. No debe caracterizarse por su efectivismo, sino por su eficiencia..., puede colaborar a solucionar los problemas."* (Jorge Maiorano, Defensor del Pueblo de Argentina. Citado por García Laguardia en obra citada).

Otro detalle que hay que destacar es que el defensor de los derechos humanos debe desarrollar su trabajo profesionalmente y con eficacia, pero apegado estrictamente a la ley y dentro del ámbito de su competencia, teniendo muy claramente presente que la Procuraduría es una institución del Estado totalmente independiente del gobierno, aunque se relaciona como efecto de las competencias esa vinculación no debe implicar dependencia.

Muchas otras conclusiones se pueden plantear, pero basten por esta vez las señaladas, advirtiendo que en lo que respecta al Procurador defensor de los derechos humanos, su figura tiene una legitimación esencial en el sistema democrático y juega un rol especial en los procesos de transición de los regímenes autoritarios a los regímenes democráticos y que sus resoluciones tienen la autoridad que les otorga el prestigio de la institución y la sabiduría, moderación y ponderación de sus decisiones.

Finalmente, diríamos que ya se hace necesaria la actualización de la legislación referente a los mecanismos institucionales para la defensa de los derechos humanos.

## **Bibliografía**

- **Código Penal de la República de Nicaragua.** Sergio Cuarezma. Editorial Hispamer.
- **Constitución Política de la República de Nicaragua.** Editorial Tercer Milenio, 2000.
- **Constitución y Derechos Humanos.** Iván Escobar Fornos. Edición UCA.
- **Constitucionalismo y Globalización.** Julio Ramón García Vilchez. Edición UCEM.
- **Control Constitucional y Seguridad Jurídica.** Julio Ramón García Vilchez. Edición Corte Suprema de Justicia.
- **Defensa de los Derechos Humanos.** Iván Escobar Fornos. Editorial Hispamer.
- **Derecho Político y Constitucional.** Rodrigo Borja. Fondo de Cultura Económica.
- **Derechos Humanos: Actualidad y Perspectivas.** Revista Contribuciones. CIEDLA.
- **Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.** Manuel Ossorio y Florit. Editorial Heliasta.
- **Diccionario Jurídico ESPASA.** Editorial ESPASA.
- **El Control Constitucional en Nicaragua.** Julio Ramón García Vilchez. Edición UCEM.
- **El Control del Poder.** Diego Valadés. Editorial Porrúa/UNAM (México).

- El nuevo derecho constitucional latinoamericano (Recopilación). FKAS/CIEDLA/AVDC/COPRE.
- Ensayo sobre las libertades. Raymond Aron. Alianza Editorial.
- Estatuto General y Reglamento de la Asamblea Nacional. Ley Nº 122. Texto actualizado al 10 de marzo de 1994.
- Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. IIDH/Comisión de la Unión Europea.
- Ley de Amparo. Gaceta, Diario Oficial, Nº 241 del día 20 de diciembre de 1998.
- Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Gaceta, Diario Oficial, Nº 7 del día 10 de enero de 1996.
- Ley de Reforma a la Ley de Amparo, publicada en El Nuevo Diario.
- Ley de Reforma a la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Gaceta, Diario Oficial, Nº 191 del día 9 de octubre de 2003.
- Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento. IIDH/USAID.
- Los Derechos Humanos. Harold Laski. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica.
- Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político. Carlos Huerta Ochoa. UNAM (México).
- Reforma Constitucional y Poder Judicial. FKAS/CSJ

# **Anexos**

---

## **LEY DE AMPARO**

Ley No. 49, Gaceta, Diario Oficial

### **EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

Hace saber al pueblo Nicaragüense que:

### **LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

#### **Considerando:**

#### **I**

Que la Constitución Política para garantizar su supremacía estableció en sus artículos 187, 188, 189, 190, los recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Exhibición Personal, remitiendo sus regulaciones a la Ley de Amparo.

#### **II**

Que los Recursos por Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal, tienen como objeto ser el instrumento mediante el cual se ejerza el control del ordenamiento jurídico y de las actuaciones de los funcionarios públicos para mantener y restablecer la supremacía de la Constitución Política.

#### **III**

Que con la Ley de amparo se culmina con el mandato contemplado en el artículo 184 de la Constitución Política de aprobar las leyes constitucionales: Electoral, de Emergencia y de Amparo, y se consolida el proceso de institucionalización del país.

En uso de sus facultades,  
Ha dictado

La siguiente:

## **LEY DE AMPARO**

### **TÍTULO I SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN**

#### **Capítulo Único Del Control Constitucional**

**Artículo 1.** La presente ley, de rango constitucional, a fin de mantener y restablecer la supremacía de la Constitución Política, según lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 196 de la misma, tienen por objeto regular los recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Exhibición Personal, conforme a los artículos 187, 188, 189 y 190 de la Constitución Política.

**Artículo 2.** El Recurso por Inconstitucionalidad procede contra toda ley, decreto ley, decreto o reglamento que se oponga a la Constitución Política.

**Artículo 3.** El Recurso de Amparo procede en contra de toda disposición, acto o resolución y en general, contra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

**Artículo 4.** El Recurso de Exhibición Personal procede en favor de aquellas personas cuya libertad, integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro de serlo por:

1. Cualquier funcionario, autoridad, entidad o institución estatal, autónoma o no.
2. Por actos restrictivos de la libertad personal de cualquier habitante de la República realizado por particulares.

**Artículo 5.** Los Tribunales de Justicia observarán siempre el principio de que la Constitución Política prevalece sobre cualquier Ley o Tratado Internacional.

Asimismo deberán:

1. Dirigir todos los trámites del recurso, impedir su paralización y obligar que se cumpla el principio de economía procesal.
2. Prevenir y sancionar los actos contrarios a la lealtad y buena fe que deben observarse en el recurso.
3. Hacer efectivo los principios de igualdad, publicidad y celeridad del recurso.
4. Tomar todas las providencias necesarias para el cumplimiento de las resoluciones que dicten. No habrá caducidad en estos recursos.

## **TÍTULO II**

### **RECURSO POR INCONSTITUCIONALIDAD**

#### **Capítulo I**

#### **Interposición del Recurso**

**Artículo 6.** El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, cuando una ley, decreto ley, decreto o reglamento perjudique directa o indirectamente sus derechos constitucionales.

**Artículo 7.** El Recurso por Inconstitucionalidad se dirigirá contra el titular del órgano que emitió la ley, decreto ley, decreto o reglamento.

**Artículo 8.** Corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno conocer y resolver el Recurso por Inconstitucionalidad.

**Artículo 9.** La Procuraduría General de Justicia será parte en la sustanciación del presente recurso.

**Artículo 10.** El Recurso por Inconstitucionalidad se interpondrá dentro del término de sesenta días contados desde la fecha en que entre en vigencia la ley, decreto ley, decreto o reglamento.

**Artículo 11.** El Recurso por Inconstitucionalidad se formulará por

escrito, en papel sellado de ley, dirigido directamente a la Corte Suprema de Justicia, presentado en Secretaría con copias suficientes en papel común para que sean entregadas al funcionario contra quien fuere dirigido el recurso y al Procurador General de Justicia.

El escrito deberá contener:

1. Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente.
2. Nombres y apellidos del funcionario o titular del órgano en contra de quien fuera interpuesto.
3. La Ley, decreto ley, decreto o reglamento, impugnado, la fecha de su entrada en vigencia y la disposición o disposiciones especiales que se opongan a la Constitución, determinando las normas que se consideren violadas o contravenidas.
4. Una exposición fundamentada de los perjuicios directos o indirectos que la ley, decreto ley, decreto o reglamento le cause o pudiere causarle.
5. La solicitud expresa para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento o partes de la misma.
6. Señalamiento de casa conocida para notificaciones.

**Artículo 12.** La Corte Suprema de Justicia concederá al recurrente un plazo de cinco días para que llene las omisiones de forma que notare en el escrito de interposición del Recurso. Si el recurrente dejare pasar este plazo, el Recurso se tendrá por no interpuesto.

**Artículo 13.** El Recurso por Inconstitucionalidad podrá interponerse personalmente, o por apoderado especialmente facultado para ello. En este segundo caso el poder deberá ser otorgado ante Notario Público domiciliado en Nicaragua.

## **Capítulo II**

### **Tramitación del Recurso**

**Artículo 14.** Interpuesto en forma el Recurso por Inconstitucionalidad la Corte Suprema de Justicia, se pronunciará dentro de quince días sobre la admisibilidad del mismo con base en los artículos 6, 10, 11, 12, 13 y 19 de la presente Ley, rechazándolo de plano o mandando seguir el procedimiento.



**Artículo 15.** Una vez admitido el Recurso por Inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia pedirá informe al funcionario en contra de quien se interpone, el que deberá rendirlo dentro de quince días de recibida la notificación correspondiente, pudiendo alegar todo lo que tenga a bien. Para ello se le entregará copia del escrito y de la providencia, respectiva que se dicte. Igual copia se entregará a la Procuraduría General de Justicia al momento de la notificación.

**Artículo 16.** Si por cualquier circunstancia, la Corte Suprema de Justicia necesitara datos que no aparezcan en el proceso para resolver el Recurso, dictará las providencias que estime necesarias para obtenerlos dándole intervención al recurrente, al funcionario y a la Procuraduría General de Justicia.

**Artículo 17.** Transcurrido el término para que el funcionario rinda su Informe, y una vez practicadas las diligencias especiales, si fuere el caso, con el informe o sin él, la Corte Suprema de Justicia dará audiencia por seis días a la Procuraduría General de Justicia para que dictamine el recurso, pasado este término, con el dictamen o sin él, la Corte Suprema de Justicia dentro de sesenta días dictará la sentencia correspondiente, pronunciándose sobre la inconstitucionalidad alegada.

### **Capítulo III**

#### **La Sentencia y sus Efectos**

**Artículo 18.** La declaración de Inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de la sentencia que lo establezca, la inaplicabilidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento o la disposición o disposiciones impugnadas de los mismos, si la Inconstitucionalidad fuere parcial.

La Corte Suprema de Justicia, previa notificación de las partes, enviará copia de la sentencia a los demás Poderes del Estado para su conocimiento y la mandará publicar en La Gaceta, Diario Oficial.

**Artículo 19.** La sentencia que declare si es inconstitucional o no, el todo o parte de una ley, decreto ley, decreto o reglamento producirá cosa juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales.

Cuando se recurrió solamente contra parte o partes de los citados cuerpos normativos, el Tribunal podrá pronunciarse de oficio específicamente sobre el resto de los mismos.

## **Capítulo IV**

### **Inconstitucionalidad en Casos Concretos**

**Artículo 20.** La parte recurrente de un Recurso de Casación o de Amparo podrá alegar la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado.

Si resultara ser cierta la Inconstitucionalidad alegada, la Corte Suprema de Justicia, además de casar la sentencia o de amparar al recurrente, declarará la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento aplicado, de conformidad con el artículo 18 de la presente ley.

**Artículo 21.** Cuando por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación hubiese sido resuelto un asunto con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto ley, decreto o reglamento, el funcionario judicial o tribunal en su caso deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia ratifica la Inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento, procederá a declarar su inaplicabilidad de acuerdo con la presente ley.

**Artículo 22.** En los casos de los dos artículos anteriores la declaración de Inconstitucionalidad de una ley, decreto ley, decreto o reglamento, no podrá afectar o perjudicar derechos adquiridos por terceros en virtud de dichas leyes, decretos leyes, decretos o reglamentos.

## **TÍTULO III**

### **RECURSO DE AMPARO**

#### **Capítulo I**

##### **Interposición del Recurso**

**Artículo 23.** El Recurso de Amparo solo puede interponerse por parte agraviada. Se entiende por tal toda persona natural o jurídica a quien perjudique o esté en inminente peligro de ser perjudicada

por toda disposición, acto o resolución, y en general, toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.

**Artículo 24.** El Recurso de Amparo se interpondrá en contra del funcionario o autoridad que ordene el acto que se presume violatorio de la Constitución Política contra el agente ejecutor o contra ambos.

**Artículo 25.** El Recurso de Amparo se interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala para lo Civil de los mismos, en donde estuviera dividido en Salas, el que conocerá de las primeras actuaciones hasta la suspensión del acto inclusive, correspondiéndole a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva. Si el Tribunal de Apelación se negare a tramitar el recurso, podrá el perjudicado recurrir de Amparo por la vía de hecho ante la Corte Suprema de Justicia.

**Artículo 26.** El Recurso de Amparo se interpondrá dentro del término de treinta días, que se contará desde que se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado, la disposición, acto o resolución. En todo caso este término se aumentará en razón de la distancia.

También podrá interponerse el Recurso desde que la acción u omisión haya llegado a su conocimiento.

**Artículo 27.** El Recurso de Amparo se interpondrá por escrito en papel común con copias suficientes para las autoridades señaladas como responsables y para la Procuraduría General de Justicia. El escrito deberá contener:

1. Nombres, apellidos y generales del agraviado y de la persona que lo promueva en su nombre.
2. Nombre, y apellidos y cargos del funcionario, autoridades o agentes de los mismos contra quien se interpone el Recurso.
3. Disposición, acto, resolución, acción u omisión contra los cuales se reclama, incluyendo si la ley, decreto ley, decreto o reglamento, que a juicio del recurrente fuere inconstitucional.

4. Las disposiciones constitucionales que el reclamante estime violadas.
5. El Recurso podrá interponerse personalmente o por apoderado especialmente facultado para ello.
6. El haber agotado los recursos ordinarios establecidos por la ley, o no haberse dictado resolución en la última instancia dentro del término que la ley respectiva señala.
7. Señalamiento de casa conocida en la ciudad sede del Tribunal para subsiguientes notificaciones.

**Artículo 28.** El Tribunal de Apelaciones concederá al recurrente un plazo de cinco días para que llene las omisiones de forma que notare en el escrito de interposición del Recurso. Si el recurrente dejase pasar este plazo, el Recurso se tendrá por no interpuesto.

**Artículo 29.** El menor que hubiere cumplido quince años, podrá interponer el Recurso de Amparo, sin Intervención de su legítimo representante, cuando éste se hallare ausente o impedido. En tal caso, el Tribunal sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, nombrará al menor un guardador especial para que lo represente, pudiendo el propio menor hacer por escrito la designación de su representante. Si el menor no hubiere cumplido quince años de edad y se hallare ausente o impedido su legítimo representante podrá interponer el Recurso de Amparo en su nombre, la Procuraduría General de Justicia o cualquier otra persona.

**Artículo 30.** La Procuraduría General de Justicia será parte en la sustanciación del presente recurso.

## **Capítulo II**

### **Suspensión del Acto**

**Artículo 31.** Interpuesto en forma el Recurso de Amparo ante el tribunal, se pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia acompañándole copia del Recurso. El Tribunal dentro del término de tres días, de oficio o a solicitud de parte, deberá decretar a suspensión del acto contra el cual se reclama o denegarla en su caso.

**Artículo 32.** Procederá la suspensión de oficio cuando se trate de algún acto que de llegar a consumarse, haría físicamente imposible

restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, o cuando se notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, funcionario o agente contra quien se interpusiera el Recurso, o cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará por el Tribunal, notificándolo sin tardanza por cualquier vía para su inmediato cumplimiento.

**Artículo 33.** La suspensión a solicitud de parte, será atendida cuando concurren las siguientes circunstancias:

1. Que la suspensión no cause perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público.
2. Que los daños y perjuicios que pudieren causarle al agraviado con su ejecución sean de difícil reparación a juicio del Tribunal.
3. Que el recurrente otorgare garantía suficiente para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que la suspensión pudiere causar a terceros, si el amparo fuere declarado sin lugar.

**Artículo 34.** Al decretarse la suspensión, el Tribunal fijará la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomará las medidas pertinentes para conservar la materia objeto del amparo, hasta la terminación del respectivo procedimiento.

**Artículo 35.** La suspensión otorgada conforme al artículo 31 y siguientes quedará sin efecto si un tercero interesado, da a su vez caución suficiente para restituir las cosas al estado que tenía antes del acto que motivó el amparo y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se declare con lugar el amparo.

**Artículo 36.** El Tribunal fijará el monto de la garantía y de la contragarantía a que se refieren los artículos anteriores.

### **Capítulo III**

#### **Tramitación del Recurso**

**Artículo 37.** El Tribunal respectivo pedirá a los señalados como responsables, envíen informe a la Corte Suprema de Justicia dirigiéndoles oficio por correo en pieza certificada, con aviso de recibo, o por cualquier otra vía que a juicio del Tribunal resulte mas expedito. El informe deberá rendirse dentro del término de diez días, contados desde la fecha en que reciban el correspondiente oficio. Con él se remitirán en su caso, las diligencias de todo lo actuado.

**Artículo 38.** Una vez resuelta la suspensión del acto reclamado, se remitirán los autos en el término de tres días a la Corte Suprema de Justicia para la tramitación correspondiente previniéndoles a las partes que deberán personarse dentro del término de tres días hábiles, más el de la distancia, para hacer uso de sus derechos. Si el recurrente no se persona dentro del término señalado anteriormente, se declarará desierto el Recurso.

**Artículo 39.** Recibidos los autos por la Corte Suprema de Justicia, con o sin el informe, dará al Amparo el curso que corresponda. La falta de informe establece la presunción de ser cierto el acto reclamado.

**Artículo 40.** La Corte Suprema de Justicia podrá pedir al recurrente ampliación sobre los hechos reclamados y resolver sobre todo lo relativo a la suspensión del acto.

**Artículo 41.** En el Recurso de Amparo no habrá lugar a caducidad ni cabrán alegatos orales, y en lo que no estuviera establecido en esta Ley se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil en todo lo que sea aplicable, dándose intervención en las actuaciones a las personas que interponen el Recurso, a los funcionarios o autoridades en contra quienes se dirija, a la Procuraduría General de Justicia, y a todos los que pueda afectar la resolución final si se hubieren presentado.

**Artículo 42.** Los funcionarios o autoridades no pueden ser representados en el Recurso de Amparo, pero si podrán por medio

de simple oficio, acreditar delegados ante el Tribunal para el solo efecto de que rinda pruebas, aleguen y hagan gestiones en las correspondientes audiencias.

**Artículo 43.** Si el Tribunal Supremo no encontrara datos suficientes para resolver el Amparo lo abrirá a pruebas por el término de diez días, siendo admisible toda clase de pruebas y podrá recabar de oficio otras que considere convenientes.

## **Capítulo IV**

### **La Sentencia y sus Efectos**

**Artículo 44.** La sentencia sólo se referirá a las personas naturales o jurídicas que hubieren interpuesto el Recurso, limitándose si procediese a ampararlo y protegerlos en el caso especial controvertido.

**Artículo 45.** La sentencia deberá ser razonada, con fijación clara del acto o actos reclamados, indicación de los fundamentos legales en que se apoya para declarar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado y de los puntos resolutivos del mismo, señalándose en ellos con claridad y precisión el acto o actos por los que se concede o deniegue el Amparo.

**Artículo 46.** Cuando el acto o actos reclamados sean de carácter positivo, la sentencia que concede el Amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos transgredidos, restableciendo las cosas al estado que tenían antes de la transgresión.

Cuando sea de carácter negativo el efecto del Amparo será obligar a las autoridades o funcionarios responsables a que actúen en el sentido de respetar la ley o garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma exija.

**Artículo 47.** La Corte Suprema de Justicia en todo caso deberá dictar la sentencia definitiva dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la recepción de las diligencias.

**Artículo 48.** Dictada la sentencia, el tribunal la comunicará por oficio dentro del término de tres días hábiles a las autoridades o funcionarios responsables para su cumplimiento; igual cosa hará con las demás partes.

**Artículo 49.** Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación las autoridades o funcionarios responsables no dieren cumplimiento a la sentencia en el caso de que la naturaleza del acto lo permita, la Corte Suprema de Justicia requerirá al superior inmediato de la autoridad o funcionario responsable, para que obligue a éstos a cumplir sin demora la sentencia, si dicha autoridad o funcionario no tuviere superior jerárquico, el requerimiento se hará directamente a ellos.

**Artículo 50.** Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la Corte Suprema de Justicia, pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República para que proceda a ordenar su cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia para que derive las acciones correspondientes. *Esto mismo se observará en los casos en que la suspensión del acto decretado por el Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia no sea obedecido.*

**Artículo 51.** No procede el Recurso de Amparo:

1. Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia.
2. Cuando la infracción producida por el acto reclamado sea irreparable, material o jurídicamente.
3. Contra los actos que hubieren sido consentidos por el agraviado de modo expreso o tácito. Se presumen consentidos aquellos actos por los cuales no se hubiere recurrido de Amparo dentro del término legal, sin perjuicio de la suspensión del término de conformidad al derecho común.

**Nota:** Este artículo fue reformado por la Ley N° 205. Ver Anexo 2.



## **TÍTULO IV**

### **RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL**

#### **Capítulo I**

##### **Interposición del Recurso y Tribunal Competente**

**Artículo 52.** El Recurso de Exhibición Personal podrá interponerlo a favor del agraviado cualquier habitante de la República, por escrito, carta, telegrama o verbalmente.

**Artículo 53.** El Recurso de Exhibición Personal se interpondrá en contra del funcionario o autoridad responsable, representante o funcionario de la entidad o institución que ordene la violación o la cometa, en contra del agente ejecutor, o en contra de todos; y en contra del particular que restrinja la libertad personal.

**Artículo 54.** El Recurso de Exhibición Personal, en el caso de detención ilegal realizada por cualquier autoridad, se interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala Penal de los mismos, donde estuviera dividido en Salas. En el caso de actos restrictivos de la libertad, realizado por particulares, las autoridades competentes serán los Jueces de Distrito para lo Criminal respectivo.

El Recurso de Exhibición Personal se puede interponer en cualquier tiempo, aún en Estado de Emergencia, mientras subsista la privación ilegal de la libertad personal o amenaza de la misma. Todos los días y horas son hábiles para este fin.

**Artículo 55.** El peticionario al interponer el Recurso de Exhibición Personal, deberá expresar los hechos que lo motivan, el lugar en que se encuentra el detenido, si se supiere, y el nombre o el cargo de que ejerce la autoridad o del funcionario, representante o responsable de la entidad o institución que ordenó la detención, si se supiere. La petición podrá hacerse en Papel común por telegrama, carta y aun verbalmente levantándose en este último caso el acta correspondiente.

**Artículo 56.** Introducida en forma la petición ante el Tribunal de la jurisdicción donde se encuentre el favorecido por el Recurso, el Tribunal decretará la Exhibición Personal y nombrará Juez Ejecutor que podrá ser cualquier autoridad o empleado del orden civil o un ciudadano de preferencia abogado, de notoria honradez e instrucción, procurando que el nombramiento no recaiga en funcionarios propietarios del Poder Judicial.

**Artículo 57.** En el caso de amenaza de detención ilegal, el peticionario al interponer el Recurso de Exhibición Personal deberá expresar en qué consiste la amenaza debiendo en todo caso ser real, inmediata, posible y realizable, llenándose además todos los requisitos contemplados en el artículo 55 de la presente Ley.

**Artículo 58.** Introducido en forma el Recurso de Exhibición Personal por amenaza, el Tribunal solicitará a la autoridad en contra de quien se dirige el Recurso que rinda informe en el término de veinticuatro horas, con dicho informe o sin él, el Tribunal decidirá admitir o rechazar dicho Recurso. En el caso de que lo admitiere se deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 en lo que sea aplicable.

En el caso de que el Tribunal rechace el Recurso, el perjudicado podrá recurrir de queja ante la Corte Suprema de Justicia y de lo resuelto por ésta no habrá Recurso alguno.

## **Capítulo II**

### **Actuación del Juez Ejecutor**

**Artículo 59.** El cargo de Juez Ejecutor será gratuito y obligatorio, y sólo por imposibilidad física o implicancia comprobada podrá negarse a desempeñarlo. Fuera de estas dos excepciones se le aplicará multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual, sin perjuicio de ser juzgado por desobediencia.

**Artículo 60.** El Juez Ejecutor procederá inmediatamente a cumplir su cargo. Al efecto, se dirigirá a la autoridad o persona contra quien se hubiere expedido el auto de exhibición, quien recibirá al juez ejecutor en forma inmediata sin hacerlo guardar antesala. Procederá a intimarlo que exhiba en el acto a la persona agraviada,

que muestre el proceso si lo hubiere o explique, en caso contrario, los motivos de la detención indicando la fecha de ella; todo lo cual hará constar en acta.

El Juez Ejecutor podrá exigir la exhibición de la persona detenida a la autoridad o funcionario que lo tenga directamente bajo su custodia, aunque estuviera a la orden de otro funcionario o autoridad, sin perjuicio de continuar con los otros trámites del recurso.

**Artículo 61.** El Juez Ejecutor, en presencia del proceso o sin él, de las explicaciones del intimado y de las disposiciones legales, procederá según las reglas siguientes:

1. Si la persona estuviera a la orden de autoridad que no es la facultada para conocer el caso, podrá ordenar su libertad o que pase de inmediato a la autoridad competente.
2. Si la persona estuviera detenida a la orden de una autoridad competente, pero el término de ley se hubiere excedido, ordenará por auto que el detenido pase inmediatamente a la orden de la autoridad que corresponda o que sea puesto en libertad.
3. Si el que tiene bajo su custodia a otra fuese la autoridad competente, pero no hubiese iniciado el proceso o no hubiese proveído el auto de detención en el término de ley de puesto a su orden o no hubiere dictado el auto de prisión en el término legal, el Juez Ejecutor mandará por auto ponerlo en libertad bajo fianza de la haz otorgada apud acta ante el mismo Juez Ejecutor. Fuera de estos tres casos dispondrá por auto que el proceso siga su curso.
4. Si el que está bajo custodia, lo es por sentencia condenatoria firme, el Juez Ejecutor decretará por auto que el detenido continúe en tal condición por el término legal, pero si hubiere cumplido la condena, el Juez Ejecutor mandará por auto ponerlo inmediatamente en libertad.

Si se tratará de sentencia judicial cumplida según el reo, por compensaciones legales, será necesario que esté liquidada la pena para que pueda ordenar su libertad. El Juez Ejecutor ordenará tal liquidación.

5. Si el interno sufre diferente pena o más de las contempladas por la ley o sentencia, según el caso, o estuviese incomunicado

contra lo que ellas previenen el Juez Ejecutor dispondrá por auto que se cumpla la pena señalada en la sentencia y que cese la incomunicación.

El Juez Ejecutor está en la obligación de dictar dentro de la ley todas las medidas de seguridad que sean indispensables en favor del detenido o del que estuviese amenazado de serlo ilegalmente.

**Artículo 62.** En casos de haberse suspendido las garantías constitucionales referidas a la libertad individual, el Recurso de Exhibición Personal quedará vigente de conformidad con lo establecido en la Ley de Emergencia.

**Artículo 63.** La persona o autoridad requerida cumplirá lo mandado por el Juez Ejecutor en el acto mismo de la notificación. Si se negare, el Juez Ejecutor dará cuenta al Tribunal para que dicte las medidas tendientes al cumplimiento del mandato.

Si la persona o autoridad requerida expusiera que el detenido no está a su orden, deberá indicar la autoridad, funcionario o institución que ordenó la detención contra la cual deberá dirigirse el Juez Ejecutor.

En caso de que la autoridad últimamente indicada correspondiera a la comprensión territorial de otro Tribunal, el Juez Ejecutor estará obligado a informarlo telegráficamente de inmediato a dicho Tribunal para que proceda a nombrar nuevo Juez Ejecutor que cumpla el Recurso.

**Artículo 64.** En el caso de los incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 61, desde la notificación e intimación del Juez Ejecutor, todo procedimiento de la autoridad requerida será nulo y delictuoso.

En el caso del inciso 3 del mismo artículo, cuando el Juez Ejecutor ordenare la libertad, previa fianza de la haz, la autoridad judicial cumplirá lo ordenado por el Juez Ejecutor y continuará el desarrollo normal del proceso.

**Artículo 65.** Cuando se presuma detenida una persona y se ignore el lugar en que se encuentra y, además no se tuviere conocimiento de quién ordenó su detención, el solicitante se dirigirá al Tribunal respectivo para que gire orden a la Procuraduría General de Justicia,

a fin que de inmediato averigüe el lugar de su detención y quién es el responsable de la misma. La Procuraduría con la brevedad que el caso amerita, actuará haciendo uso de las facultades que las leyes le confieren.

**Artículo 66.** La autoridad, funcionario o empleado público, contra quien se dirigiera la exhibición, atenderá inmediatamente la intimación y lo resuelto por el Juez Ejecutor, de conformidad con las disposiciones de esta ley, bajo pena de multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual a juicio del Tribunal, sin perjuicio de ser juzgado por el delito que corresponda.

El Tribunal que conoce del Recurso impondrá la multa y pondrá el caso en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia, para que derive las acciones correspondientes.

En igual multa incurrirá la autoridad, funcionario o empleado público que no atendiera al Juez Ejecutor en la forma establecida en el artículo 60.

**Artículo 67.** Si la desobediencia es contra resoluciones del Tribunal tendrá las mismas sanciones del artículo anterior, y además, la separación del cargo.

Sin perjuicio de lo ordenado en el párrafo anterior, si la autoridad intimada estimare que el Juez Ejecutor se ha excedido en sus atribuciones o resuelto contra ley expresa, podrá informar al Tribunal de Apelaciones respectivo quien mandará a oír a la Procuraduría dentro del término de veinticuatro horas y resolverá conforme a derecho.

Si la autoridad intimada hubiese sido un Procurador se mandará a oír al superior inmediato.

En todo caso el Tribunal podrá de oficio revisar las actuaciones del Juez Ejecutor.

Cualquiera de los perjudicados con la resolución del Tribunal, podrá recurrir de queja ante la Corte Suprema de Justicia. De lo resuelto por ella no habrá recurso alguno.

**Artículo 68.** Cuando el funcionario que desobedezca el auto de exhibición fuese empleado o agente del Poder Ejecutivo, el Tribunal que conoce del Recurso lo pondrá inmediatamente en conocimiento de aquel, por medio de la Corte Suprema de Justicia, para que en el término de veinticuatro horas haga ejecutar lo mandado.

Si el Poder Ejecutivo se negare o dejare transcurrir el término sin llevar a efecto lo mandado, la Corte Suprema de Justicia hará constar el hecho públicamente y lo informará a la Asamblea Nacional.

La Corte Suprema de Justicia podrá hacer uso de la fuerza pública para darle cumplimiento al auto de exhibición. El interesado podrá a su vez solicitar a la Procuraduría General de Justicia la presentación de la acusación correspondiente.

**Artículo 69.** El Tribunal correspondiente, a solicitud de parte, dictará orden para que el Juez Ejecutor se apodere del favorecido y lo presente ante el mismo Tribunal, cuando se esté en presencia de alguno de los casos siguientes:

1. Cuando por declaración dada bajo promesa de ley de un testigo fidedigno o por indicio grave, aparece que alguno se hallare en prisión o custodia ilegales, y hay motivos fundados para creer que será extrañado del territorio de la República.
2. Cuando hubiesen motivos suficientes para creer que el detenido sufrirá un daño irreparable antes que pueda ser socorrido en el curso ordinario del procedimiento.
3. Cuando el auto de exhibición ha sido desobedecido.

### **Capítulo III**

#### **Queja y Actuaciones Especiales**

**Artículo 70.** Presentada la persona que se hallaba en prisión o restricción, acordará el Tribunal lo que corresponde para protegerla con arreglo a la ley, pudiendo en tales circunstancias pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus providencias. Dentro de los tres días siguientes, a más tardar, y a la sola vista de los autos, el Tribunal resolverá lo que sea de justicia.

**Artículo 71.** Siempre que el Tribunal declare que no ha lugar a la solicitud de Exhibición Personal o desoiga a la petición sin fundamento legal, podrá el solicitante en un plazo de veinte días, recurrir de queja ante la Corte Suprema de Justicia y ésta resolverá dentro de las veinticuatro horas lo que sea de justicia, con vista de las razones expuestas por el interesado.

Cuando por motivo de impedimento no pudiere interponerse la queja, el plazo empezará a contarse desde que cesó el impedimento.

**Artículo 72.** Si los Magistrados que han negado el Recurso de Exhibición Personal fueren declarados responsables sufrirán, además de las penas establecidas en el Código Penal, una multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario mensual, cada uno de ellos.

**Artículo 73.** Si la restricción de la libertad personal de que trata esta ley, procediera de una autoridad o funcionario que obra fuera de su órbita legal, el autor, cómplice o encubridor, incurrirá en una multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual sin perjuicio de las otras penas establecidas en el Código Penal.

#### **Capítulo IV**

##### **Recurso contra Particulares**

**Artículo 74.** Presentado en forma verbal o escrita el Recurso de Exhibición Personal contra el particular que restrinja la libertad personal de cualquier habitante de la República, el Juez dictará providencia ordenando la exhibición de la persona a él mismo o a su delegado.

**Artículo 75.** El delegado puede ser una autoridad que le esté subordinado o cualquier funcionario o agente de policía.

**Artículo 76.** El Juez o su delegado, en presencia de los motivos expuestos por el particular procederá en la forma siguiente:

1. Si el detenido lo fuere por haber sido sorprendido en flagrante delito, lo pondrá a la orden de la autoridad competente.
2. Si el que tiene bajo su custodia a otro fuere el padre o la madre, el guardador u otra persona a quien corresponde el derecho de

corrección doméstica se hubiere excedido, dispondrá por auto lo que fuere de justicia.

3. Si la restricción fuese cometida fuera de los casos de los incisos anteriores, pondrá inmediatamente en libertad al detenido sin necesidad de providencia, informará del hecho al Juez delegante, en su caso, quien pasará las diligencias a la Procuraduría General de Justicia.

**Artículo 77.** El particular contra quien se reclama obedecerá inmediatamente el mandato del Juez o delegado, quienes podrán pedir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan por causa de su renuencia, o por hechos delictivos que se hubieren derivado de su acción.

## **TÍTULO V**

### **DISPOSICIONES COMUNES Y FINALES**

#### **Capítulo I**

#### **Disposiciones Comunes**

**Artículo 78.** Los términos que establece esta Ley son improrrogables.

**Artículo 79.** El ejercicio de este derecho cabe aunque la violación que lo motiva no se haya manifestado por hechos, siempre que sea inminente la consumación de los mismos.

**Artículo 80.** Siempre que al declararse con lugar cualquiera de los recursos que establece esta Ley, apareciera que la violación cometida constituye delito se dará parte a quien corresponda deducir la responsabilidad por la infracción cometida.

**Artículo 81.** Los alcaides, guardas o encargados de la custodia de detenidos o presos, darán copia firmada de la orden de detención o prisión a las personas que custodian o al que los solicite en su nombre. Si la copia fuere denegada, o se retardara la entrega por más de veinticuatro horas, la persona a quien se le hubiere pedido incurrirá en una multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario mensual, la cual se impondrá en virtud de denuncia por el Juez para lo Criminal de Distrito o Local del lugar, sin perjuicio de la obligación de extender la copia y de la responsabilidad a que hubiere lugar.



**Artículo 82.** Las multas que se apliquen en virtud de esta Ley, serán impuestas por el Tribunal que conozca cualquiera de los recursos, y se harán efectivas por el Ministerio de Finanzas, aun mediante apremio corporal. Estas multas prescribirán conforme al derecho común.

**Artículo 83.** El Juez Ejecutor que se exceda en las facultades establecidas por esta Ley o que actúe en contra de Ley expresa será sancionado con multa del veinticinco por ciento de sus ingresos, sin perjuicio de otras responsabilidades.

**Artículo 84.** En el caso del artículo anterior queda facultado para conocer y resolver el Tribunal de Apelaciones sea de oficio o a petición de parte interesada.

## **Capítulo II**

### **Disposiciones Finales**

**Artículo 85.** Se derogan los Decretos N° 232 Ley de Amparo para la Libertad y Seguridad Personal, y N° 417 Ley de Amparo publicados en el Diario Oficial, La Gaceta N° 6 del 8 de Enero y N° 122 del 31 de Mayo, ambas de 1980.

**Artículo 86.** La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los dieciséis días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.  
"Por una Paz Digna, ¡Patria Libre o Morir!"- Carlos Núñez Téllez, Presidente de la Asamblea Nacional.- Rafael Solís Cerda, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: Téngase como Ley de la República.- Publíquese y Ejecútese. Managua, veintiuno de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. "Por una Paz Digna, "Patria Libre o Morir." Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República.

**Ley N° 205. Ley de reforma a los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo**

**LEY No. 205**

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

**LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

En uso de sus facultades:

**HA DICTADO**

La siguiente:

**LEY DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 6 Y 51  
DE LA LEY DE AMPARO**

**Art. 1.** Se reforma el artículo 6 de la Ley de Amparo el que se leerá así:

**Art. 6.** El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, cuando una ley, decreto o reglamento y en general cualquier acto normativo de rango inferior a la Constitución se oponga a lo prescrito en ella, en consecuencia no procede el recurso de Inconstitucionalidad contra la Constitución y sus Reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación.

**Art. 2.** Se reforma el artículo 51 de la Ley de Amparo el que se leerá así:

**Art. 51.** No procede el Recurso de Amparo:

1. Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia.

2. Contra el proceso de formación de la Ley, su promulgación o su publicación o cualquier otro acto o resolución legislativa.
3. Cuando hayan cesado los efectos del acto, reclamado o este se haya consumado de modo irreparable.
4. Contra los actos que hubieren sido consentidos por el agraviado de modo expreso o tácito. Se presumen consentidos aquellos actos por los cuales no se hubiere recurrido de Amparo dentro del término legal, sin perjuicio de la suspensión del término de conformidad al derecho común.
5. Contra las resoluciones dictadas en materia electoral.
6. Contra los actos relativos a la organización de los Poderes del Estado y el nombramiento y destitución de los funcionarios que gozan de Inmunidad.

**Art. 3.** La presente Ley será promulgada y publicada de inmediato por el Presidente de la República, quién no podrá ejercer el derecho al veto de conformidad con lo establecido por los Artículos 141, 194 y 195 de la Constitución Política de Nicaragua y se aplicará a la sustanciación y ritualidad de los recursos por inconstitucionalidad o de amparo que estuvieren en tramitación y entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los seis días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.

**LUIS HUMBERTO GUZMÁN**  
Presid. de la Asamblea Nacional

**JULIA MENA RIVERA**  
Secret. de la Asamblea Nacional

Por no haber publicado ni mandado a publicar el Presidente de la República la presente Ley N° 205, Ley de Reforma a los Artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 142 Cn. en mi carácter de Presidente de la Asamblea Nacional, mando a publicar; por tanto. – Publíquese y Ejecútese. Managua, veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

**LUIS HUMBERTO GUZMÁN**  
Presidente de la Asamblea Nacional

**SENTENCIA N° 98. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** Managua, diecisiete de agosto del año dos mil uno. Las nueve de la mañana.

**POR TANTO:**

De conformidad con las consideraciones hechas y Arts. 158, 160, 164 numeral 2), 167, 187, Cn. y Arts. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo y Arts. 413, 424 y 436 Pr. los suscritos MAGISTRADOS DIJERON: I. NO HA LUGAR al Recurso por Inconstitucionalidad Interpuesto por los señores: RICARDO ARGÜELLO PRAVIA, FRANCISCO ROSALES ARGÜELLO, EMILIO PEREIRA ALEGRÍA, PABLO VIJIL ICAZA, DIONISIO CUADRA KAUTZ, SERGIO NARVÁEZ SAMPSON, PABLO PEREIRA GALLARDO, FERNANDO GUZMÁN CUADRA, JULIO CÁRDENAS ROBLETO, MARIO GARACHE CASTELLÓN, DAYTON CALDERA SOLÓRZANO, MIRNA SOMARRIBA GARCÍA, RENÉ VALLECILLO QUIRÓZ, SALVADOR LEOPOLDO LÓPEZ GÓMEZ, SERGIO MARIO BLANDÓN LANZAS, SANDY RIVERA BOLT, JOSÉ SALVADOR ROBELO ORTIZ, ROBERTO JOSÉ GUZMÁN VÁSQUEZ, RAÚL LECLAIR LUGO, EDMUNDO ZÚÑIGA GARCÍA, FRANK CÉSAR REYES, JOAQUÍN LOVO TÉLLEZ, ERWIN KRUGER MALTEZ, FEDERICO MUÑOZ FERNÁNDEZ, ROSARIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, BOANERGES MATUS LAZO, ENRIQUE JOSÉ BRENES ICABALCETA, EDUARDO BELLÍ PEREIRA, BROOKLYN BRYAN y LEONEL BLANDÓN JUÁREZ, todos mayores de edad, casados y de este domicilio, en contra de las siguientes disposiciones contenidas en la Ley N° 205 "Ley de Reforma a los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo", Art. 1 que reforma el Art. 6 de la Ley de Amparo, en la parte que dice: "no procede el recurso por inconstitucionalidad contra la Constitución y sus reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la existencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación", Art. 2, que reforma el Art. 51 de la Ley de Amparo, en su inciso 2) Que no procede el Recurso de Amparo. "Contra el proceso de formación de la ley, su promulgación o su publicación", inciso 3) "Cuando hayan cesado los efectos del acto, reclamado o éste se haya consumado de modo irreparable", inciso 5) "Contra las resoluciones dictadas en materia electoral", inciso 6) "Contra los actos relativos a la organización de los Poderes del Estado y el nombramiento o destitución de los funcionarios que gozan de inmunidad" Art. 3 de la referida reforma de la Ley

de Amparo, en la parte conducente que dice: "se aplicará a la substanciación y ritualidad de los recursos por Inconstitucionalidad o de amparo que estuvieren en tramitación" y contra los vicios de procedimiento contenidos en la Ley N° 205 "Ley de Reforma a los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo". HA LUGAR AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra de las siguientes disposiciones contenidas en la Ley N° 205 "Ley de Reforma a los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo" que se refiere: a) Art. 2 que reforma el Art. 51 de la Ley de Amparo, inciso 2) en la parte conducente que dice que no procede el Recurso de Amparo: "o cualquier otro acto o resolución legislativa," por contravenir lo dispuesto en los Arts. 46 y 188 Ch. b) Asimismo, se declara de oficio la inconstitucionalidad en lo que se refiere al Art. 1 que reforma el Art. 6 de la Ley de Amparo, en la parte que dice: "y en general cualquier otro acto normativo de rango inferior," disposición que es inaplicable por contravenir lo dispuesto en el Art. 187 de la Constitución Política. El Señor Magistrado Doctor Marvin Aguilar García manifiesta que está de acuerdo con el Por Tanto de la sentencia, pero que la considera diminuta con relación al inciso 3 del Art. 2 que reforma el Art. 51 de la Ley de Amparo, este inciso contiene dos partes: Una, que recoge el inciso número dos anterior del Art. 51 que establecía que el Recurso de Amparo no procede cuando el acto reclamado se hubiere consumado de modo irreparable, contenido con el cual está totalmente de acuerdo, puesto que si el acto no puede repararse, no tiene sentido alguno que la Corte Suprema ampare al recurrente, ya que el acto de todas maneras sería irreparable. Pero otra cosa es el agregado nuevo que se le hace al decir que tampoco procede el Recurso de Amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, pues esto deja las puertas abiertas tanto a las Salas de lo Civil de los Tribunales de Apelaciones como a la propia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para declarar improcedente por inadmisibles Recursos de Amparo interpuestos contra actos cuyo efectos a juicio de los Magistrados puedan haberse cumplido, lo cual desvirtúa totalmente el objeto del Recurso de Amparo, ya que éstos mediante una sentencia de fondo pueden producir la restitución de las cosas al estado anterior previo al acto reclamado. Para citar un ejemplo, en el caso de un extranjero que recurra contra su expulsión del país, si no se declara inconstitucional la nueva redacción del Inco. 2 del Art. 51, los Magistrados de las mismas Salas de lo Civil

pudieran interpretar que los efectos del acto reclamado cesaron con la expulsión del extranjero del país aún cuando llegado al otro país continúe en libertad, y por lo tanto declarar inadmisibile un amparo interpuesto contra la expulsión, lo cual violaría una serie de derechos constitucionales establecidos en nuestra Constitución Política tanto para nicaragüenses como extranjeros: es por ello, que considero que se debe declarar también inconstitucional esa primera parte del Inco. 3 del Art. 2 que dice: "cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." Cópiese, notifíquese, envíese copia a los otros Poderes del Estado y publíquese en la Gaceta, Diario Oficial.

# **LEY DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Ley Nº 212, Gaceta, Diario Oficial

## **EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

Hace saber al pueblo nicaragüense que:

## **LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

### **Considerando:**

#### **I**

Que son principios sobre los que se fundamenta la nación nicaragüense: La libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico consignado en el Artículo 5 de la Constitución Política y la promoción, reconocimiento, respeto y protección de los derechos inherentes a la persona humana consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos comprendidos en el Artículo 46 de la Constitución Política.

#### **II**

Que como medio de hacer efectiva la promoción y defensa de los derechos humanos, la Ley 192 "Reforma Parcial a la Constitución Política" reformó el Artículo 138 atribuyéndole a la Asamblea Nacional el nombramiento del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

#### **III**

Que la construcción del Estado de Derecho nicaragüense exige como presupuestos básicos la promoción, defensa y tutela de los derechos humanos y por tanto, la creación y el fortalecimiento de instituciones de vigilancia y control de la actividad del Estado, como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que, de la mano de la Sociedad Civil, promuevan la defensa y vigencia de los derechos y libertades inherentes a la naturaleza y dignidad de la persona humana.



#### **IV**

Que el reconocimiento de los derechos y libertades de la persona, el respeto, promoción y tutela real y efectiva de los mismos y del principio de la seguridad jurídica en las relaciones entre el Estado y los individuos y de éstos entre sí debe ser fin primordial y razón de ser del Estado Democrático y Social de Derecho y del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

En uso de sus facultades;  
Ha Dictado  
La siguiente:

### **LEY DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**

#### **TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN**

##### **Artículo 1**

Créase la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como organismo Independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y administrativa.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estará a cargo de un Procurador y Subprocurador electo por la Asamblea Nacional en la forma establecida en la Constitución Política y en la presente Ley.

## **TÍTULO II**

### **DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Capítulo I**

##### **Objeto de la Ley**

##### **Artículo 2**

La presente Ley tiene por objeto la regulación de las funciones, carácter, objetivos, ámbito de competencia y atribuciones del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien en adelante se denominarán el Procurador y el Subprocurador.

El Procurador y el Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en su actividad, es independientes, no estarán supeditados a ninguna autoridad y actuarán sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes.

#### **Capítulo II**

##### **Naturaleza y Carácter**

##### **Artículo 3**

El Procurador es un Comisionado de la Asamblea Nacional electo por ésta para la promoción, defensa y tutela de las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus derechos humanos, a cuyo efecto podrá vigilar y controlar la actividad de la administración pública, dando cuenta a la Asamblea Nacional. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución Política y la presente Ley.

#### **Capítulo III**

##### **Objetivos fundamentales**

##### **Artículo 4**

La Procuraduría debe contribuir, con las instituciones y la sociedad civil, a garantizar dentro de un Estado de Derecho, la seguridad de las personas y los derechos humanos incorporados en el Artículo 46 de la Constitución Política.

El fin fundamental de la Procuraduría será coadyuvar para lograr una sociedad más libre y más justa, que posibilite el desarrollo de

mejores valores morales y políticos, por lo que deberá auspiciar la educación, la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos en su sentido más amplio; para ello debe promover la participación de todos los sectores sociales.

### **Artículo 5**

El Procurador debe promover, defender y tutelar los Derechos comprendidos en el Título IV de la Constitución Política de la República, velando por su cumplimiento de parte de los órganos de la administración pública; para tales efectos podrá supervisar sus actuaciones, a fin de que no se vulneren los derechos humanos por acciones u omisiones, informando públicamente.

## **Capítulo IV**

### **Ámbito material de competencia territorial y sede**

### **Artículo 6**

Para los efectos del artículo anterior se consideran como derechos tutelados los comprendidos en el Título IV de la Constitución y los consignados en los Artículos 46 y 71 del mismo cuerpo de Ley y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos que en el futuro sean ratificados por el Estado nicaragüense.

### **Artículo 7**

El Procurador para el ejercicio de sus funciones y atribuciones tendrá competencia en todo el territorio nacional, sin detrimento de lo establecido en el Artículo 28 de la Constitución Política. Su sede central estará ubicada en la ciudad de Managua, pudiendo establecer sedes permanentes o provisionales en cualquier parte de la República.

### **TÍTULO III DEL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS**

#### **Capítulo I Del nombramiento**

##### **Artículo 8**

El Procurador y el Subprocurador serán electos por la Asamblea Nacional, de listas propuestas por los Diputados en consultas con las asociaciones civiles pertinentes. Los candidatos propuestos serán electos con el voto favorable del sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional.

##### **Artículo 9**

El Procurador y el Subprocurador serán elegidos por la Asamblea Nacional por un período de cinco años. Tomarán posesión de sus cargos el día de su elección ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, previa promesa de ley.

#### **Capítulo II De las condiciones**

##### **Artículo 10**

El Procurador, Subprocurador y los Procuradores Especiales deben reunir las siguientes calidades:

- 1) Ser nacional de Nicaragua y no haber renunciado a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la hubiere recuperado cinco años antes a su elección.
- 2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser de reconocida solvencia moral y profesional, no poseer antecedentes penales ni haber estado involucrado en acciones violatorias a los Derechos Humanos.
- 3) Haber cumplido veinticinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco, al día de su elección.
- 4) Tener reconocida trayectoria y vocación en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y amplios conocimientos en la materia.

### **Capítulo III**

#### **De la Suspensión, Cesación y Sustitución**

##### **Artículo 11**

El Procurador y Subprocurador cesarán por algunas de las siguientes causas:

- 1) Por renuncia.
- 2) Por expiración del plazo de su nombramiento.
- 3) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
- 4) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
- 5) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme.

La vacante en el cargo se declarará por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en los casos de renuncia, expiración del período y muerte. En los demás casos se decidirá por el setenta por ciento de los Diputados, mediante debate y previa audiencia del Procurador o Subprocurador.

Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo procurador o subprocurador en un plazo no mayor de treinta días.

En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Procurador y en tanto no proceda la Asamblea Nacional a una nueva elección, desempeñará sus funciones interinamente el Subprocurador.

##### **Artículo 12**

En caso de proceso penal, la Asamblea Nacional declarará la suspensión en el ejercicio del cargo del Procurador o el Subprocurador, hasta tanto no se dicte sentencia firme.

##### **Artículo 13**

El Procurador y el Subprocurador cesarán en sus cargos cuando la Asamblea Nacional lo declare incurso en alguna de las causales establecidas en la Ley N° 190 "Ley sobre destitución del Contralor General de la República y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral", con arreglo al procedimiento establecido en dicha Ley.

### **Artículo 14**

El Subprocurador sustituirá al Procurador en casos de ausencia temporal.

## **Capítulo IV Prerrogativas, Incompatibilidades e Inhibiciones**

### **Artículo 15**

El Procurador y Subprocurador serán inamovibles durante el periodo para el cual fueron electos y gozarán de las mismas prerrogativas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

### **Artículo 16**

Los cargos de Procurador, Subprocurador y Procuradores Especiales son incompatibles:

- 1) Con el ejercicio de otro cargo público de elección directa o indirecta. Esta prohibición no comprende el ejercicio de la medicina y la enseñanza.
- 2) Con el desempeño de funciones en directivas nacionales, departamentales o municipales de partidos políticos y el ejercicio de actividades de propaganda política. La participación notoria dentro de un partido político, si lo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias al ser electos.
- 3) Con la condición de militar o policía en servicio activo o, no siéndolo, si lo fueren, deberán cesar en sus funciones al ser electos.
- 4) Con la calidad de ministro de cualquier culto religioso. Si lo fueren, deberán cesar en sus funciones al ser electos.

### **Artículo 17**

No podrán ser electos Procurador y Subprocurador los que tengan vínculos de parentescos entre sí, con el Presidente de la República y con los Diputados proponentes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

## **Capítulo V**

### **De las Atribuciones**

#### **Artículo 18**

Son atribuciones del Procurador:

- 1) Promover en la ciudadanía el estudio y la educación de la Constitución Política y los Derechos Humanos.
- 2) Orientar e instruir a las personas en el territorio nacional sobre el ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, libertades y garantías ante los agentes de la administración pública.
- 3) Promover el respeto de los derechos humanos y desarrollar programas participativos de promoción y educación para toda la sociedad.
- 4) Fiscalizar el apego de la administración pública y sus funcionarios en el respeto de los derechos humanos.
- 5) Investigar actuaciones de la administración pública de oficio o por denuncia, para esclarecer los actos u omisiones que vulneren los derechos humanos y remitir a los que resultaren presuntos culpables al organismo correspondiente para su debida sanción.
- 6) Solicitar la suspensión y la destitución de las autoridades, funcionarios y empleados públicos que con su actuación lesionen o pongan en peligro los derechos humanos, sin perjuicio de iniciar las acciones de responsabilidad civil o penal.
- 7) Establecer conclusiones y hacer recomendaciones en las investigaciones que realice, emitiendo censura pública ante los responsables de actos contrarios a los derechos humanos.
- 8) Practicar inspecciones en los locales de la administración pública que sean de su interés y requerir de los funcionarios información sin que pueda oponérsele reserva alguna.
- 9) Conocer los informes que el Estado envía al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos.
- 10) Procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos han sido violados o puestos en peligro con los presuntos responsables de la administración pública.
- 11) Vigilar la situación de las personas privadas de libertad en la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario Nacional.
- 12) Proponer reformas ante los órganos administrativos, tendientes a promover la tutela de los derechos humanos y recomendar la rectificación de acciones ilegales o arbitrarias.

- 13)Rendir informe anual a la Asamblea Nacional e informe especial cuando así lo crea necesario el Procurador o la Asamblea Nacional.
- 14)Proponer la suscripción y ratificación de tratados y convenios sobre derechos humanos.
- 15)Organizar su propia estructura y dictar el Reglamento interno necesario que regule el funcionamiento de su actividad administrativa.
- 16)Estimular la labor que en pro de los derechos humanos efectúen los organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como los medios de comunicación social.
- 17)Nombrar al Procurador de la Niñez y Adolescencia, y a la Procuraduría de la Mujer, y de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas y otros Procuradores especiales que estime pertinente, implementando métodos participativos para la postulación de candidatura.
- 18)Proponer y tramitar denuncias de parte de la población de violaciones a sus derechos humanos.
- 19)Las demás que le confiera la Ley.

### **Artículo 19**

El Procurador está facultado para promover que los miembros del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional coadyuven al respeto de los derechos humanos.

### **Artículo 20**

Las atribuciones se extienden a los actos y resoluciones de cualquier funcionario o persona que preste servicios en la administración pública, sin excepciones de ninguna naturaleza.

### **Artículo 21**

El Procurador podrá interponer recurso de Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política en los casos que considere necesario o imperativo.

Queda facultado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para interponer recursos de Amparo de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior.



## **Artículo 22**

Las atribuciones del Procurador no se suspenden ni se interrumpen en caso que se declare la suspensión de Derechos y Garantías.

En los Estados de Excepción supervisará la garantía de los derechos cuya vigencia no hubiese sido expresamente restringida.

## **Artículo 23**

El Subprocurador cumplirá las funciones que le indique el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las que se determinen en las normativas internas de la Institución.

Los Procuradores especiales de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer, de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas y demás Procuradores Especiales que sean nombrados tendrán competencia para conocer, en todo el territorio nacional, sobre casos referidos a la materia o ámbito asignado por el Procurador, a quien están directamente subordinados.

Los Procuradores Especiales cesarán automáticamente de sus cargos al momento de tomar posesión un nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos elegido por la Asamblea Nacional.

# **TÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO**

## **Capítulo I Iniciación y Contenido de la Investigación**

### **Artículo 24**

En el ejercicio de sus funciones el Procurador o sus delegados se regirán por los principios de oralidad, gratuidad, celeridad, inmediación, sencillez, brevedad y discrecionalidad.

### **Artículo 25**

Para el Procurador y sus delegados todos los días y horas son hábiles en el desempeño de sus funciones.

## **Artículo 26**

Las investigaciones de la Procuraduría pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte.

## **Artículo 27**

Toda persona puede interponer, ante la sede central, sedes permanentes o provisionales, denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos sin exclusiones de ninguna naturaleza, ya sea de nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, raza, creencia religiosa, credo político, incapacidad legal, internamiento en régimen penitenciario o policial y cualquier otra sujeción o dependencia de una administración o poder público.

En caso le sea solicitado y lo valorase conveniente, el Procurador podrá mantener en secreto la fuente de la cual deriva su información.

## **Artículo 28**

No se atenderán denuncias sobre hechos que estén pendientes de resolución judicial, salvo que se fundamenten en retardación de justicia.

En caso se decida no dar trámite a la denuncia por no prestar mérito, esto se dispondrá mediante resolución fundada y se informará al interesado, explicándole las razones e indicándole las vías que pueda ejercer sin perjuicio de que él realice la que considere más conveniente.

## **Artículo 29**

Recibida una denuncia y resuelto investigarla, deberá disponerse la investigación inmediata, contando para ello con ocho días a partir de la fecha en que interpuso la misma, al vencer dicho término y según las características del caso, el Procurador dictará una resolución inicial conforme lo dispuesto en Artículo 38 de esta Ley y podrá disponer de la ampliación del término de la investigación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley. Asimismo para agilizar la tarea investigativa del Procurador, el funcionario o actividad requerida o autoridad requerida presentará su informe en un plazo que no debe exceder de las setentidós horas.

## **Capítulo II**

### **Tramitación de la Denuncia**

#### **Artículo 30**

Toda denuncia se presentará por el interesado con indicaciones de su nombre, apellidos, domicilio, explicando el hecho denunciado. La denuncia podrá hacerse en papel común, por telegrama, fax, cartas y aun verbalmente, levantándose en este último caso, el acta correspondiente.

Todas las actuaciones de la Procuraduría serán gratuitas para el interesado y no será necesaria la asistencia legal, sin perjuicio del derecho que tiene el interesado a ser asistido por un abogado. De toda queja se acusará recibo.

#### **Artículo 31**

Toda correspondencia dirigida al Procurador remitida desde cualquier centro de detención, de trabajo, de estudio, de penitenciaría y de unidad militar no podrá ser objeto de censura de ningún tipo.

Tampoco podrá ser objeto de escucha, interferencia las conversaciones que se produzcan entre el Procurador o sus delegados o cualquier otra persona de las enumeradas en el párrafo anterior. La violación a estos preceptos constituyen responsabilidad penal o administrativa, según el caso. .

#### **Artículo 32**

Los funcionarios, empleados públicos y las personas en general deberán acudir ante el Procurador cuando sean citadas por él. En el caso de los militares y de los policías, las citaciones se harán a través de las autoridades jerárquicas correspondientes.

## **Capítulo III**

### **Inspección y Acceso a Documentación**

#### **Artículo 33**

El Procurador tendrá la facultad de inspeccionar cualquier instalación o dependencia de la administración pública, igualmente tendrá acceso a cualquier documentación, expediente o información de la misma.

El Procurador podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos, teniendo en consideración lo dispuesto en el Artículo 538 y siguientes del Código Penal.

Las investigaciones que realice y el expediente que levante el procurador y el personal dependiente del mismo, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, tanto con respecto a los particulares como a las dependencias y demás organismos públicos, sin perjuicio de las consideraciones que el Procurador considere oportuno incluir en sus informes a la Asamblea Nacional.

Cuando entienda que un documento declarado secreto y no remitido por la administración pudiera afectar de forma decisiva la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional.

#### **Artículo 34**

Todos los órganos, sus titulares y funcionarios de los poderes públicos, están en la obligación de prestar con carácter preferente y urgente la debida colaboración al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos o al funcionario que él delegue para tal fin.

#### **Artículo 35**

En los casos de que las autoridades, funcionarios o empleados públicos a los que se solicitara información o colaboración se negaren a ello incurrirán en el delito de desacato y en responsabilidades administrativas, según sea el caso. El Procurador hará referencia

en su informe anual de los casos en que los funcionarios se hayan negado a colaborar y dando cuenta al Procurador General de Justicia de la República para el ejercicio de las acciones legales correspondientes.

### **Artículo 36**

Los órganos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional están obligados a colaborar de manera preferente con el procurador en sus investigaciones, y en general a brindarle todas las facilidades para el desempeño de sus funciones.

## **Capítulo IV Ámbito de Competencia**

### **Artículo 37**

El Procurador en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisará por sí mismo la actividad de la administración pública del Estado, la administración municipal, de las regiones autónomas y las universidades en el ámbito de competencias definido por la Constitución Política y la Ley.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos de las regiones autónomas y las universidades, coordinarán sus funciones con las del Procurador y éste podrá solicitar su cooperación.

## **TÍTULO V DE LAS RESOLUCIONES**

### **Capítulo I Contenido de las Resoluciones**

### **Artículo 38**

El Procurador, una vez realizada la investigación inicial, emitirá una resolución en cualquiera de los siguientes términos:

- 1) Archivar la que resulte sin fundamento o insuficiente para presumir la violación de derechos humanos.
- 2) Indicar que se presume la violación de derechos humanos, profundizándose en las investigaciones.
- 3) Declarar que se comprobó la violación de derechos humanos.

### **Artículo 39**

En los casos en que se archive un expediente, éste será reabierto cuando hayan nuevos elementos que permitan presumir la violación de derechos humanos.

### **Artículo 40**

En los casos en que se presuma la violación de derechos humanos se continuarán las investigaciones, estableciéndose un plazo no mayor de 30 días para concluir las, mientras tanto se promoverán las acciones correctivas necesarias.

### **Artículo 41**

En los casos de una violación comprobada se procederá de la siguiente manera:

- 1) Iniciar o promover las acciones de responsabilidad y los recursos correspondientes para restablecer, defender y tutelar los derechos violados o en peligro de serlo.
- 2) Si la violación no es de orden penal podrá hacerle una advertencia al funcionario en una primera ocasión, en caso sucesivo podrá hacerle un recordatorio de sus deberes, enviando copia de ella al superior jerárquico.  
Si el caso lo amerita iniciará los procedimientos administrativos-disciplinarios correspondientes, para ello enviará informe al funcionario responsable y superior jerárquico, a quienes llamará ante él y les presentará los elementos probatorios en que funda su conclusión, posteriormente emitirá una resolución exclusivamente sobre la actuación del funcionario responsable de la violación, recomendando lo que estime a bien, ya sea una llamada de atención privada o pública, remoción en el cargo o su destitución.
- 3) Ante la comisión de un delito se trasladará el caso a la Procuraduría General de Justicia o ante la autoridad que le corresponda para que se ejerzan las acciones legales correspondientes.

### **Artículo 42**

En los casos que el funcionario público se negare dos veces consecutivas a darle seguimiento a las recomendaciones que hiciera el Procurador para la restitución de los derechos violados, será objeto de las sanciones establecidas en el Artículo 35 de la presente Ley, sin perjuicio del derecho de los Diputados a pedir su interpelación ante la Asamblea Nacional conforme lo dispuesto en el artículo 138, numeral 4) de la Constitución Política.

## **Capítulo II**

### **Notificación y Comunicación**

### **Artículo 43**

Las resoluciones del Procurador deberán ser notificadas a las partes interesadas. El procurador informará al interesado del resultado de sus Investigaciones y gestiones, así como de la respuesta que hubiese dado la administración o funcionarios implicados, salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas de carácter reservado o declaradas secretas.

### **Artículo 44**

El Procurador no podrá anular los actos y resoluciones de la administración pública.

### **Artículo 45**

El Procurador, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la administración pública, podrá sin embargo, sugerir la modificación de los criterios para remediar sus efectos inmediatos y futuros.

Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir a la Asamblea Nacional o a la administración pública la modificación de la misma.

## **TÍTULO VI**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **Informes a la Asamblea Nacional**

##### **Artículo 46**

El Procurador presentará a la Asamblea Nacional, el día diez de diciembre de cada año, un informe ordinario anual.

Asimismo, presentará a ésta informes especiales cuando la gravedad del caso, a su criterio, lo amerite, o por solicitud de la Asamblea Nacional.

##### **Artículo 47**

El informe ordinario anual deberá hacerse de manera circunstanciada de conformidad con sus fines y objetivos y con base a sus atribuciones y en los resultados de sus investigaciones.

También deberá informar a la Asamblea Nacional de la liquidación del Presupuesto anual de la Procuraduría.

Los informes extraordinarios contendrán los puntos que sean de interés, según criterio del Procurador o de la Asamblea Nacional.

## **TÍTULO VII**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **Régimen Financiero**

##### **Artículo 48**

El Estado está obligado a brindar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos suficiencia presupuestaria para su funcionamiento, con cargo al Presupuesto General de la República.

El Procurador formulará anualmente su anteproyecto de presupuesto anual y lo enviará a la Presidencia de la República.



### **Artículo 49**

La Procuraduría podrá adquirir los bienes necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, para tales efectos puede recibir herencias, donaciones y cualquier contribución ya sea de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin comprometer, ni condicionar su independencia y funcionamiento.

El Procurador en ejercicio de sus funciones como administrador de bienes del Estado deberá sujetarse a las disposiciones legales derivadas de las atribuciones de la Contraloría General de la República.

### **Artículo 50**

Los bienes e ingresos de la Procuraduría, en el ejercicio de sus funciones, estarán exentos de toda clase de impuesto y contribuciones fiscales, departamentales y municipales.

Además, la Procuraduría estará exenta del pago de los servicios públicos de agua, electricidad, teléfonos y correos.

## **TÍTULO VIII CAPÍTULO ÚNICO**

### **Disposiciones Finales y Transitorias**

#### **Artículo 51**

La elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y del Subprocurador se efectuará dentro de los sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley.

#### **Artículo 52**

En lo no previsto en esta Ley, se seguirán las reglas de las leyes vigentes de la nación en todo lo que sea aplicable.

#### **Artículo 53**

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

#### **Artículo 54**

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 141 Cn. y no será objeto de reglamentación.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los trece días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Luis Humberto Guzmán, Presidente de la Asamblea Nacional. Jaime Bonilla, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, ocho de enero de mil novecientos noventa y seis. Violeta Barrios de Chamorro, Presidente de la República de Nicaragua.

**LEY DE REFORMA A LA LEY Nº 212, "LEY DE LA  
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS  
HUMANOS"**

Ley Nº 471, Gaceta, Diario Oficial

**EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA**

Hace saber al pueblo Nicaragüense que:

**LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA**

En uso de sus facultades;

HA DICTADO

La siguiente:

**LEY DE REFORMA A LA LEY Nº 212, "LEY DE LA  
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS  
HUMANOS"**

**Artículo 1.** Se reforma el artículo 18, incisos 11 y 17 de la Ley Nº 212 "Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos", los cuales se leerán así:

**"Artículo 18.** 11) Vigilar a través del Procurador Especial de Cárceles la situación de las personas privadas de libertad en la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario Nacional.

17) Nombrar al Procurador de la Niñez y la Adolescencia, a la Procuraduría de la Mujer, Procurador de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, Procurador de Cárceles en Nicaragua y otros procuradores especiales que estime pertinente, implementando métodos participativos para la postulación de candidatos."

**Artículo 2.** Se reforma el artículo 23 el que se leerá así:

**Artículo 23.** El Subprocurador cumplirá las funciones que le indique el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las que se determinen en las normativas internas de las instituciones.

Los Procuradores Especiales de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer, de los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Étnicas, Procurador de Cárceles y demás procuradores especiales que sean nombrados tendrán competencia para conocer en todo el territorio nacional, sobre casos referidos a la materia o ámbito asignado por el Procurador a quien estarán directamente subordinados.

Los Procuradores Especiales cesarán automáticamente de sus cargos al momento de tomar posesión un nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos elegido por la Asamblea Nacional.”

Artículo 3. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, sin perjuicio de su posterior publicación en cualquier medio de comunicación social.

Dada en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los nueve días del mes de septiembre del dos mil tres. JAIME CUADRA SOMARRIBA, Presidente de la Asamblea Nacional. MIGUEL LÓPEZ BALDIZÓN, Secretario de la Asamblea Nacional.

Por Tanto: Téngase como Ley de la República. Publíquese y Ejecútese. Managua, tres de octubre de dos mil tres. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Presidente de la República de Nicaragua.

## **6. Sentencia N° 9. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

SENTENCIA N° 9. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Managua, seis de marzo de mil novecientos noventa y siete. Las nueve de la mañana.

### **POR TANTO:**

De conformidad con lo expuesto, considerandos hechos y Arts. 413, 424, 426, y 436 Pr., 160, 182, 183 y 167 Cn., y Arts. 6, 18 y siguientes de la Ley de Amparo, los suscritos Magistrados resuelven: ÚNICO: Se declara inconstitucional la Ley N° 190 denominada "Ley sobre destitución del Contralor General de la República y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral," publicada en el Nuevo Diario de fecha 27 de abril de 1995, en consecuencia, sus disposiciones carecen de valor legal alguno y por tanto son inaplicables. Cópiese, notifíquese y publíquese en La Gaceta, Diario Oficial. Esta sentencia está escrita en tres hojas de papel bond tamaño legal con membrete de la Corte Suprema de Justicia y rubricados por el Secretario de este Tribunal.

## **7. Resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Expediente 199-2002**

**PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.** Managua, primero de abril del año dos mil dos. Las cuatro con veinticinco minutos de la tarde. Se tiene a la vista para resolver, el expediente iniciado el día veinticuatro de enero del corriente año, sobre denuncia presentada por la señora Norma Sevilla de Mayorga, de presunta violación a los Derechos Humanos referidos al debido proceso, de su esposo el doctor FRANCISCO JOSÉ MAYORGA BALLADARES, señalando como responsable del hecho, al Licenciado Sabino Hernández Medina, Juez Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua.

### **Relación de los hechos:**

Que el día veinticuatro de enero del año dos mil dos, a las diez y doce minutos de la mañana esta Procuraduría recibió denuncia

escrita presentada por la Señora **NORMA SEVILLA DE MAYORGA**, mayor de edad, casada, de este domicilio, quien expresó que es esposa del Doctor Francisco José Mayorga Balladares, quien desde hace un año guarda prisión siendo inocente, encontrándose a la orden del Juez Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua, Licenciado Sabino Hernández, quien ha venido actuando de forma anómala en el proceso ya que ha existido una evidente retardación de justicia, justificando lo dicho mediante la exposición de hechos tales como: que en la causa 180-2001 de la cual fue apelada la sentencia interlocutoria el referido juez demoró tres meses en elevar el expediente al Tribunal de Apelaciones dicha demora dio pie a que el señor Mayorga fuera llevado ante el Tribunal de Jurado, sin que el Tribunal de Apelaciones tuviera tiempo para pronunciarse, afortunadamente el Tribunal de Jurado absolvió a su esposo. Más de forma asombrosa el mismo Juez ya había dictado un nuevo auto de prisión en contra del doctor Francisco Mayorga por la causa 234-2001, causa relacionada a acusación sobre los mismos hechos por los cuales ya había sido juzgado mediante causa 180-2001, de tal forma que siguió guardando cárcel siendo inocente y en espera de un nuevo jurado. Continuó expresando en su escrito la denunciante que al momento de conocer el veredicto de inocencia del señor Francisco Mayorga el Judicial Sabino Hernández dijo ante los medios de comunicación en una actitud claramente parcializada, que si el Jurado había dictado dicho veredicto era "Por el dominio escénico de doctor Mayorga o por el cansancio de los jurados". Además demoró nuevamente tres meses el traslado del expediente ante el Tribunal de Apelaciones, en un nuevo afán de llevar al procesado hasta un jurado. Expresa que la abogada de su esposo introdujo un recurso de implicancia en contra del referido Juez ya que se ha puesto de manifiesto el claro interés en el caso por su parte, sin embargo el Licenciado Sabino Hernández en un acto de arbitrariedad e interés por retener la causa en su jurisdicción, rechazó el recurso.

### **1. Diligencias Practicadas:**

1. Los días primero y veintiséis de febrero del año dos mil dos en correspondencia con la denuncia interpuesta por la señora Norma Sevilla de Mayorga, esta Procuraduría dirigió comunicación al Licenciado Sabino Hernández, Juez Séptimo de Distrito de lo

Penal de Managua, solicitándole información sobre los supuestos hechos denunciados.

2. El día veintiocho de febrero del año dos mil dos esta Procuraduría recibió comunicación remitida por el Licenciado Sabino Hernández Medina.
3. El día cinco de marzo del año dos mil dos se recibió del señor Francisco José Mayorga Balladares, mayor de edad, casado y de este domicilio, denuncia escrita en la que expone que está siendo víctima de un proceso persecutorio. El año pasado estuvo diez meses en prisión aguardando un jurado en el cual fue encontrado inocente de los cargos que se le habían imputado. A pesar de haber sido absuelto no fue puesto en libertad por existir una causa paralela por la cual se le dictó auto de prisión. En consecuencia tiene más de un año de estar en la cárcel sin sentencia firme, aguardando un segundo juicio, proceso que es contrario a la santidad de la cosa juzgada, puesto que se le pretende juzgarlo dos veces por los mismos hechos, los relativos a la liquidación del Banco del Café. Se trata de los mismos supuestos perjudicados (Banco del Café y Socios Minoritarios), los mismos sujetos pasivos (Varios Directivos del Banco del Café), los mismos supuestos delitos (Créditos relacionados con garantías de inferior valor al monto de los créditos) sin embargo el Juez Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua, inducido por el seccionamiento artificial de las supuestas evidencias aportadas por los acusadores, cayó en el error de abrir dos causas paralelas que debieron haberse acumulado.

Este mismo día cinco de marzo del año dos mil dos se recibió denuncia escrita del señor OMAR ERNESTO GONZÁLEZ CERDA, mayor de edad, casado, economista y del domicilio de Managua, en la que expresa que mediante la causa 180-2001 fue Juzgado por los delito de estafa y defraudación, en relación al Banco del Café del cual fue director, siendo los resultados del Juicio para él negativos ya que fue encontrado culpable. Que durante la instructiva de la causa 180-2001, el Juez Sabino Hernández recibió otro libelo acusatorio en su contra, así como las diligencias policiales sobre dos créditos relacionados similares a los que se examinaron en la citada causa. El judicial, en vez de acumular todo en una sola causa, como correspondía, procedió a engavetar dichas diligencias para abrir en forma paralela una

segunda causa, la 234-2001. Rola en autos desde el primer folio, que esa causa nace el veintiuno de Febrero del año dos mil uno, cuando el auto de prisión de la causa 180 -2001 data del veintitrés de Febrero de año dos mil uno. Posteriormente, acumuló en la segunda causa las diligencias policiales sobre préstamos que habían sido cancelados desde septiembre de dos mil. Las referidas diligencias policiales fueron llevadas a cabo entre el cinco de diciembre de dos mil y el doce de febrero del año dos mil uno.

4. Ante las nuevas denuncias presentadas por Francisco José Mayorga Balladares y Omar González, por estar relacionadas a la denuncia hecha por la señora Norma Sevilla de Mayorga, se agregan al mismo expediente 199-2002 que inició esta institución en enero del corriente año.

#### **Ante los hechos narrados y considerando:**

- I. Que el artículo 52 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, establece que todos los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva a los Poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca. Sobre la base de lo antes señalado, esta Procuraduría considera oportuno y necesario, investigar y brindar una respuesta a los ciudadanos que han concurrido ante esta Institución, a demandar la restitución de los derechos humanos vulnerados.
- II. Que el fin fundamental de la "Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos" es contribuir con las instituciones estatales y la sociedad civil, a garantizar dentro de un Estado de Derecho, la seguridad de las personas y los derechos humanos incorporados en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, por lo tanto deberá promover, defender y tutelar los derechos comprendidos en el título IV de la misma, velando por su cumplimiento por parte de los funcionarios de la administración pública, para tales efectos podrá supervisar sus actuaciones, a fin de que no se vulneren tales derechos.



- III. Que esta Procuraduría conforme a las facultades que confiere la Ley 212, "LEY DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS", tiene como función, fiscalizar el apego de la administración pública y sus funcionarios en el respeto de los derechos humanos, así como investigar actuaciones de los funcionarios de la administración pública, para esclarecer las acciones u omisiones que vulneren los derechos humanos y hacer recomendaciones a fin de que las personas que resultaren culpables de dichas violaciones, sean remitidas a la instancia competente para la aplicación de las medidas que correspondan según el caso.
- IV. Que ante la solicitud de esta Procuraduría para obtener el informe sobre la denuncia presentada, el judicial respondió haciendo a esta institución el recordatorio que dentro de las garantías Constitucionales existe la garantía de doble instancia, mediante la cual toda persona tiene derecho a recurrir a un tribunal superior para que su causa sea revisada y la causa aún se encuentra pendiente de Resolución, en consecuencia la Ley 212 prohíbe atender denuncias en esta situación aún de oficio. Si bien es cierto el Art. 28 de la Ley 212 establece expresamente: "No se atenderán denuncias sobre hechos que estén pendientes de Resolución Judicial, salvo que se fundamenten en Retardación de Justicia." En el caso que nos ocupa no puede invocarse tal artículo para dejar de conocer el caso, ya que en las tres denuncias interpuestas ante esta Procuraduría se alega la violación al Derecho al Debido Proceso por la existencia de Retardación de Justicia y por otro lado el hecho de existir ya una Sentencia (causa 180\_2001) obliga a esta instancia a tutelar los Derechos Consignados en el artículo 34 inciso 10 Cn.
- V. Que según diligencias judiciales estudiadas sobre expedientes 180-2001 y 234-2001, con fecha doce de febrero del año dos mil uno a las cinco y diez minutos de la mañana en el Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua en virtud de denuncia interpuesta por la ciudadana MANUELA MIRANDA PÉREZ se abrió autocabeza de Proceso en contra de los señores FRANCISCO JOSÉ MAYORGA BALLADARES y OMAR GONZÁLEZ CERDA, entre otros, por los supuestos delitos de Asociación

ilícita para delinquir, Proposición, Estafa, Fraude, Concusión, Apología del Delito, Delito contra la buena fe en los negocios, Usurpación de Identidad, Extorsión, Falsificación de Documentos Públicos y Auténticos. El día trece de Febrero del año dos mil uno bajo el expediente 180 -2001 en el Juzgado Sexto de Distrito de lo Penal de Managua a la una y cincuenta minutos de la tarde se abrió autocabeza de proceso en contra de Francisco José Mayorga Balladares, Omar González Cerda y otros ante denuncia interpuesta por la Doctora Ada Luz Valerio Barrera, en su calidad de Procuradora Auxiliar Penal de Justicia del Departamento de Managua por los supuestos delitos de Estafa, Defraudación y Delitos contra la buena fe en los negocios, en perjuicio de Luis Orlando Bárcenas Reyes, César Augusto Bravo Silva, Joaquín Hernán Estrada Santamaría, Guillermo Ruiz Tablada **y en perjuicio del Banco del Café, sus ahorrantes o Depositantes y sus accionistas Minoritarios.** Ese mismo día trece de Febrero del año dos mil uno la Juez Sexto de Distrito de lo Penal de Managua mediante auto de las cinco y cincuenta y tres minutos de la tarde exhorta al doctor Sabino Hernández Medina, Juez Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua para que informe si en su Juzgado se conoce causa en contra de Omar Ernesto González Cerda, Francisco Mayorga Balladares y otros, fecha de autocabeza de proceso, número de expediente y fase en la que se encuentra, informándole que en su Juzgado se encontraba radicada una causa y además le transcribe el autocabeza de proceso. Con fecha catorce de Febrero el Juez Séptimo de Distrito Penal de Managua contesta el exhorto informando a la Juez Sexto que bajo el expediente Judicial 180-01 se levantó autocabeza de proceso en fecha doce de Febrero del año dos mil uno, a las cinco y diez minutos de la tarde contra los ciudadanos Francisco José Mayorga Balladares, Omar González Cerda y otros por los supuestos delitos de Asociación ilícita para delinquir, Estafa, Fraude, Concusión, Apología del Delito, Delito contra la buena fe en los negocios, Usurpación de Identidad, Extorsión, Falsificación de Documentos Públicos y Auténticos, Extorsión, en perjuicio de la ciudadana Manuela Miranda Pérez y el expediente se encuentra en fase instructiva. En vista de lo anterior este mismo día catorce de Febrero son remitidas las diligencias del Juzgado Sexto de Distrito de lo

Penal de Managua, al Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua, instancia en la que mediante auto de las siete y treinta minutos de la noche da por recibidas las diligencias provenientes del Juzgado Sexto de Distrito de lo Penal donde se procesan a los ciudadano Omar Ernesto González Cerda, Francisco José Mayorga Balladares y otros por presuntos delitos de estafa, Defraudación y Delito contra la buena fe en los Negocios en perjuicio de Luis Orlando Bárcenas Reyes, Cesar Augusto Bravo Silva, Joaquín Hernán Estrada Santamaría, Guillermo Ruiz Tablada, el Banco del Café, sus Ahorrantes o Depositantes **y sus accionistas minoritarios** (incluye a todos los accionistas minoritarios sin excepción aún cuando personalmente no interpongan denuncia alguna). Radicándolos en ese despacho Judicial de conformidad con el Art. 357 In. Acumúlese a la causa 180-2001 por existir identidad de sujetos, objeto, confirmando todo lo actuado por el Juzgado Sexto de Distrito de lo Penal de Managua. Con fecha veintitrés de Febrero del año dos mil uno el judicial emite Sentencia Interlocutoria, en la que resuelve sobreseer definitivamente a los Procesados Francisco José Mayorga Balladares, Omar González Cerda y Otros por los delitos Contra la Buena Fe en los Negocios, Proposición, Fraude, Concusión, Apología del Delito, Falsificación de Documentos Públicos y Auténticos, Usurpación de Identidad y Extorsión y decreta auto de segura y formal prisión sobre Francisco José Mayorga Balladares y otros, debido a que de la instructiva levantada en su contra se comprobó la existencia de conductas delictivas y existen suficientes elementos para imputarles la autoría de los delitos de estafa y defraudación en perjuicio del Banco del Café, representada por la Junta liquidadora, de los socios minoritarios Luis Orlando Bárcenas Reyes, César Augusto Bravo Silva, Joaquín Hernán Estrada Santamaría, Guillermo Ruiz Tablada y Empresa de Servicios de Seguridad Privada S.A. representado por Antonio Castillo Lanzas, respectivamente. Cabe señalar que anterior a dicha Sentencia Interlocutoria, exactamente el día veintidós de Febrero del año dos mil uno a las diez y treinta minutos de la mañana en el referido Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua fue presentado escrito de la denuncia hecha por el señor Francisco Extaniel Rodríguez Torres en contra del señor

Francisco José Mayorga Balladares por ser el presunto autor de los delitos de Estafa y Mala fe en los Negocios en perjuicio del denunciante en su calidad de accionista minoritario, siendo los hechos que fundamentan su denuncia, los mismos por los cuales ya se había abierto autocabeza de proceso en contra de los señores Mayorga y González y por los mismos delitos. Así mismo en su escrito de denuncia el señor Francisco Extaniel Rodríguez Torres pide **que su denuncia sea acumulada y agregada a la causa Radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal en donde se procesa al Doctor Mayorga por la misma causa.** Con fecha veintiuno de Febrero del año dos mil uno la Oficina de Recepción y Distribución de causas remitió al Juzgado Séptimo Expediente Policial No. 013, expresándole en el Memorando de remisión que la presente acusación no acompañaba boleta debido a que ya existía causa radicada en su Despacho contra los procesados en mención por los mismos delitos. Podemos observar claramente que el judicial tuvo la oportunidad de ordenar la acumulación de autos, pues del estudio de los expedientes es obvio que la información aun cuando constituía un todo fue remitida en distintos momentos pero con antelación a que el Juez dictara su sentencia interlocutoria, pues consta en autos que la Oficina de Causa remitió oportunamente y de manera directa los nuevos expedientes policiales y denuncias de terceros, ya que siendo que en dicho Juzgado se estaba conociendo la causa a prevención de los otros jueces de distrito, los recibiera y procediera conforme a Derecho, es decir que todo fuera conocido mediante un mismo proceso y resolver igualmente mediante una sola sentencia, siendo evidente la oportunidad que tuvo para acumular las diligencias. Sin embargo el judicial decidió de forma perjudicial a los procesados seccionar las denuncias, aún cuando en los dos expedientes existiera juzgamiento sobre mismos hechos (operaciones crediticias). A criterio de esta Procuraduría es tanta la mala actuación del judicial, que a pesar de contar el mismo con la información y no acumularla, la retuvo sin motivo alguno cayendo incluso en flagrante retardación de Justicia, ya que dictó autocabeza de Proceso hasta cinco días después de recibidas las denuncias que fueron radicadas en el expediente 234-2001. Es conclusión

desde todo punto de vista el que pudo haber acumulado las denuncias pues estaba bien claro que en ellas y las ya radicadas bajo el expediente 180-2001 había identidad de Sujetos Procesales y objeto. Así mismo el arto 359 establece que la acumulación de autos puede decretarse de oficio o a petición de parte en cualquier tiempo, a lo que hizo caso omiso el Juez Séptimo a pesar de haberle sido solicitada esta acumulación por las partes, y es así entonces como el Judicial abre un autocabeza de proceso de la causa 234-2001, donde evidentemente ocurre un doble Juzgamiento.

- VI. Que a consideración de esta Procuraduría existió negligencia en el procedimiento al dejar sin incluir en el expediente 180-2001, las diligencias referidas, para luego abrirlas en un nuevo expediente, cuando todas las pretensiones debieron haberse reunido en una sola causa y así evitar la violación al debido proceso pues como consecuencia de llevar dos causas paralelas, al Doctor Mayorga después de haber sido encontrado inocente por un tribunal de Jurado, se le ha mantenido en estado de Detención ilegal en espera de un segundo Jurado sobre los mismos hechos y supuestos delitos, lesionándosele de una manera superlativa sus derechos constitucionales y en el caso del señor Omar González Cerda si bien es cierto fue condenado por el tribunal de Jurado, al haberse abierto una causa en la que se le acusa por los mismos delitos y fundamentados en los mismos hechos igualmente se le violentan sus derechos, al ser Juzgado dos veces cuando existe ya una sentencia definitiva sobre los referidos hechos y delitos, esto es claro a la simple lectura de la sentencia Interlocutoria de la Causa 234-2001 la que establece: 1.- Ha lugar a imponer auto de segura y formal prisión al procesado Francisco José Mayorga Balladares y Omar González Cerda y otros por el delito de estafa y defraudación en perjuicio del extinto Banco del Café de Nicaragua en liquidación (Socios Minoritarios), cuando por los mismos delitos y en perjuicio de las mismas personas mediante Sentencia Definitiva del expediente 180-2001 se absolvió al señor Francisco José Mayorga Balladares y fue condenado a 12 años de prisión el señor Omar González Cerda. Así mismo se evidencia la negligencia judicial ya que además de no existir

motivos reales para la apertura de la causa 234-2001, en esta se han dado una serie de violaciones al debido proceso cometidos a consecuencia de una evidente retardación de Justicia, pues el autocabeza de proceso debió haberse dictado dentro de las veinticuatro horas de recibidas las denuncias en el despacho del judicial más este fue dictado cinco días más tarde (las diligencias fueron recepcionadas los días veintiuno y veintidós de Febrero del año dos mil uno y el autocabeza de proceso data del veintiocho de febrero del año dos mil uno). La sentencia interlocutoria que declara el auto de prisión en contra de los señores Omar González Cerna y Francisco José Mayorga Balladares fue emitida ocho meses después de abierto el auto cabeza de proceso, a pesar de establecer el Art. 177 In. que las primeras diligencias de instrucción se terminan dentro de diez días, si el reo estuviere aprehendido (caso que nos ocupa) y en veinte días a más tardar si el reo no estuviere detenido.- En la causa 234-2001 el Juez muestra una actitud totalmente contraria a la mostrada en el expediente 180-2001 en el cual la sentencia interlocutoria fue dictada dentro de los diez días establecidos por Ley, por supuesto que tal cosa es la correcta e igual debió suceder con el expediente 234-2001, pues si aún cuando la lógica y el derecho le exigían al Juez acumular todos los sucesos y no hacerlo de esta manera lo que debió suceder es que el Juez una vez dictada la Sentencia Interlocutoria en la causa 180-2001 esperar a que la causa 234-2001 erróneamente abierta estuviese a la misma altura de la 180-2001 para en el espíritu de economía procesal y evitar un doble juzgamiento sobre sucesos que equivocadamente fueron divididos pero que en la realidad sabemos corresponden a mismos hechos y mismos delitos, juntarlas en un mismo expediente y someterlas en conjunto al conocimiento del Tribunal de Jurado.

- VII. Que a nuestro criterio la actuación del Juez Séptimo de Distrito es contraria al principio jurídico consignado en nuestra constitución de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. El Art. 34 inciso 10 Cn. señala como derecho del procesado "no ser procesado nuevamente por el delito por el que ya fue condenado o absuelto mediante Sentencia Firme" y el arto 46 del mismo cuerpo de Leyes incorpora a

la Constitución Política los Derechos consignados en las Convenciones y Declaraciones internacionales de Derechos Humanos entre los que encontramos el Pacto de San José, el que al referirse a las garantías judiciales en su Art. 8, inciso 4 dice literalmente: "el inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevos juicios por los mismos hechos. No permitiendo esta norma la mínima posibilidad de acusar al absuelto por nuevo delito fundado en los mismos hechos. Considerando esta institución, que en tal sentido debe ser aplicado para efectivamente evitar la violación de las garantías constitucionales del procesado ya que de permitir lo contrario el judicial estaría atentando contra la seguridad Jurídica de las personas.- El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14 inciso 7 dice: "Nadie podrá ser Juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la Ley y el procedimiento penal de cada país. El Art. 76 Pn. Establece: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por consiguiente está claro que tal error en la actuación judicial no puede ni debe ser permitido, ya que constituye un antecedente que pone en peligro nuestro Estado de Derecho al exponer a toda persona a ser juzgada doblemente.

VIII. A nuestro criterio tampoco cabe la actuación del Juez Séptimo de Distrito debido a que los acusadores, obligados por la Ley Penal debieron juntar o acumular sus acciones en una misma causa, ya que la ley es expresa al establecer que luego de resuelto el caso no cabe ninguna otra acusación. Sin embargo al revisar las diligencias judiciales observamos en el autocabeza de proceso del expediente 180-2001, el cual fue abierto el catorce de Febrero del año dos mil uno a las siete y treinta minutos de la noche que éste deja establecido que se dieron por recibidas las diligencias del Juzgado Sexto de Distrito de lo Penal, donde se procesan a los ciudadanos OMAR ERNESTO GONZÁLEZ CERDA y FRANCISCO JOSÉ MAYORGA BALLADARES y otros por presuntos delitos de estafa Defraudación y delito contra la buena fe en los negocios en perjuicio de Luis Orlando Barcenas Reyes, Cesar Augusto Bravo Silva, Joaquín Hernández Estrada Santamaría, Guillermo Ruiz Tablada, el Banco del Café, sus



**ahorrantes o Depositantes y sus Accionistas Minoritarios** (es obvio que debe estar incluido el señor Extaniel Rodríguez) un motivo más por el cual el Judicial estaba obligado a acumular al exp. 180-2001 la denuncia presentada por éste, ya que todos los accionistas minoritarios estaban representados a través de la denuncia interpuesta por la Procuraduría Penal de Justicia.

- IX. Otro fundamento que sustenta el doble Juzgamiento a que están siendo sometidos los señores Francisco José Mayorga Balladares y Omar González Cerda es el hecho de que los supuestos ilícitos encontrados por el Juez Hernández Medina en la causa 180-2001 Estafa y Defraudación en Perjuicio del Banco del Café y de los socios minoritarios, son los mismos que alega haber encontrado en el expediente 234-2001 y en perjuicio de los mismos sujetos Banco del Café y Socios Minoritarios y fundamentado en las mismos hechos cumpliéndose de tal forma los tres requisitos que dan vida a la Cosa Juzgada Identidad de Sujetos Procesales, Identidad de Objetos, Identidad de causa a pedir.
- X. Que el Art. 45 de la Ley 212 expresa que el Procurador, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la administración pública, podrá sin embargo, sugerir la modificación de los criterios para remediar sus efectos inmediatos y futuros. Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento riguroso de que la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir a la Asamblea Nacional o a la administración pública la modificación de la misma. En el caso que nos ocupa esta Procuraduría con los fundamentos anteriormente señalados dejó establecido que la actuación del Juez Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua fue errónea y negligente y que con la misma está violentando el derecho al debido proceso de los señores Francisco José Mayorga Balladares, Omar Ernesto González Cerda y de otros que se encuentren en iguales circunstancias dentro del referido proceso judicial aún cuando no aparezcan nombrados en esta Resolución, en consecuencia lo procedente sería que anule el proceso que de



forma errónea abrió en la causa 234-2001 y en el caso del señor Francisco José Mayorga Balladares recupere su libertad, la que de manera ilegal le está siendo negada y en el caso del señor Omar Ernesto González Cerda, sea el Tribunal de Apelaciones quien decide ya que la causa 180-2001 se encuentra ante esa honorable instancia.

**Del análisis de la denuncia, investigaciones realizadas, consideraciones descritas, leyes y tratados internacionales citados y tomando como fundamento el artículo 38, inc. 3) de la Ley 212, "Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos", el suscrito Procurador al resolver,**

**Declara:**

Que existe violación de los derechos humanos al debido Proceso, como consecuencia de la Retardación de Justicia e incumplimiento al Principio de Legalidad al haber sido juzgado dos veces por el mismo delito, en perjuicio de los señores Francisco José Mayorga Balladares, Omar Ernesto González Cerda y otros mencionado en los dos autos de prisión, la que fue ocasionada por el Juez Séptimo de Distrito de lo Penal de Managua, Licenciado Sabino Hernández, por lo que fundamentado en las atribuciones establecidas en los artículos 18 al 23 y lo referido en el artículo 41 de la Ley 212 se establecen las siguientes recomendaciones:

1. Que el Licenciado Sabino Hernández, proceda a lo inmediato y de conformidad con lo que establece nuestra legislación penal y procesal a revisar lo actuado en la causa 234-2001.
2. Que es de vital necesidad que la Corte Suprema de Justicia, instruya de manera eficiente a través de la capacitación continua a sus jueces, a fin de que en un futuro muy cercano se pueda prevenir la comisión de actuaciones erróneas de los Judiciales que lesionen de forma flagrante los derechos humanos de nuestra sociedad, ya que si bien es cierto corresponde a todos construir una sociedad donde impere el Estado Derecho, es el poder judicial quien tiene la potestad en sus manos de aplicar las leyes a como se debe.

3. Que en un término no mayor de quince días a partir de la fecha de la presente resolución, el licenciado Sabino Hernández, Juez de Distrito de lo Penal de Managua, informe a esta Procuraduría sobre el cumplimiento de las recomendaciones antes señaladas.

Notifíquese la presente Resolución a las partes.-

**BENJAMÍN PÉREZ FONSECA**  
**Procurador**

*18.02.13  
 Lp 127 60.04.10*

200680515  
 040.112 G-216 EJ.6  
 García Vilchez, Julio Ram  
 Mecanismos Institucionales

VENCE	NOMBRE Y APELLIDOS
17 OCT 2013	
14 MAY 2013	
15 FEB 2013	
31 1 2013	

La publicación de la obra que ahora tiene usted entre sus manos es consecuencia de la labor conjunta de la Universidad Centroamericana y el Centro Nicaragüense de Estudios de Derecho, que como entidades que comparten el amor por la Ciencia, han puesto sus esfuerzos en propiciar la creación de un espacio de comunicación de obras nacionales que contribuyan al desarrollo del pensamiento, en este caso jurídico, tan útil y tan esencialmente necesario para el avance y fortalecimiento de la convivencia pacífica en nuestro país.

